



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



PERIÓDICO OFICIAL
**GACETA
DEL GOBIERNO**

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México



Dirección: Mariano Matamoros Sur núm. 308, C.P. 50130.

Registro DGC: No. 001 1021

Características: 113282801

Fecha: Toluca de Lerdo, México, jueves 29 de febrero de 2024

SUMARIO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

DECRETO NÚMERO 239.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.

CONSEJERÍA JURÍDICA

ACUERDO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA LA TERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DE LA LICENCIADA DANIELA GOÑI ROJO, COMO NOTARIA INTERINA DE LA NOTARÍA PÚBLICA 151 Y SE DECLARA LA REINCORPORACIÓN AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DEL LICENCIADO JOSÉ GOÑI DÍAZ, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 151 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.

CONSEJERÍA JURÍDICA – SECRETARÍA DE LAS MUJERES

ACUERDO DEL CONSEJERO JURÍDICO Y DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “CANASTA ALIMENTARIA PARA VÍCTIMAS DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN”.

ACUERDO DEL CONSEJERO JURÍDICO Y DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA “REPARACIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO DE FEMINICIDIO”, PARA EL ESTADO DE MÉXICO.

ACUERDO DEL CONSEJERO JURÍDICO Y DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA VALENTINA “ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR EL DELITO DE FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN”, PARA EL ESTADO DE MÉXICO.

ACUERDO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL “FONDO ESTATAL DE DESAPARICIÓN” A QUE SE REFIERE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.

AVISOS NOTARIALES

AVISO NOTARIAL POR EL QUE SE DA A CONOCER A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.

AVISO NOTARIAL POR EL QUE SE DA A CONOCER A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EL REINICIO DE FUNCIONES DEL LICENCIADO JOSÉ GOÑI DÍAZ, COMO NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 151 CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.



TOMO

CCXVII

Número

39

300 IMPRESOS

“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”. SECCIÓN SEGUNDA

A:202/3/001/02

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO.

Al margen Escudo del Estado de México, un logotipo, que dice: Estado de México ¡El poder de servir!, una leyenda, que dice: GUBERNATURA, Oficina de la Gobernadora.

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

La H. "LXI" Legislatura del Estado de México decreta:

DECRETO NÚMERO 239

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Educación del Estado de México.

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

Título Primero Del derecho a la educación

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de México.

Su objeto es regular la educación impartida en el Estado de México por parte de las autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados y desconcentrados, los municipios y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

La educación se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. La distribución de la función social educativa, se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación.

Artículo 3. La autoridad educativa estatal fomentará la participación de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Estatal, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones de la entidad federativa, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades educativas del Estado de México y de los municipios, en los términos que establece la Ley General en el marco de distribución de competencias.

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

- I. Autoridad educativa federal: a la Secretaría de Educación Pública;
- II. Autoridad educativa estatal: a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, sus organismos descentralizados y desconcentrados en el ámbito de su competencia;
- III. Autoridad educativa municipal: al Ayuntamiento de cada Municipio del Estado de México;
- IV. Autoridades educativas: a la autoridad educativa estatal y municipal;

- V.** Autoridades escolares: al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares;
- VI.** Comunidad educativa o comunidad escolar: al grupo de personas integrado por directivos escolares, docentes, personal de apoyo, alumnos, padres de familia y demás agentes que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada institución educativa;
- VII.** Educación dual: al proceso de construcción de saberes dirigido por una institución para la vinculación de la teoría y la práctica en estrecha relación entre escuela y empresa, que permite generar inversión en infraestructura educativa de talleres y laboratorios, incluye desarrollar prácticas efectivas de los estudiantes en estos espacios, y también las estancias laborales que realizan en los espacios industriales y empresariales, integrando al estudiante en estancias laborales para desarrollar y fortalecer sus habilidades y aptitudes, propiciando mejores condiciones para su inserción laboral;
- VIII.** Educando: a las y los alumnos o estudiantes del Sistema Educativo Estatal;
- IX.** Entidad federativa: al Estado de México;
- X.** Estado: a la Federación, el Estado de México y sus Municipios;
- XI.** Gestión menstrual: al derecho que tienen prioritariamente las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de menstruar como parte de sus derechos sexuales y reproductivos, cuya finalidad principal es alcanzar la igualdad de género y espacios libres de violencia y discriminación;
- XII.** Ley General: a la Ley General de Educación;
- XIII.** Personal docente: a los profesionales de la educación del Sistema Educativo Estatal que asumen ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje y, en consecuencia, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje como promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo.
- Además, se entenderá como sinónimos, maestras y maestros;
- XIV.** Personal con funciones de dirección: a quienes realizan la planeación, programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable;
- XV.** Secretaría: a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México, y
- XVI.** Tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital: a las herramientas que facilitan el desarrollo de las habilidades, saberes y competencias digitales, asimismo potencian la creatividad y motivación de las y los alumnos, y fortalecen la labor del personal docente.

Capítulo II **Del ejercicio del derecho a la educación**

Artículo 6. En el Estado de México toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.

El Gobierno del Estado de México dispondrá las medidas para que los certificados médicos de los educandos que se requieran para sus trámites escolares se emitan sin costo alguno.

La autoridad educativa estatal ofrecerá a las personas oportunidades equitativas de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.

Además, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial, especial y superior, apoyará la investigación científica, tecnológica y humanística, alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura estatal, nacional y universal. Se fomentará la educación dual, en los tipos de educación media superior y superior, en los términos que las disposiciones normativas en la materia determinen.

Artículo 7. Todas las personas habitantes del Estado de México deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Es obligación de madres, padres de familia o tutores, hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la Ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

La educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la Ley General y esta Ley.

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

Capítulo III De la educación en el Estado de México

Artículo 8. El Estado buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Las acciones que desarrolle tendrán como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Estatal, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad.

Artículo 9. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para:

- I. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo;
- II. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social;
- III. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso;
- IV. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y
- V. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Artículo 10. En el Estado de México se fomentará en las personas una educación basada en:

- I. La identidad y el sentido de pertenencia, además del respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;
- II. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros;
- III. La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural, político y económico, y
- IV. El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles.

Artículo 11. La educación que se imparta por el Estado, además de obligatoria, se sujetará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la Ley General, será:

- I. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual por lo que:
 - a) Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
 - b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales;
- II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que:
 - a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos;
 - b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;
 - c) Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, y
 - d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud;
- III. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que:
 - a) Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la Nación y del Estado de México, y
 - b) Vigilará que, la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Estatal que se determinen en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que:
 - a) Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado;
 - b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos, y
 - c) Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia, además tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin, y
- V. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la Ley General.

Artículo 12. La educación impartida en el Estado de México, sus organismos descentralizados y particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los fines que establece el párrafo cuarto del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la Ley General, los cuales son:

- I. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de manera plena sus capacidades, a través de la mejora continua del Sistema Educativo Estatal;
- II. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general;

- III. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo trato y oportunidades para las personas;
- IV. Fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios, las instituciones nacionales y estatales;
- V. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias;
- VI. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones;
- VII. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la Nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo; así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país y del Estado de México;
- VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático;
- IX. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país y del Estado de México, y
- X. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país y del Estado de México.

Artículo 13. La educación impartida en el Estado de México, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de Gobierno.

Además, responderá a los criterios previstos en la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo establecido en la Ley General, de acuerdo a lo siguiente:

- I. Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
- II. Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
- III. Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas;
- IV. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia;
- V. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia; así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad;
- VI. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos;
- VII. Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

- VIII. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida y del reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión social;
- IX. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social, y
- X. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Título Segundo Del Sistema Educativo Estatal

Capítulo I De la naturaleza del Sistema Educativo Estatal

Artículo 14. El Sistema Educativo Estatal es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que se imparta en el Estado de México, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias.

Artículo 15. A través del Sistema Educativo Estatal se articularán y coordinarán los esfuerzos de las autoridades educativas, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos en esta Ley.

Artículo 16. El Sistema Educativo Estatal participará en la programación estratégica que se realice en el marco del Sistema Educativo Nacional para que la formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y contribuya a su mejora continua en el Estado de México.

Artículo 17. En el Sistema Educativo Estatal participarán, con sentido de responsabilidad social, los actores, instituciones y procesos que lo componen y será constituido por:

- I. Los educandos;
- II. Las maestras y los maestros que prestan sus servicios en el Subsistema Educativo Estatal y en el Subsistema Educativo federalizado, así como de los organismos públicos descentralizados, sectorizados a la Secretaría;
- III. Las madres y los padres de familia o tutores, así como sus asociaciones;
- IV. Las autoridades educativas del Estado de México;
- V. Las autoridades escolares;
- VI. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas de la entidad federativa en la prestación del servicio público de educación;
- VII. Las instituciones educativas del Estado de México y sus organismos descentralizados, los sistemas y subsistemas establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia educativa del Estado de México;
- VIII. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;
- IX. Las instituciones de educación superior a las que la Ley otorga autonomía;
- X. Los planes y programas de estudio;
- XI. Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación;
- XII. Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados conforme a esta Ley;
- XIII. Los Comités Escolares de Administración Participativa que se conformen de acuerdo con las disposiciones aplicables, y

XIV. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación en el Estado de México.

La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo Estatal; los lineamientos para su funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 18. La educación que se imparta en el Sistema Educativo Estatal se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente:

- I. Tipos: los de educación básica, media superior y superior;
- II. Niveles: los que se indican para cada tipo educativo en esta Ley;
- III. Modalidades: la escolarizada, no escolarizada y mixta, y
- IV. Opciones educativas: las que se determinen para cada nivel educativo en los términos de esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a distancia.

Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Estatal la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física, la educación artística y la educación tecnológica.

La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en esta Ley.

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá impartirse educación comunitaria con programas o contenidos particulares para ofrecerle una oportuna atención.

Artículo 19. La educación en sus distintos subsistemas, tipos, niveles, modalidades y opciones educativas responderá a la diversidad lingüística, regional, sociocultural, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios, además de las características y necesidades de los distintos sectores de la población del Estado de México.

Capítulo II **Del tipo de educación básica**

Artículo 20. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria.

Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son:

- I. Inicial escolarizada y no escolarizada;
- II. Preescolar general, indígena y comunitario;
- III. Primaria general, indígena y comunitaria;
- IV. Secundaria, entre las que se encuentran la general, técnica, comunitaria, indígena o las modalidades regionales autorizadas por la autoridad educativa federal;
- V. Secundaria para trabajadores, y
- VI. Telesecundaria.

De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir educación especial, incluidos los Centros de Atención Múltiple.

Artículo 21. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de tres años, y para nivel primaria seis años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

Artículo 22. En educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las condiciones para la prestación universal de ese servicio.

Las autoridades educativas impartirán educación inicial de conformidad con los principios rectores y objetivos de la que determine la autoridad educativa federal en términos de la Ley General.

Además, fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación, con el apoyo de los sectores social y privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos

internacionales. Para tal efecto, promoverán diversas opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el seno de las familias y a nivel comunitario, en las cuales se proporcionará orientación psicopedagógica y serán apoyadas por las instituciones encargadas de la protección y defensa de la niñez.

Artículo 23. El Estado impartirá la educación multigrado en el tipo de educación básica, la cual se ofrecerá, dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación.

Para dar cumplimiento a esta disposición, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, atenderán los criterios establecidos en el artículo 43 la Ley General.

Capítulo III Del tipo de educación media superior

Artículo 24. La educación media superior comprenderá los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes y se ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica.

Las autoridades educativas del Estado de México podrán ofrecer, entre otros, los siguientes servicios educativos:

- I. Bachillerato General;
- II. Bachillerato Tecnológico;
- III. Bachillerato Intercultural;
- IV. Bachillerato Artístico;
- V. Profesional técnico bachiller;
- VI. Telebachillerato comunitario, y
- VII. Educación media superior a distancia.

Estos servicios se podrán impartir en las modalidades y opciones educativas señaladas en la presente Ley, como la educación dual con formación en escuela y empresa. La modalidad no escolarizada estará integrada, entre otros servicios, por la educación a distancia y aquellos que operen con base en la certificación por evaluaciones parciales.

Artículo 25. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán, de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos.

De igual forma, implementarán un programa de capacitación y evaluación para la certificación que otorga la instancia competente, para egresados de bachillerato, profesional técnico bachiller o sus equivalentes, que no hayan ingresado a educación superior, con la finalidad de proporcionar herramientas que les permitan integrarse al ámbito laboral.

En el Estado de México se promoverá la educación dual, conforme a lo establecido en esta Ley y las demás disposiciones normativas aplicables.

Artículo 26. El tipo de educación media superior en el Estado de México se integrará y operará conforme al sistema que coordina la autoridad educativa federal. Dicho sistema responderá, en términos de la Ley General, al marco curricular común a nivel nacional con la participación de la Comisión Estatal de Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de México.

El Sistema Estatal de Educación Media Superior del Estado de México se integrará por:

- I. Colegio de Bachilleres del Estado de México;
- II. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México;
- III. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica;
- IV. Centros de Bachillerato Tecnológico;

- V. Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México;
- VI. Planteles de telebachillerato comunitario, y
- VII. Sus equivalentes.

Artículo 27. Con la finalidad de formular políticas, estrategias, programas y metas en materia de educación media superior, se crea la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de México.

La autoridad educativa estatal emitirá las disposiciones necesarias para su integración y su funcionamiento.

Capítulo IV Del tipo de educación superior

Artículo 28. La educación superior está compuesta por:

- I. Niveles: técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades;
- II. Modalidades: escolarizada, no escolarizada, mixta, dual y las que determinen las autoridades educativas de educación superior y las instituciones de educación superior, de conformidad con la normatividad aplicable, y
- III. Opciones: presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia, certificación por examen y las demás que se determinen por las autoridades educativas e instituciones de educación superior, a través de las disposiciones que se deriven de la Ley General de Educación Superior.

Artículo 29. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas.

Artículo 30. En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas concurrirán con la autoridad educativa federal para garantizar la gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo educativo, en los términos que establezca la Ley de la materia, priorizando la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo el territorio estatal. En todo momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la Ley otorga autonomía.

Artículo 31. La autoridad educativa estatal participará y coadyuvará con la autoridad educativa federal, en el Registro Nacional de Opciones para Educación Superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior, así como los requisitos para su acceso.

Para tal efecto, la autoridad educativa estatal dispondrá las medidas para que las instituciones de educación superior públicas y privadas proporcionen los datos para alimentar el Registro Nacional de Opciones para Educación Superior.

La información del registro al que se refiere este artículo será pública, y difundida de manera electrónica e impresa a través de los medios de comunicación determinados por la autoridad educativa federal.

Artículo 32. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes. Determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que en los términos que señale la Ley en la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el establecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, además, opciones de formación continua y actualización para responder a las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico.

Artículo 33. Las autoridades educativas respetarán el régimen jurídico de las universidades a las que la Ley les otorga autonomía, en los términos establecidos en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica, entre otros, reconocer su facultad para ejercer la libertad de cátedra e investigación, crear su propio marco normativo, la libertad para elegir sus autoridades, gobernarse a sí mismas, y administrar su patrimonio y recursos.

Capítulo V Del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación

Artículo 34. En el Estado de México se reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la cultura.

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán el desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación científica para el beneficio social y el desarrollo de las actividades productivas de la entidad federativa.

Artículo 35. El fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación que realicen las autoridades educativas, se ajustarán de conformidad con lo establecido en la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

En el caso de la investigación que se realice en las ciencias sociales y específicamente en educación, se impulsará una estrategia para que ésta sea fuente constante de información y conocimiento para la toma de decisiones de política pública educativa, atendiendo las necesidades diversas de la población en todas las regiones de la entidad.

Artículo 36. El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la actualización, a la excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del conocimiento se apoyará en las nuevas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de acceso abierto en términos de las disposiciones aplicables.

Capítulo VI De la educación indígena

Artículo 37. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones de las autoridades educativas, desde el ámbito de su competencia contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas del Estado de México como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, reconocimiento, promoción y preservación del patrimonio histórico y las culturas del Estado de México.

Artículo 38. Las autoridades educativas consultarán de buena fe y de manera previa, libre e informada, culturalmente adecuada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa, relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 39. En materia de educación indígena, las autoridades educativas realizarán lo siguiente, entre otras acciones:

- I. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad;
- II. Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías;
- III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, en las diversas lenguas de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas;
- IV. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes;
- V. Tomar en consideración, en las opiniones que emitan para la elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para favorecer su reconocimiento en la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar;
- VI. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe, y
- VII. Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un marco de inclusión, reconocimiento y enriquecimiento de las diferentes culturas.

Capítulo VII De la educación humanista

Artículo 40. En la educación que imparta el Estado se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza.

De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades para su participación en los procesos productivos, democráticos y comunitarios.

Artículo 41. El Estado generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar el conocimiento crítico, así como la difusión del arte y las culturas.

Se adoptarán medidas para que, dentro de la orientación integral del educando, se promuevan métodos de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que exprese sus emociones a través de manifestaciones artísticas y se contribuya al desarrollo cultural y cognoscitivo de las personas.

Capítulo VIII De la educación inclusiva y especial

Artículo 42. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.

La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el Sistema Educativo para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos.

Artículo 43. La educación inclusiva tiene como finalidad favorecer el aprendizaje de todos los educandos en los tipos y niveles educativos, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Para tal efecto, las acciones del Estado buscarán:

- I. Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana;
- II. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos;
- III. Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria;
- IV. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Estatal por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras;
- V. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas, y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación, y
- VI. Proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida, que favorezcan su inclusión laboral, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad.

Artículo 44. Se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales, aptitudes sobresalientes o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia y de conformidad a los lineamientos y criterios orientadores para la prestación de los servicios de educación especial que emita la autoridad educativa federal, para atender a los educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, realizará lo siguiente:

- I. Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, derivados por una condición de salud, para garantizar el derecho a la educación de los educandos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación;
- II. Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, procurando en la medida de lo posible su incorporación a todos los servicios educativos, sin que esto cancele su posibilidad de acceder al servicio escolarizado;
- III. Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación obligatoria;

- IV. Establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación;
- V. Garantizar la formación de todo el personal docente para que, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, y preste los apoyos que los educandos requieran;
- VI. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos con alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma inclusión a la vida social y productiva, y
- VII. Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras del aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación.

Artículo 45. Para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas:

- I. Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, otros modos, materiales, ayudas técnicas, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario;
- II. Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana dependiendo de las capacidades del educando y la enseñanza del español para las personas sordas;
- III. Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los lenguajes, los modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social;
- IV. Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad, y
- V. Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades.

Artículo 46. En el Sistema Educativo Estatal se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente Ley, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en las demás disposiciones normativas aplicables.

Capítulo IX De la educación para personas adultas

Artículo 47. El Estado ofrecerá acceso a programas y servicios educativos para personas adultas en distintas modalidades que consideren sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales.

Esta educación proporcionará los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo a través de diversos tipos y modalidades de estudio, así como una orientación integral para la vida que posibilite a las personas adultas formar parte activa de la sociedad, a través de las habilidades, conocimientos y aptitudes que adquiera con el proceso de enseñanza aprendizaje que el Estado facilite para este fin.

Artículo 48. La educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Artículo 49. Las personas beneficiarias de la educación referida en este Capítulo podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 83 y 145 de la Ley General. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva.

Las autoridades educativas organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para personas adultas. Promoverán ante las instancias competentes, se darán facilidades necesarias a trabajadores y sus familiares para estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior.

Quienes participen voluntariamente proporcionando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social.

Título Tercero Del Proceso Educativo

Capítulo I De la orientación integral en el proceso educativo

Artículo 50. La orientación integral en el proceso educativo comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza aprendizaje, acorde con este criterio.

Artículo 51. La orientación integral, en la formación de las y los educandos de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, considerará lo siguiente:

- I. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica;
- II. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos;
- III. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos, y de comunicación;
- IV. El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación;
- V. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico;
- VI. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestión y organización;
- VII. El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad;
- VIII. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos;
- IX. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad;
- X. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas, y
- XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica.

Artículo 52. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes, interculturales tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva.

Artículo 53. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

Las instituciones educativas deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres de familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los educandos que les permitan lograr un mejor aprovechamiento.

Artículo 54. La autoridad educativa estatal en el ámbito de su competencia, fomentará, la enseñanza y aprendizaje integral del idioma inglés para que el educando sea integrado de manera social, económica y cultural en el mundo, sin menoscabo de la enseñanza del español y de lenguas indígenas, asimismo, la formación económica y financiera con contexto estatal, nacional e internacional.

Capítulo II De los planes y programas de estudio

Artículo 55. Los planes y programas cumplirán con los requisitos establecidos en la Ley General, además favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país.

Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación del aprendizaje y de acreditación, se establecerán de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como a las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas.

Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado y que se derive de la aplicación del presente Capítulo, serán los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos de la Ley General, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito. Las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas cualquier situación contraria a este precepto.

Artículo 56. La autoridad educativa estatal aplicará los planes y programas de estudio emitidos por la autoridad educativa federal en educación preescolar, primaria, secundaria, educación normal y demás aplicables para la formación de maestras y maestros de educación básica, de conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 12 y 13 de esta Ley.

Las autoridades educativas emitirán su opinión ante la autoridad educativa federal respecto a los planes y programas de estudio, asimismo será considerada la de los diversos actores sociales involucrados en la educación sobre el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales del Estado de México.

Las autoridades educativas podrán solicitar a la autoridad educativa federal actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio, para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje.

En la elaboración de los planes y programas de estudio a los que se refiere este artículo, se podrán fomentar acciones para que emitan su opinión las maestras y los maestros, así como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De igual forma, serán consideradas las propuestas que se formulen de acuerdo con el contexto de la prestación del servicio educativo y respondan a los enfoques humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación, entre otros, para la recuperación de los saberes locales.

Los planes y programas de estudio en educación media superior atenderán el marco curricular común que sea establecido por la autoridad educativa federal con la participación de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de México, con el propósito de contextualizarlos a sus realidades regionales. La elaboración de planes y programas de estudio de los bachilleratos de universidades públicas autónomas por ley se sujetará a las disposiciones correspondientes.

Artículo 57. Los planes y programas que la autoridad educativa federal determine en cumplimiento de la Ley General, así como sus modificaciones, se publicarán en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios, conforme a las disposiciones aplicables.

En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y de los organismos descentralizados correspondientes.

Capítulo III De las Tecnologías de la Información, Comunicación, y Aprendizaje Digital en el proceso educativo

Artículo 58. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial, se utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semi presencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población.

Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos.

Artículo 59. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la formación y capacitación de maestras y maestros para desarrollar las habilidades necesarias en el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para favorecer el proceso educativo.

Asimismo, fortalecerán los sistemas de educación a distancia, mediante el aprovechamiento de las multiplataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías antes referidas.

Artículo 60. La autoridad educativa estatal promoverá acciones para combatir la brecha digital en el Estado de México, con el impulso permanente de estrategias de alfabetización digital para toda la población.

La autoridad educativa estatal promoverá la formación y educación digital, utilizando para ello los espacios de las instituciones públicas disponibles en cada comunidad; e incluso, los recursos tecnológicos con que cuentan las instituciones educativas, bajo el principio de que las escuelas son del pueblo y pueden ser utilizadas por toda la población. Se tomarán en consideración los tiempos de atención y aprendizaje pertinentes para la población.

Artículo 61. La autoridad educativa estatal procurará de manera progresiva el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente el servicio gratuito de internet en espacios educativos para el uso de la comunidad escolar únicamente para fines académicos o culturales.

Capítulo IV **De la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento** **de los Servicios de Educación Básica y Media Superior**

Artículo 62. La autoridad educativa estatal, emitirá la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, el cual será un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios educativos en el Estado de México.

Artículo 63. La elaboración de la Guía a la que se refiere este Capítulo se apegará a las disposiciones y lineamientos de carácter general que emita la autoridad educativa federal. En dicha Guía se establecerán los elementos de normalidad mínima de la operación escolar, cuyo objetivo es dar a conocer las normas y los procedimientos institucionales y, con ello, facilitar la toma de decisiones para fortalecer la mejora escolar.

Capítulo V **Del calendario escolar**

Artículo 64. En el Estado de México se aplicará el calendario escolar que determine la autoridad educativa federal, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos.

Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa estatal y de conformidad con los lineamientos que expida la autoridad educativa federal, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables.

Artículo 65. En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la orientación integral del educando, a través de la práctica docente, actividades educativas y otras que contribuyan a los principios, fines y criterios de la educación, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables.

Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido o, en su caso, ajustado el correspondiente calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario señalado por la autoridad educativa federal.

De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa, tomará las medidas para recuperar los días y horas perdidos.

Artículo 66. La autoridad educativa estatal publicará en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", las autorizaciones de ajustes al calendario escolar determinado por la autoridad educativa federal.

Capítulo VI **De la participación de madres y padres de** **familia o tutores en el proceso educativo**

Artículo 67. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

Artículo 68. Las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia y otros temas que permitan a madres y padres de familia o tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 69. Las madres y padres de familia o tutores procurarán su participación efectiva a través de reuniones presenciales o virtuales para la prevención de la violencia escolar, las adicciones, la promoción de la educación psicoemocional, los valores y la comunicación sana. Cuando se trate de reuniones mensuales de prevención podrán hacer uso de las plataformas electrónicas que la autoridad escolar establezca para su fin.

Artículo 70. Las madres y padres de familia o tutores revisarán periódicamente las mochilas y bolsos de los educandos que cursen educación básica y media superior, antes de su ingreso a las instituciones de educación pública o privada a efecto de prevenir cualquier introducción de objetos o sustancias prohibidas y con ello prevenir cualquier tipo de violencia.

Artículo 71. Las madres y padres de familia o tutores participarán en los procedimientos que impliquen la revisión de mochilas o bolsos de sus hijas, hijos o pupilos que cursen educación básica y media superior en las instituciones de educación pública o privada.

Capítulo VII

De otros complementos del proceso educativo

Artículo 72. Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de educandos que las requiera sea mayor de veinte. Estos planteles quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa estatal.

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la autoridad educativa local en igualdad de circunstancias.

La autoridad educativa estatal, podrá celebrar con los patrones convenios para el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente artículo.

Artículo 73. La formación para el trabajo deberá estar enfocada en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que permitan a la persona desempeñar una actividad productiva, mediante alguna ocupación o algún oficio calificado. Se realizará poniendo especial atención a las personas con discapacidad con el fin de desarrollar capacidades para su inclusión laboral.

Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta por la autoridad estatal, los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares. La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 74. Las autoridades escolares en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán en función de necesidades específicas y contextos de los educandos, la capacidad de gestión de la comunidad escolar para solicitar la impartición de talleres de artes, oficios y demás actividades extracurriculares para los educandos.

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán y promoverán la política pública relacionada con el fomento a la lectura, de acuerdo con lo establecido con las disposiciones normativas aplicables.

Título Cuarto Del educando

Capítulo I Del educando como prioridad en el Sistema Educativo Estatal

Artículo 75. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

Artículo 76. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma.

Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:

- I. Recibir una educación de excelencia;
- II. Ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo de agresión física o moral;
- III. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad;
- IV. Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión;
- V. Recibir una orientación educativa y vocacional;
- VI. Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral, para lo cual la autoridad educativa estatal realizará los nombramientos y basificaciones correspondientes, al inicio de cada ciclo escolar o semestre, implicando contar permanentemente con escenarios prospectivos de la relación de oferta y demanda docente;
- VII. Participar de los procesos que se deriven en los planteles educativos como centros de aprendizaje comunitario;
- VIII. Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;
- IX. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las disposiciones respectivas, y
- X. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El Estado establecerá los mecanismos que contribuyan a su formación integral, tomando en cuenta los contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos en la elaboración y aplicación de las políticas educativas en sus distintos tipos y modalidades.

Artículo 77. La autoridad educativa estatal creará para cada educando desde educación inicial hasta media superior, un expediente único en el que se contengan los datos sobre su trayectoria académica. En todo momento, se atenderán las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La información del expediente al que se refiere este artículo se proporcionará a la autoridad educativa federal para atender el Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos y demás disposiciones aplicables que se expidan previstos en la Ley General.

Artículo 78. Cuando el educando sea de nuevo ingreso la autoridad educativa solicitará por única ocasión como requisito de inscripción para cualquier nivel educativo, tanto en instituciones públicas como privadas, el acta de nacimiento la cual no deberá de presentar tachadura, enmendadura o alteración que impida tener certeza jurídica de su validez oficial en los planteles educativos, sin importar su fecha de expedición.

Artículo 79. El Estado ofrecerá servicios de orientación educativa, de trabajo social y de psicología desde la educación básica hasta la educación superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las necesidades de cada plantel, a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida para su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades.

Artículo 80. La autoridad educativa estatal implementará políticas públicas educativas con perspectiva transversal de infancia y de juventud, de manera permanente, para abatir el rezago educativo y la deserción escolar. Para los sectores que padecen discriminación, marginación y falta de oportunidades, recibirán la orientación y el apoyo correspondiente.

La Secretaría implementará un Sistema Estatal para la Atención de la Deserción y Abandono Escolar para diseñar, operar estrategias y acciones acordes a las condiciones personales y socioeconómicas de los estudiantes.

Capítulo II

Del fomento de estilos de vida saludables en el entorno escolar

Artículo 81. La distribución y comercialización de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de las escuelas de educación básica, deberán sujetarse a los lineamientos y demás disposiciones aplicables que emita la autoridad educativa federal.

La autoridad educativa estatal realizará acciones de vigilancia para que en los alimentos y bebidas que se preparen y procesen al interior de las escuelas cumplan con el valor nutritivo para la salud de los educandos.

Artículo 82. Las autoridades educativas promoverán en su respectivo ámbito de competencia ante las instancias correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares.

Artículo 83. La autoridad educativa estatal atenderá las bases que la autoridad educativa federal establezca para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, se considerará a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas.

Artículo 84. Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal y a las demás disposiciones aplicables.

Artículo 85. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán celebrar convenios de colaboración interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones de carácter alimentario para los educandos, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas ubicadas en zonas de pobreza, alta marginación y vulnerabilidad social.

Asimismo, se fomentará e impulsará el respeto, reconocimiento, valoración e importancia de la agricultura en la vida del ser humano.

Artículo 86. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, contribuirán al desarrollo de una cultura de la salud, promoviendo la educación física, la práctica del deporte, los hábitos de higiene y de sana alimentación, promoverán y fomentarán la educación sobre salud bucodental, la práctica de hábitos de higiene dental. Así como la educación sexual y reproductiva, la salud e higiene menstrual y la prevención de adicciones a través del conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Artículo 87. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la cultura del cuidado del agua, enfocada a soluciones creativas para la captación del agua, con el fin de darle un uso racional y responsable.

Artículo 88. El Gobierno del Estado de México proporcionará el suministro efectivo, gratuito e irrestricto de productos para la gestión menstrual a niñas y adolescentes, de acuerdo con la suficiencia presupuestal disponible, priorizando a las niñas y adolescentes educandas que se encuentren en zonas de alta marginación, lo cual les permitirá tener un desarrollo integral; para ello las instituciones educativas y de salud, deberán priorizar a aquellas instituciones ubicadas en localidades con alta marginación.

Para cumplir con lo establecido en este artículo, las autoridades educativas, desde sus respectivos ámbitos de competencia llevarán a cabo entre otras, las siguientes acciones:

- I. Ofrecer material didáctico y capacitación adecuada en materia de salud y gestión menstrual a los docentes, con la finalidad de brindar herramientas que permitan orientar a las y los estudiantes, de manera prioritaria a aquellas y aquellos que se encuentran en de zonas de alta marginación de acuerdo con la suficiencia presupuestal disponible;
- II. Diseñar e implementar planes, programas y acciones donde se priorice el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la igualdad de género y la gestión menstrual, así como otorgar becas y demás apoyos económicos para productos relacionados con la menstruación, de acuerdo con la suficiencia presupuestal disponible priorizando a las niñas y adolescentes educandas que lo requieran por su situación socioeconómica;
- III. Emitir los criterios para el diseño e implementación de planes, programas y acciones donde se priorice el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la igualdad de género y la gestión menstrual, así como para el otorgamiento de becas y demás apoyos económicos para este tipo de gestión de acuerdo con la suficiencia presupuestal disponible;

- IV. Promover acciones de capacitación y difusión, dirigidas a las madres, padres de familia o tutores, para que orienten adecuadamente sobre educación sexual integral y reproductiva, de salud y gestión menstrual de sus hijos o pupilos, así como para fortalecer la integración familiar, y
- V. Diseñar e implementar políticas públicas que atiendan el bienestar, el ejercicio de la sexualidad y los proyectos individuales de vida, trabajo y convivencia de niñas, adolescentes y mujeres, mediante las cuales se les respeten todos sus derechos humanos y no sufran discriminación, desigualdad ni violencia.

Capítulo III **De la cultura de la paz, convivencia democrática en las** **escuelas y entornos escolares libres de violencia**

Artículo 89. En la impartición de educación para menores de dieciocho años, las autoridades educativas en su respectivo ámbito de competencia tomarán las medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan.

Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para capacitar a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la probable comisión de algún hecho que la Ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento a la autoridad correspondiente con previo e inmediato informe a quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia de la o el menor de dieciocho años.

Artículo 90. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.

Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

- I. Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de la paz, para fortalecer la cohesión comunitaria y una convivencia democrática;
- II. Promover en la formación docente contenidos y prácticas relacionadas con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos;
- III. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas;
- IV. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios electrónicos;
- V. Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, física o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las medidas para atender dicha problemática;
- VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de las escuelas;
- VII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes con previo e inmediato informe a quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia de la o el menor de dieciocho años las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes por el ejercicio de

cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales;

- VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social;
- IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y modalidades de maltrato escolar, así como coordinar campañas de información sobre las mismas, y
- X. Velar por espacios libres de toda forma de violencia, con la finalidad de otorgar condiciones de bienestar y del libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 91. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento del artículo 90 de esta Ley. Entre los protocolos que emita, deberán encontrarse para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 92. La autoridad educativa estatal realizará la contratación de un seguro escolar contra accidentes para los educandos que cursen el tipo básico dentro del Sistema Educativo Estatal. Dichas disposiciones contendrán los esquemas de subsidios que, en su caso, contemple el Gobierno Estatal.

Las escuelas con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán contar con una póliza vigente de seguro de gastos médicos para los educandos que cubra el accidente escolar e indemnización por muerte accidental en el plantel educativo.

Artículo 93. La autoridad educativa estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverá una cultura de masculinidades positivas en los planteles educativos.

Título Quinto De la revalorización de las maestras y los maestros

Capítulo I Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo

Artículo 94. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social.

La revalorización de las maestras y los maestros persigue los siguientes fines:

- I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos;
- II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización;
- III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer su liderazgo en la comunidad;
- IV. Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, para proponer soluciones de acuerdo a su contexto educativo;
- V. Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre la carga administrativa;
- VI. Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en el ámbito donde desarrolla su labor;
- VII. Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa;
- VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional, y

IX. Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 95. La autoridad educativa estatal promoverá la investigación educativa y su financiamiento, a través de programas permanentes y de la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación. Los resultados de esta acción constituirán un insumo para el diseño de la política pública educativa en el Estado de México.

La Secretaría podrá proponer ante la instancia competente, un presupuesto extraordinario destinado para la realización de investigación educativa y actividades inherentes a esta.

La investigación educativa que se realice en las Escuelas Normales del Estado de México tendrá un enfoque aplicado a las propias instituciones y para el desarrollo regional de la educación inicial, básica y media superior.

La asignación de plazas con categoría de investigador educativo deberá apegarse a criterios estrictamente académicos, por lo que los aspirantes deberán cumplir con perfiles óptimos para el desarrollo de la investigación educativa.

Los docentes con nombramiento de investigador educativo estarán adscritos a las Escuelas Normales y al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y deberán acreditar esta función.

Artículo 96. La Secretaría garantizará que todo el personal que laboren en el Sistema Educativo Estatal sea reconocido salarialmente de acuerdo con la plaza y función efectivamente desempeñada.

Asimismo, reconocerá y respetará los acuerdos minutados que ha suscrito con las representaciones sindicales de los trabajadores de la educación del Subsistema Educativo Estatal y del Subsistema Educativo Federalizado.

Artículo 97. La autoridad educativa estatal y los municipios que impartan educación básica, efectuarán las acciones necesarias para que los movimientos y pagos de ese personal, se realicen a través de un sistema de administración de nómina, en el cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel, modalidad educativa y la clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, conforme a los lineamientos que al efecto emitan conjuntamente la autoridad educativa federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El sistema de administración de nómina deberá observar los criterios de control presupuestario de servicios personales, así como los principios de transparencia, publicidad y de rendición de cuentas, y para lo cual las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencias, mediante los convenios respectivos, se coordinarán con la autoridad educativa federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los pagos se deberán realizar preferentemente mediante medios electrónicos.

Capítulo II De la descarga administrativa

Artículo 98. Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia colaborarán con la autoridad educativa federal en la revisión permanente de las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y eficiencia.

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de las madres y padres de familia o tutores.

Artículo 99. La Secretaría, conforme a lo que establezcan las disposiciones de la autoridad educativa federal, impulsará un sistema de simplificación administrativa para evitar la duplicidad de procesos para que los docentes dediquen la mayor parte de su tiempo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Capítulo III De los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en educación básica y en educación media superior

Artículo 100. Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado en educación básica y media superior, las promociones en la función y en el servicio, así como para el otorgamiento de reconocimientos, se estará a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

En el caso de los docentes de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

Capítulo IV Del sistema integral de formación, capacitación y actualización

Artículo 101. Las autoridades educativas constituirán el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización del Estado de México, para que las maestras y los maestros ejerzan su derecho de acceder a éste, en términos de lo establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.

Artículo 102. Los fines, las opciones de formación, capacitación y actualización, estarán a lo dispuesto a la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.

Artículo 103. La autoridad educativa estatal, y sus organismos descentralizados, en el ámbito de su competencia podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la educación e instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para ampliar las opciones de formación, capacitación y actualización que para tal efecto establezca la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

Asimismo, impulsarán los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia generados por las instituciones de formación docente y los sectores académicos, de conformidad con los criterios que emita la Comisión.

Capítulo V De la formación docente

Artículo 104. Las personas egresadas de las instituciones formadoras de docencia contarán con el conocimiento de diversos enfoques pedagógicos y didácticos que les permita atender las necesidades de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En los planes y programas de estudio de las instituciones de formación docente, se promoverá el desarrollo de competencias en educación inicial y con enfoque de inclusión para todos los tipos educativos; asimismo, se considerarán modelos de formación docente especializada en la educación especial que atiendan los diversos tipos de discapacidad.

Artículo 105. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, para lo cual, las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias tendrán a su cargo, entre otras, las siguientes acciones:

- I. Propiciar la participación de la comunidad de las instituciones formadoras de docentes, para la construcción colectiva de sus planes y programas de estudio, con especial atención en los contenidos regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica en el aula y los colectivos docentes, y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la nueva escuela mexicana;
- II. Promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y subsistemas educativos, particularmente en aquellas instituciones que tengan amplia tradición y experiencia en la formación pedagógica y docente;
- III. Fomentar la creación de redes académicas para el intercambio de saberes y experiencias entre las maestras y los maestros de los diferentes sistemas y subsistemas educativos;
- IV. Proporcionar las herramientas para realizar una gestión pedagógica y curricular que priorice el máximo logro del aprendizaje y desarrollo integral de los educandos;
- V. Promover la integración de un acervo físico y digital en las instituciones formadoras de docentes, de bibliografía actualizada que permita a las maestras y los maestros acceder a las propuestas pedagógicas y didácticas innovadoras;
- VI. Promover la acreditación de grados académicos superiores de los docentes;
- VII. Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través de programas permanentes y de la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación, y
- VIII. Garantizar la actualización permanente, a través de la capacitación, la formación, así como programas e incentivos para su desarrollo profesional.

Artículo 106. La autoridad educativa estatal emitirá su opinión respecto los principios rectores y objetivos de la educación inicial que la autoridad educativa federal determine conforme a lo dispuesto en la Ley General.

Título Sexto De los planteles educativos

Capítulo Único
**De las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad
y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes**

Artículo 107. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se presta el servicio público de educación por parte del Estado de México o por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Con el acuerdo de las autoridades, madres y padres de familia o tutores y la comunidad, en la medida de sus posibilidades, funcionarán como un centro de aprendizaje comunitario, donde además de educar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se integrará a las familias y a la comunidad para colaborar en grupos de reflexión, de estudio y de información sobre su entorno.

Las autoridades educativas, en coordinación con la autoridad educativa federal, establecerán las disposiciones para el cumplimiento de este artículo.

Artículo 108. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de México, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal.

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, procurando el uso de energías renovables, para proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la autoridad educativa federal.

La instancia competente en materia de infraestructura educativa coadyuvará, con la autoridad educativa federal para mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento de los muebles o inmuebles que se destinen al servicio educativo.

Artículo 109. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, las autoridades educativas estatal y municipales, los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes y los particulares que impartan educación en términos de esta Ley. Asimismo, se atenderán las disposiciones que en la materia establezca la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal a los que se refiere el artículo 103 de la Ley General y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a nivel federal, local y municipal.

Las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regularán en materia de infraestructura por sus órganos de gobierno y su normatividad interna.

Artículo 110. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, deben obtenerse las licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás relacionados para su operación a efecto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable. Además de lo anterior, deberá obtenerse un certificado de seguridad y operatividad escolar expedido por las autoridades correspondientes, en los términos que para tal efecto emita la autoridad educativa federal. Los documentos que acrediten el cumplimiento de dichos requisitos, deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible del inmueble.

Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las normas de protección civil y de seguridad que emitan las autoridades de los ámbitos federal, local y municipal competentes, según corresponda.

En la educación que impartan los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, debe demostrarse además el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 144, fracción II de esta Ley.

Artículo 111. Las autoridades educativas estatal y municipales atenderán de manera prioritaria las escuelas públicas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo las condiciones físicas, de equipamiento y de servicios básicos óptimos que garanticen la seguridad, la salud, el bienestar y el desarrollo integral de los educandos, para que proporcionen educación con equidad e inclusión en dichas localidades.

En materia de inclusión se realizarán las acciones y ajustes razonables, orientados a identificar, prevenir y reducir las barreras físicas que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todas las personas con discapacidad, que mejoren las condiciones para la infraestructura educativa.

Se promoverá, a partir de diagnósticos de seguridad, la instalación de sistemas de videovigilancia adentro y en los alrededores de las escuelas públicas y privadas, priorizando a los municipios en los que se ha declarado la alerta de género y con un alto índice de violencia, con la finalidad de preservar la seguridad de la comunidad escolar, garantizando el derecho a la privacidad y a la intimidad de las niñas, niños y adolescentes.

A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la autoridad educativa federal, así como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física.

Artículo 112. El Gobierno Estatal, a través de la instancia competente, realizará las actividades correspondientes en materia de infraestructura educativa para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capítulo y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 113. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia de espacios educativos al servicio del Sistema Educativo Estatal, realizando las previsiones necesarias para que los recursos económicos destinados para ese efecto, sean prioritarios y oportunos, y las respectivas obligaciones se atiendan de manera gradual y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, debiendo establecer las condiciones fiscales, presupuestales, administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la inversión en la materia.

Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de financiamiento conforme lo establezcan las disposiciones aplicables.

La persona titular del ejecutivo estatal adoptará las medidas presupuestales pertinentes, cuando se trate de instituciones educativas que sufran daños por desastres y siniestros ambientales o antropogénicos, en términos de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, así como en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente.

Artículo 114. Para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demás integrantes de la comunidad.

El Gobierno del Estado de México, promoverá la participación directa de los municipios para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales. Los ayuntamientos coadyuvarán en el mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y luz.

Los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa estatal y de conformidad con los lineamientos que emita la autoridad educativa federal. Las acciones que se deriven de la aplicación de este párrafo, en ningún caso implicarán la sustitución de los servicios del personal de la escuela, tampoco generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares.

Artículo 115. Los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo, así como los nombres de los planteles educativos, serán conforme a lo establecido en las disposiciones que emita la autoridad educativa estatal y la autoridad educativa federal en sus respectivos ámbitos de competencia.

Título Séptimo **De la mejora continua de la educación**

Capítulo Único **Del proceso de mejora continua de la educación en el Estado de México**

Artículo 116. La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica el desarrollo permanente del Sistema Educativo Nacional para el incremento del logro académico de los educandos. Tendrá como eje central el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos.

Artículo 117. La autoridad educativa estatal, coadyuvará con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación sobre las cualidades de los actores, instituciones o procesos del Sistema Educativo Estatal, con la finalidad de contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación.

Las evaluaciones a las que se refiere el Sistema Educativo Nacional, serán conforme a la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.

Título Octavo Del Federalismo Educativo

Capítulo Único De la distribución de la función social en educación en el Estado de México

Artículo 118. De conformidad con la Ley General, corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:

- I. Prestar los servicios de educación básica incluyendo la indígena, inclusiva, así como la normal y demás para la formación docente;
- II. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar que emita la autoridad educativa federal;
- III. Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica;
- IV. Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado para cada ciclo lectivo de educación básica y normal, y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica;
- V. Prestar los servicios que correspondan al tipo de educación básica y de educación media superior, respecto a la formación, capacitación y actualización para maestras y maestros, de conformidad con las disposiciones generales que la autoridad educativa federal determine, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;
- VI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con la Ley General y los lineamientos generales que la autoridad educativa federal expida;
- VII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de docentes de educación básica;
- VIII. Participar en la integración y operación de un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;
- IX. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos la autoridad educativa estatal, deberá coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la autoridad educativa federal y demás disposiciones aplicables.

Las autoridades educativas participarán en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales;

- X. Participar con la autoridad educativa federal, en la operación de los mecanismos de administración escolar;
- XI. Vigilar y, en su caso, sancionar a las instituciones ubicadas en la entidad federativa que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo Nacional, deban cumplir con las disposiciones en la materia;
- XII. Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la autoridad educativa federal le proporcione;
- XIII. Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil de los planteles educativos de la entidad federativa;

- XIV. Generar y proporcionar, en coordinación con las autoridades competentes, las condiciones de seguridad en el entorno de los planteles educativos;
- XV. Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación que prestan en términos de esta Ley;
- XVI. Presentar un informe anual sobre los principales aspectos de mejora continua de la educación que hayan sido implementados en la entidad federativa, y
- XVII. Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General, esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 119. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren el artículo 118 de esta Ley, la autoridad educativa estatal tendrá las siguientes atribuciones de manera concurrente con la autoridad educativa federal:

- I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y V del artículo 114 de la Ley General, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;
- II. Participar en las actividades tendientes para la admisión, promoción y reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;
- III. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 113 de la Ley General;
- IV. Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestras y maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;
- V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción VI del artículo 114 de la Ley General, de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad educativa federal expida. Asimismo, podrán autorizar que las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad educativa federal expida en términos del artículo 135 de la Ley General.

Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en las disposiciones aplicables.

Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la autoridad educativa federal;

- VI. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia;
- VII. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de normal y demás para la formación de docentes de educación básica que impartan los particulares;
- VIII. Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción IV del artículo 113 de la Ley General, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas de estudio autorizados por la autoridad educativa federal;
- IX. Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al Sistema Educativo Nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística, incluyendo los avances tecnológicos que den acceso al acervo bibliográfico, con especial atención a personas con discapacidad;
- X. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentar su enseñanza, su expansión y divulgación en acceso abierto, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada;

- XI.** Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico- deportivas en todas sus manifestaciones, incluido el deporte adaptado para personas con discapacidad;
- XII.** Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido en la Ley de la materia;
- XIII.** Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el Sistema Educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de información;
- XIV.** Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de los educadores y educandos sea de respeto recíproco y atienda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a niñas, niños, adolescentes y jóvenes;
- XV.** Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física, educación física y la práctica del deporte;
- XVI.** Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, producción y promoción de estilos de vida saludables en alimentación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;
- XVII.** Promover, ante las autoridades correspondientes, los permisos necesarios de acuerdo con la legislación laboral aplicable, con la finalidad de facilitar la participación de madres y padres de familia o tutores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años;
- XVIII.** Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora continua de la educación en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación;
- XIX.** Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares;
- XX.** Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel;
- XXI.** Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo;
- XXII.** Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias, y
- XXIII.** Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

El Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Entidad Federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere la Ley General, con excepción de aquellas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 113 y 114 del diverso señalado.

Además de las atribuciones concurrentes señaladas en la Ley General, las autoridades educativas federal y estatal, en el ámbito de sus competencias, tendrán las correspondientes en materia de educación superior que se establezcan en la Ley General de Educación Superior.

Artículo 120. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y estatal, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones VIII a X del artículo 119 de esta Ley.

El Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos, podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

Para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Artículo 121. Las autoridades educativas estatal y municipales, prestarán servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.

Para tal efecto realizarán entre otras, las siguientes acciones:

- I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos, conforme a la disponibilidad presupuestal, que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación;
- II. Proporcionar, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, becas y apoyos económicos a educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que comprometan sus estudios escolares, cuya madre, padre o tutor haya fallecido o sufrido algún accidente que le ocasione invalidez o incapacidad permanente, siempre y cuando no sea beneficiario de otro programa o apoyo social;
- III. Garantizar el acceso a los servicios educativos a las víctimas y promover su permanencia en el Sistema Educativo Estatal cuando como consecuencia del delito o violación de sus derechos humanos exista interrupción en los estudios;
- IV. Promover la instalación de aires acondicionados en aulas de los planteles educativos que, por sus condiciones climáticas, lo requieran, considerando la disponibilidad presupuestal y las condiciones de la infraestructura física educativa;
- V. Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social;
- VI. Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto emitan las autoridades educativas, a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero;
- VII. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios;
- VIII. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital;
- IX. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria;
- X. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;
- XI. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos, lo anterior de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal.

Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración con las instituciones competentes para la obtención de los documentos de identidad, asimismo, en el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los educandos mediante la evaluación correspondiente.

Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior;

- XII. Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornada de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos;

- XIII.** Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el Sistema Educativo Estatal;
- XIV.** Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna;
- XV.** Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución, y
- XVI.** Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia.

Artículo 122. Las autoridades educativas participarán en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la educación, así como el cumplimiento a los fines y criterios de la educación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

Título Noveno Del financiamiento a la educación

Capítulo Único De los recursos destinados a la Educación

Artículo 123. El Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de México, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.

El Ejecutivo Estatal propondrá en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente, la asignación de recursos de cada uno de los niveles de educación a su cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar tenga acceso a la educación, con criterios de excelencia.

Los recursos federales recibidos para la prestación de los servicios educativos a la entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna y exclusivamente a la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El Gobierno del Estado de México publicará en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.

El Gobierno del Estado de México prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de la Ley respectiva, verifiquen la correcta aplicación de dichos recursos.

Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la Ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo.

En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

Para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, la Ley General de Educación Superior establecerá las disposiciones en materia de financiamiento.

Artículo 124. El Gobierno del Estado de México, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos de esta Ley estén a cargo de la autoridad municipal.

Artículo 125. El Gobierno del Estado de México en todo momento procurará fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

Artículo 126. El Ejecutivo Estatal incluirá en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la legislatura local, los recursos suficientes para fortalecer las capacidades de la administración escolar. Los programas para tal efecto responderán a los lineamientos que emita la autoridad educativa federal.

Artículo 127. El Gobierno Estatal recibirá recursos específicos a través de los programas compensatorios que lleve a cabo el Ejecutivo Federal, para enfrentar los rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concreten las

proporciones de financiamiento y las acciones específicas que la autoridad educativa estatal deberá realizar para reducir y superar dichos rezagos.

Título Décimo
De la corresponsabilidad social en el proceso educativo

Capítulo I
De la participación de madres y padres de familia o tutores

Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

- I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la educación inicial, en concordancia con los espacios disponibles para cada tipo educativo;
- II. Participar efectivamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución;
- III. Colaborar con las autoridades escolares, las veces que sean necesarias, para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos;
- IV. Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere esta Ley;
- V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen;
- VI. Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar;
- VII. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas, hijos o pupilos;
- VIII. Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo, sobre los cuales podrán emitir su opinión;
- IX. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución;
- X. Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar, así como otorgar su consentimiento informado para la revisión de sus mochilas o bolsos, y
- XI. Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes, sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años y sobre las condiciones físicas de las escuelas.

Artículo 129. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

- I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial;
- II. Participar efectivamente en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo;
- III. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen;
- IV. Informar a las autoridades educativas, los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas;
- V. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, y

- VI.** Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria.

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de madres y padres de familia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable.

Artículo 130. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto:

- I.** Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados;
- II.** Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles;
- III.** Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos;
- IV.** Propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres de familia o tutores, para salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa;
- V.** Conocer de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos, conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar;
- VI.** Sensibilizar a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos. Así como también, de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos;
- VII.** Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos;
- VIII.** Gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos ante las autoridades correspondientes;
- IX.** Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando, y
- X.** Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores.

Las asociaciones de madres y padres de familia, se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

La organización y el funcionamiento de las asociaciones de madres y padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale.

Capítulo II **De los Consejos de Participación Escolar**

Artículo 131. Las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación.

Artículo 132. La autoridad de cada escuela pública de educación básica y media superior, vinculará a esta, activa y constantemente, con la comunidad. La autoridad del municipio dará toda su colaboración para tales efectos.

Será decisión de cada escuela la instalación y operación del consejo de participación escolar o su equivalente el cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Este consejo podrá:

- I.** Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional contribuyan a la mejora continua de la educación, en los términos del artículo 136 de la Ley General;
- II.** Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, docentes, directivos y empleados de la escuela, que propicien la vinculación con la comunidad, con independencia de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

- III. Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa;
- IV. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través de proponer acciones específicas para su atención;
- V. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se encuentren;
- VI. Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas en su administración. La autoridad educativa federal emitirá los lineamientos para su operación, de conformidad con las disposiciones aplicables;
- VII. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar de Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la autoridad educativa federal, y
- VIII. Realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela.

Artículo 133. En cada municipio del Estado de México se deberá instalar y operar un consejo municipal de participación escolar en la educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, deberá:

- I. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;
- II. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;
- III. Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
- IV. Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración de los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad educativa correspondiente;
- V. Coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar;
- VI. Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares;
- VII. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa;
- VIII. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la comunidad;
- IX. Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública, y
- X. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

Será responsabilidad de la persona titular de la presidencia municipal que, en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la excelencia en educación, así como, la difusión de programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Artículo 134. En el Estado de México, podrá instalarse y operar un consejo estatal de participación escolar en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo, será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Este consejo, podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo, y de bienestar social; coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar; conocer las demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y municipales, gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades que influyan en la excelencia y la cobertura de la educación.

Capítulo III Del servicio social

Artículo 135. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiciones legales. En éstas se preverá la prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado académico correspondiente.

Las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias, en coordinación con las instituciones de educación, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales.

Artículo 136. Las tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de preescolar, primaria, secundaria y media superior que lo requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo integral contarán como prestación de servicio social, de conformidad con los mecanismos que establezca la autoridad educativa federal en coordinación con las autoridades competentes.

Capítulo IV De la participación de los medios de comunicación

Artículo 137. Los medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico que les rige, en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de los fines de la educación previstos en el artículo 12, conforme a los criterios establecidos en el artículo 13 de la presente Ley.

Artículo 138. El Ejecutivo del Estado de México promoverá la contribución de los medios de comunicación a los fines de la educación. Para tal efecto procurará la creación de espacios y la realización de proyectos de difusión educativa con contenidos de la diversidad cultural, cuya transmisión sea inclusiva, en español, en las diversas lenguas indígenas y atendiendo las necesidades de las personas con discapacidad.

Título Décimo Primero De la validez de estudios y certificación de conocimientos

Capítulo Único De las disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de conocimientos

Artículo 139. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal tendrán validez en toda la República.

Las instituciones del Sistema Educativo Estatal, expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República.

Artículo 140. Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos extranjeros podrán adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la autoridad educativa federal conforme a lo previsto en el artículo 142 de esta Ley.

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Artículo 141. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el Sistema Educativo Nacional.

Artículo 142. La revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes se ajustará a las normas y criterios generales que determine la autoridad educativa federal.

La autoridad educativa estatal y las instituciones educativas otorgarán revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén referidas a planes y programas de estudio que se impartan en sus respectivas competencias.

La autoridad educativa estatal e instituciones educativas que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos académicos.

Las revalidaciones y equivalencias emitidas, deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

Las revalidaciones y equivalencias otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la República.

La autoridad educativa estatal podrá revocar las referidas autorizaciones, cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en esta Ley.

Título Décimo Segundo De la educación impartida por particulares

Capítulo I De los particulares que impartan educación

Artículo 143. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa de las autoridades educativas, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y programa de estudio por lo que hace a educación básica y media superior, surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la autoridad correspondiente. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. En el tipo de educación superior, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Educación Superior.

La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren al Sistema Educativo Estatal.

En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos.

La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Los educandos, las madres y padres de familia o tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su preferencia.

La autorización y el reconocimiento de validez oficial serán personales e intransferibles para cada plan de estudios.

Artículo 144. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

- I. Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir educación;
- II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, en coadyuvancia con las autoridades competentes, conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables, y
- III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

Artículo 145. Las autoridades educativas publicarán, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de

estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado para revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que se les otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos, así como aquellas que sean clausuradas.

De igual manera indicarán en dicha publicación, los resultados una vez que apliquen las evaluaciones que, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General y demás disposiciones aplicables, les correspondan.

Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes.

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una Leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio para el cual se otorgó, así como la autoridad que lo emitió.

Artículo 146. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

- I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;
- II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes y mantenerlos actualizados;
- III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de alumnos inscritos en cada plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria de cada particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. La asignación de las becas a las que se refiere esta fracción corresponde a la autoridad educativa federal y se sujetara a lo dispuesto en los lineamientos que ésta emita;
- IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 144 de esta Ley;
- V. Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen;
- VI. Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades;
- VII. Entregar a la autoridad educativa la documentación e información necesaria que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para seguir impartiendo educación, conforme a los lineamientos emitidos para tal efecto;
- VIII. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia que se establezca, en los términos la Ley General y demás disposiciones aplicables, y
- IX. Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio donde presten el servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación.

Artículo 147. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.

Capítulo II

De los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares

Artículo 148. Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines establecidos en la Constitución, las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos una vez al año, a las instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, o que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo Estatal, deban cumplir con las disposiciones de la presente Ley; además podrán requerir en cualquier momento información o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo.

Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas correspondientes, la realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los términos de la Ley General, incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación conforme a las disposiciones legales aplicables o que hayan sido establecidos en los instrumentos jurídicos que rigen las relaciones para la prestación de ese servicio.

Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar.

Artículo 149. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

- I. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 144 de esta Ley;
- II. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;
- III. Suspender actividades escolares o extraescolares en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;
- IV. No utilizar los libros de texto que la autoridad educativa federal autorice y determine para la educación primaria y secundaria;
- V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica;
- VI. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;
- VII. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;
- VIII. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos;
- IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los educandos o que menoscaben su dignidad;
- X. Ocultar a las madres y padres de familia o tutores, las conductas de los educandos menores de dieciocho años que notoriamente deban ser de su conocimiento;
- XI. Oponerse a las actividades de vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna;
- XII. Contravenir las disposiciones contempladas en los artículos 11, 12, 13, 89, párrafo tercero, por lo que corresponde a las autoridades educativas y 145, segundo párrafo de esta Ley;
- XIII. Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de sus madres y padres o tutores, medicamentos;
- XIV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;
- XV. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje; obligar a los educandos a someterse a tratamientos médicos para condicionar su aceptación o permanencia en el plantel, o bien, presionar de cualquier manera a sus madres y padres de familia o tutores para que se los realicen, salvo causa debidamente justificada a juicio de las autoridades educativas;
- XVI. Incumplir con las medidas correctivas o precautorias derivadas de las visitas;
- XVII. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;
- XVIII. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 147 de esta Ley;
- XIX. Impartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de docentes de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente;

- XX.** Cambiar de domicilio sin la autorización previa de las autoridades educativas competentes;
- XXI.** Otorgar revalidaciones o equivalencias sin observar las disposiciones aplicables;
- XXII.** Retener documentos personales y académicos por falta de pago;
- XXIII.** Condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares;
- XXIV.** Omitir dar a conocer por escrito a las personas usuarias de los servicios educativos, previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la colegiatura o cualquier otra contraprestación;
- XXV.** Difundir o transmitir datos personales sin consentimiento expreso de su titular o, en su caso, de la madre y padre de familia o tutor, y
- XXVI.** Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, la Ley General, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

Artículo 150. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior serán sancionadas de la siguiente manera:

- I.** Imposición de multa, para lo cual se estará a los siguientes criterios:
 - a)** Multa por el equivalente a un monto mínimo de cien y hasta máximo de mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XV, XVI, XXIII y XXIV del artículo 149 de esta Ley;
 - b)** Multa por el equivalente a un monto mínimo de mil y un, y hasta máximo de siete mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones XI, XII, XX, XXI, XXII, XXV y XXVI del artículo 149 de esta Ley, y
 - c)** Multa por el equivalente a un monto mínimo de siete mil y un, y hasta máximo de quince mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones VII y XIII del artículo 149 de esta Ley.

Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia;

- II.** Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente respecto a las infracciones señaladas en las fracciones IX y XIV del artículo 149 de esta Ley. La imposición de esta sanción no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa de las señaladas en el inciso b) de la fracción anterior, o
- III.** Clausura del plantel, respecto a las infracciones señaladas en las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 149 de esta Ley.

Si se incurriera en las infracciones establecidas en las fracciones XIII, XIV y XXVI del artículo anterior, se aplicarán las sanciones de este artículo, sin perjuicio de las penas y de otra índole que resulten.

Artículo 151. Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de reincidencia.

Artículo 152. Las multas que imponga la autoridad educativa estatal serán ejecutadas por la instancia que determine la Secretaría de Finanzas del Estado de México a través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano.

Artículo 153. La revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.

El retiro de los reconocimientos de validez oficial de estudios, producirá sus efectos a partir de la fecha en que se notifique la resolución definitiva, por lo que los estudios realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial para evitar perjuicios a los educandos.

A fin de que la autoridad que dictó la resolución adopte las medidas necesarias para evitar perjuicios a los educandos; el particular deberá proporcionar la información y documentación que, en términos de las disposiciones normativas, se fijen.

Artículo 154. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

Artículo 155. En el Estado de México las acciones de vigilancia a las que se refiere el artículo 148 de esta Ley, se realizarán de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley General y atenderán los lineamientos que emita la autoridad educativa federal en la materia.

Capítulo III Del recurso administrativo

Artículo 156. En contra de las resoluciones emitidas por la autoridad educativa estatal en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos relacionados con los mismos, con fundamento en las disposiciones de la Ley General y las normas que deriven de ella, el afectado podrá optar entre interponer el recurso de inconformidad o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.

También podrá interponerse el recurso de cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios.

Artículo 157. La tramitación y la resolución del recurso de inconformidad, se llevará a cabo conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Educación del Estado de México, publicada el 06 de mayo de 2011 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" y se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto.

TERCERO. La autoridad educativa estatal dentro de su ámbito de competencia deberá emitir o ajustar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones normativas conforme a lo establecido en el presente Decreto y las disposiciones que establezca la autoridad educativa federal, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor.

CUARTO. Hasta la publicación de las disposiciones normativas a las que se refiere el artículo anterior, seguirán aplicándose las disposiciones normativas vigentes.

QUINTO. Los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, continuarán, hasta su conclusión, regidos con los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones en los cuales se fundamentaron.

SEXTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes.

SÉPTIMO. El Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización del Estado de México, previsto en el artículo 101 de este Decreto deberá constituirse antes de finalizar el año 2024.

Lo tendrá entendido la Gobernadora del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.- Presidenta.- Dip. Azucena Cisneros Coss.- Secretarias.- Dip. Viridiana Fuentes Cruz.- Dip. Silvia Barberena Maldonado.- Dip. Claudia Desiree Morales Robledo.- Rúbricas.

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, México, a 23 de febrero de 2024.- **La Gobernadora Constitucional del Estado de México, Mtra. Delfina Gómez Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.- Rúbrica.**

Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda que dice: Diputadas y Diputados Locales Estado de México.

Toluca de Lerdo, Estado de México; a ___ de octubre de 2023.

**DIP. AZUCENA CISNEROS COSS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXI LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE MÉXICO
P R E S E N T E**

El que suscribe, **Diputado Abraham Saroné Campos**, en nombre propio y en calidad de Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura, en representación de las diputadas y los diputados miembros que suscriben, **Diputado Rigoberto Vargas Cervantes, Diputada Aurora González Ledezma, Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, Diputado Faustino de la Cruz Pérez, Diputado Valentín González Bautista, Diputada Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera, Diputada Gretel González Aguirre, Diputado Román Francisco Cortés Lugo, Diputada Martha Amalia Moya Bastón, Diputada María Elida Castelán Mondragón, Diputada María Luisa Mendoza Mondragón y Diputada Juana Bonilla Jaime**, con fundamento en los artículos 6 y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 y 61 fracción I y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 38 fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de México, sometemos a consideración de esta Honorable Legislatura, la presente **iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Educación del Estado de México, expedida mediante decreto número 306 publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el día 6 de mayo de 2011, y en su lugar, se expide la Ley de Educación del Estado de México**, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de la vasta creación normativa, existe un conjunto de principios, leyes e instituciones que encauzan una de las más nobles aristas de las regulaciones en nuestro país, el derecho a la educación.

Comprender a la educación implica su interpretación como guía trascendente de la universalidad de los derechos y del bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como reconocer la participación de las madres y los padres de familia o tutores, maestras y maestros, todas y todos coexistentes de nuestra comunidad educativa estatal, también perfilados como ilustres componentes de las diferentes caras de un mismo cuerpo geométrico; se estima referenciar el reconocimiento de que gracias a los mecanismos cuyas piezas lubricadas con la tenacidad, el sacrificio y la entrega de la comunidad escolar, se fortalece la arquitectura de los pilares que sostienen por su propio peso a las generaciones herederas de nuestras instituciones.

La educación es de las más precedentes referencias históricas como un elemento sine qua non para el afianzamiento del Estado Constitucional del derecho, cuyas bases de la presente propuesta se sustentan en nuestra Carta Magna y su Ley General en la materia, cuyo contenido particulariza los principios plasmados textualmente en el artículo 3o. Constitucional.

La comunidad escolar juega un papel decisivo y ello tiene que permitir la construcción de un canal bidireccional con la autoridad educativa estatal y federal, aspirando a una comunicación resonante de las diversas expresiones que componen el tejido social educativo.

Hasta agosto del año en curso, fecha en que inició el ciclo escolar y según los datos del Sexto Informe de Resultados del Gobierno del Estado de México, Administración 2017-2023, el Sistema Educativo Estatal, en su modalidad escolarizada, atendió en el ciclo escolar 2022- 2023 a más de 4 millones 466 mil 110 alumnas y alumnos, de los que, 3 millones 55 mil 287 estudiantes correspondieron a educación básica, 650 mil 376 a media superior y 449 mil 396 a educación superior. En la modalidad no escolarizada se atendió a una matrícula de 311 mil 51 alumnos.

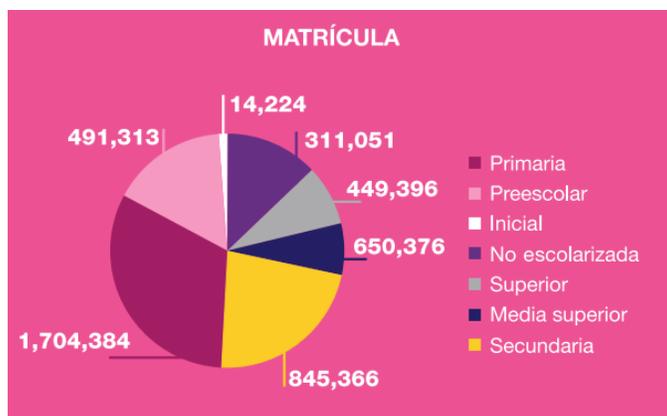


Figura 1. Retomada del Sexto Informe de Resultados del Gobierno del Estado de México, de la Administración 2017-2023.

Lo anterior ilustra el compromiso designado a una Ley de Educación ajustada y preparada para atender a la matrícula más grande del país junto con el profesionalismo y dedicación de más de 252 mil 144 maestras y maestros en las 24 mil 879 escuelas pertenecientes a la infraestructura educativa de nuestra entidad federativa.

La siguiente tabla permite exponer de manera gráfica y ordenada las cifras anteriormente citadas:

| CONTROL ^{1/} | MATRÍCULA | DOCENTES | ESCUELAS ^{2/} |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------------|
| ESTATAL | 2,526,799 | 133,247 | 14,480 |
| FEDERALIZADO | 1,251,902 | 54,948 | 7,597 |
| TOTAL ESTATAL | 3,778,701 | 188,195 | 22,077 |
| FEDERAL | 453,581 | 39,102 | 2,434 |
| AUTÓNOMO | 233,828 | 24,817 | 368 |
| TOTAL | 4,466,110 | 252,114 | 24,879 |

Esta propuesta busca atender los problemas a los que se ha enfrentado históricamente el pueblo mexiquense, como lo es, entre otros, el abandono escolar y el rezago educativo. Dicha área de oportunidad alude a una condición de atraso que enfrenta un segmento de la población con respecto a otro; asimismo, refiere a una condición de desigualdad, e inequidad en la distribución de servicios y oportunidades educativas.

La relación pobreza y poder adquisitivo es evidente para medir la realidad del desarrollo de nuestro Estado.

El Índice de Desarrollo Humano mide tres dimensiones:

1. Expectativas de vida al nacer.
2. Años promedio de preparación escolar.
3. Ingresos por persona.

Con los indicadores: tasa de alfabetización de adultos, tasa de matriculación educativa y el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades de las personas, en principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, en todos los niveles de desarrollo, las tres más esenciales son, disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos, y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si estas oportunidades no se poseen, muchas alternativas continuarán siendo inaccesibles.

Con relación al abandono escolar se representa en su concepto como el número de alumnos que dejan la escuela en el ciclo escolar, por cada cien alumnos que se matricularon al inicio de cursos de ese mismo nivel educativo. En la siguiente ilustración se describe el escenario drástico del abandono escolar en la entidad mexiquense:

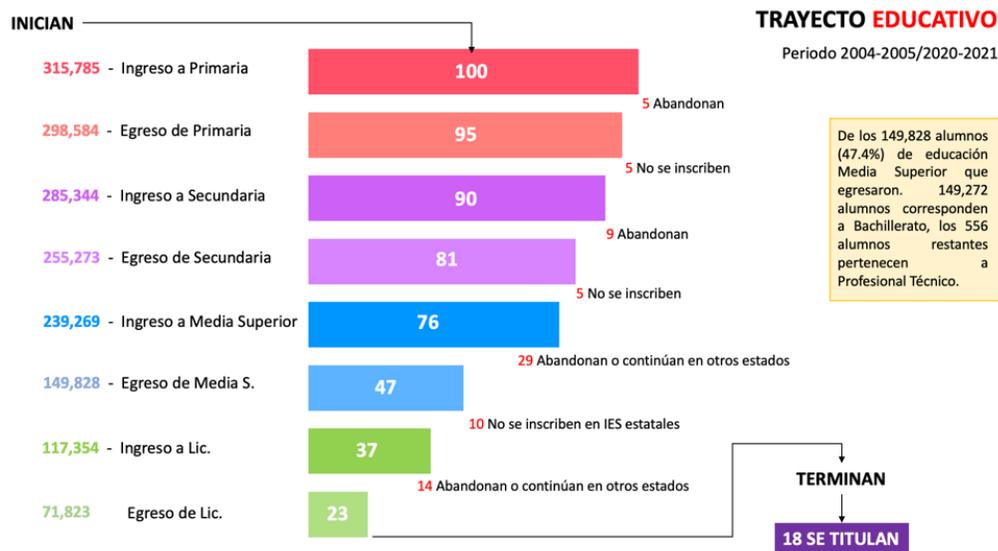


Figura 2. Trayecto educativo que refleja el abandono escolar en el Estado de México periodo 2004-2005/ 2020-2021, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, (2022).

Reverberando un impacto a las personas durante el resto de sus vidas, ya que les impedirá desarrollarse plenamente, limitará sus oportunidades laborales y dificultará el ejercicio pleno de sus derechos en general por la ausencia de conocimientos necesarios, dejando desblindada a una gran parte de la población que sucumbirá ante la pobreza y la pobreza extrema, provocando su marginación social y heredable a sus familias.

Respecto al rezago educativo, este pone en riesgo a generaciones de estudiantes, lo que reflejaría, jóvenes con menos aprendizajes y menos habilidades, reduciendo en un futuro sus ingresos en su vida laboral. A menores conocimientos, menores oportunidades laborales, o si bien, les llegase una oferta, trabajos mal pagados.

En un contexto demográfico, en el Estado de México viven casi 17 millones de personas; y de ellos, 8 millones viven en pobreza y más de 1.4 millones en pobreza extrema, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Cuando hablamos de la deserción escolar y del rezago educativo que hay en el Estado de México, tenemos que pensar de manera holística para comprender la compleja realidad de nuestra sociedad mexiquense. Hay una interconexión con la gran desigualdad social, el desempleo y la falta de cobertura en educación media superior y superior.

Nuestra entidad en el ciclo escolar 2021-2022, representó el 70 por ciento de la deserción del país; 196 mil 200 alumnos abandonaron las aulas en educación básica, de acuerdo con el informe de la Secretaria de Educación Pública (Albarrán, 2022).

En educación media superior, en el mismo ciclo escolar, se presentó una tasa de abandono del 11.7 por ciento, cifra equivalente a 77 mil 065 estudiantes del total de alumnos inscritos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Albarrán, 2022).

El 19% de la población total del Estado de México, es decir, 3 millones 263 mil 532 personas no terminaron primaria y secundaria o son analfabetas; cifra que representa el rezago educativo en la entidad (La Jornada, 2022).

La información anterior nos permite dimensionar el reto que tendrá la autoridad educativa estatal para ejecutar una política educativa que contrarreste los efectos de las diversas problemáticas que padecen nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Como Congreso del Estado de México, tenemos la responsabilidad de brindar las herramientas jurídicas por conducto de la presente iniciativa, advirtiendo un destino de observancia permanente ante su ejecución.

Sumado a lo anterior, no podemos definir al sistema educativo sin la reconocida participación de quienes por su preparación y desempeño profesional han destacado e incidido en la promoción de los aprendizajes de nuestras alumnas y alumnos, así como su colaboración respetuosa y armónica en favor de la comunidad escolar, a las maestras y maestros, en quienes depositamos nuestra confianza para participar en la nueva política educativa estatal.

La propuesta visibiliza la adopción de los principios educativos de nuestro país:

- La rectoría del Estado en la educación;
- El federalismo educativo con base en una clara distribución de competencias;
- El reconocimiento de las realidades y contextos regionales y locales del Estado de México, y
- El interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las acciones educativas del Estado.

Asimismo, rescata los ideales de una educación humanista que considera a la dignidad, el conocimiento y la formación como resultado del génesis en el sistema educativo estatal que se ajustará a los siguientes objetivos:

- Ubicar como centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de México, para lograr una educación con equidad y de excelencia, pilares de la Nueva Escuela Mexicana;
- Fortalecer el federalismo educativo para cumplir con los principios, fines y criterios de la educación;
- Impulsar la corresponsabilidad social en el proceso de construcción de saberes, y
- Armonizar la legislación del Estado de México con el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias.

El pensamiento tiene que ser congruente con la materialización de las ideas y estas deben recorrer el camino trazado en esta iniciativa para manifestar su utilidad, apoyadas de un instrumento jurídico en la innovación educativa para el Estado de México; se consideran aspectos destacables de la propuesta como:

1. **Enfoque para garantizar el derecho a la educación.** Su objeto será regular la educación impartida en el Estado de México por parte de las autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados, los municipios y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, además, su aplicación y vigilancia para su cumplimiento corresponderá a las autoridades educativas del Estado de México y de los municipios;
2. **Cobertura universal en educación.** En el Estado de México se reforzará el derecho a la educación a que toda persona tiene, comprendido como el medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional;
3. **Gratuidad de los certificados médicos para apoyar la economía de los educandos.** Se dispondrá de las medidas necesarias para que los certificados médicos de los educandos que lo requieran para sus trámites escolares se emitan sin costo alguno;
4. **Principios, fines y criterios de la educación sustentados en valores.** Se promoverán y atenderán todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial, especial y superior, además se apoyará a la investigación científica, tecnológica y humanística, alentando el fortalecimiento y difusión de la cultura estatal, nacional y universal. También se fomentará la educación dual, en los tipos de educación media superior y superior;
5. **La Nueva Escuela Mexicana en la educación del Estado de México.** Las acciones que desarrolle la federación, el Estado de México y sus municipios, tendrán como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientando el Sistema Educativo Estatal, incidiendo en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad y el impulso de las transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Lo anterior será a través de la Nueva Escuela Mexicana, tal y como lo dispone la Ley General de Educación;
6. **El derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación.** Se reconocerá el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la cultura;
7. **Educación indígena y afromexicana.** Se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas; además la educación indígena deberá atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística, basándose en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de las culturas del Estado de México;
8. **Enfoque humanista en la educación.** Se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad en armonía con la naturaleza;

9. **Educación inclusiva.** La educación inclusiva se referirá al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, para eliminar las prácticas de discriminación, exclusión y segregación;
10. **Acciones para la educación especial.** Se establecerá un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación;
11. **Objetivo de la educación para personas adultas.** Se proporcionarán los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo a través de diversos tipos y modalidades de estudio;
12. **Corresponsabilidad en el proceso educativo.** Las madres y los padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo;
13. **Interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.** Se priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, se garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo dicho principio constitucional;
14. **Combate al rezago educativo y a la deserción escolar.** Se establecerán programas y campañas de manera periódica para disminuir el rezago educativo y la deserción escolar en el Estado de México;
15. **Control de los alimentos y las bebidas nutritivas en las escuelas.** Se realizarán acciones de vigilancia para que en los alimentos y bebidas que se preparen y procesen al interior de las escuelas cumplan con el valor nutritivo para la salud de los educandos;
16. **Fomento de estilos de vida saludables.** Se contribuirá al desarrollo de una cultura de la salud, promoviendo la educación física, la práctica del deporte, los hábitos de higiene y de sana alimentación, promoviendo y fomentando la educación sobre salud bucodental. Así como la educación sexual y reproductiva, la salud e higiene menstrual y la prevención de adicciones a través del conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez;
17. **Promoción de la cultura del cuidado del agua.** Se promoverá la cultura del cuidado del agua, enfocada a soluciones creativas para su captación, con el fin de darle un uso racional y responsable;
18. **Medidas para preservar la integridad física, psicológica y social del educando.** Se implementará una coordinación con las instituciones académicas para capacitar a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral;
19. **Promoción de la cultura de la paz y no violencia en las escuelas.** Se promoverá la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. También se realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar;
20. **Protocolos para el fomento de la cultura de la paz y no violencia.** Se emitirán los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de acciones que promuevan la cultura de la paz y no violencia. Entre los protocolos que se emitan, deberán encontrarse para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, se determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa;
21. **Seguro escolar contra accidentes para los educandos.** Se realizará la contratación de un seguro escolar contra accidentes para los educandos que cursen el tipo básico dentro del Sistema Educativo Estatal;
22. **Acciones para lograr los fines de la revalorización de las maestras y los maestros.** Se priorizará la labor pedagógica de los docentes y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre la carga administrativa, promoviendo su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en el ámbito donde desarrollen su labor;
23. **Descarga administrativa del magisterio.** Habrá una revisión permanente de las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y eficiencia;

24. **Requisitos y condiciones de la infraestructura física educativa.** Los muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, procurando el uso de energías renovables, para proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión;
25. **Mantenimiento de los muebles e inmuebles destinados al servicio educativo.** Se promoverá la participación directa de los municipios para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales. Los ayuntamientos coadyuvarán en el mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y luz, y
26. **Derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela.** Se normarán las intervenciones precisas para el buen actuar de las madres, los padres de familia o tutores respecto a la responsabilidad que tienen sobre sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años. Asimismo, se establece el procedimiento conducente en caso de cometer alguna omisión respecto a sus obligaciones.

El contenido estructural de la presente iniciativa se compone por doce títulos y ciento cincuenta y tres artículos, acompañados de siete artículos transitorios, estos últimos establecen la gradualidad para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la propuesta de Ley. El Proyecto de Decreto se define como un instrumento visionario, que tiene como propósito reforzar la seguridad jurídica con la que deberá de participar cada actor involucrado en el proceso educativo, aparejada con los derechos y obligaciones que se volverán exigibles una vez que esta soberanía tenga a bien tramitar su aprobación mediante el acuerdo conducente.

La Ley de Educación del Estado de México fue publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 6 de mayo de 2011, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Educación publicada el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se establece la responsabilidad de las Legislaturas para armonizar el marco jurídico en la materia.

El proceso de armonización de la **Ley General de Educación** emana de un mandato dispuesto en el **Artículo Sexto Transitorio** de dicho ordenamiento legal, cuyo contenido dispone que:

"Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con el presente Decreto."

Ante la competencia de nuestro Congreso Local, se identifica que en doce años el Estado de México no ha generado una reforma educativa profunda que actualice al sistema gubernamental de conformidad con las nuevas realidades y contextos.

Esta propuesta se perfila respetuosa de las atribuciones plasmadas para cada autoridad educativa conforme a la distribución de la función social en educación, es decir, considerando la participación que le corresponde a la autoridad educativa federal y reconociendo la participación de las autoridades educativas, estatal y municipal, así como la concurrencia entre ellas que permite la Ley General desde sus respectivos ámbitos de competencia.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura del Estado de México, en lo subsecuente "la Comisión", convocamos a una reunión el 5 de abril de 2022, con la finalidad de presentar el Plan de Trabajo para Armonizar la Ley General de Educación en el Estado de México, resultando su aprobación por unanimidad de votos.

Con el objetivo de presentar la propuesta de Ley de Educación Marco para las Entidades Federativas del Acuerdo Educativo Nacional para la Armonización Legislativa Estatal, a las y los miembros de la Comisión, el 8 de abril de 2022 convocamos a una reunión de trabajo, en la que se contó con la participación de la Coordinación Sectorial de Enlace con el Congreso de la Jefatura de la Oficina de la Secretaría de Educación Pública, la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México, y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.

Posteriormente, las y los miembros de la Comisión nos reunimos el 17 de mayo de 2022, con el objeto de informar a los titulares del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), el Instituto Mexiquense para la Discapacidad (IMEDIS) y el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Estado de México (DIFEM), sobre los procesos de consulta que se realizarían a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, así como a las personas con discapacidad; se solicitó la colaboración institucional de dichos organismos gubernamentales para el desarrollo de las asambleas regionales con la finalidad de armonizar la Ley General de Educación en el Estado de México. También, se realizó la presentación del cronograma de actividades, las fases y las características que deben regir a la consulta en materia educativa indígena y afromexicana; así como, los elementos mínimos a considerar en la consulta dirigida a las personas con discapacidad en materia de educación inclusiva.

En consecuencia, nuestra Comisión celebró una reunión de trabajo el 9 de junio de 2022, con el objeto de aprobar y publicar las convocatorias para la “Consulta en Materia Educativa a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas del Estado de México” y la Consulta en Materia Educativa dirigida a las personas con discapacidad del Estado de México”.

Las consultas se enfocaron en impulsar la armonización de la Ley General de Educación en el Estado de México con una perspectiva pluricultural, pluriétnica e inclusiva; previo a ello, bajo los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas resoluciones judiciales, procurando el respeto esencial de las fases y las características que componen a esta y además congruente con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Derivado de lo anterior, se realizó lo conducente para celebrar las consultas a través de asambleas regionales en el Estado de México.

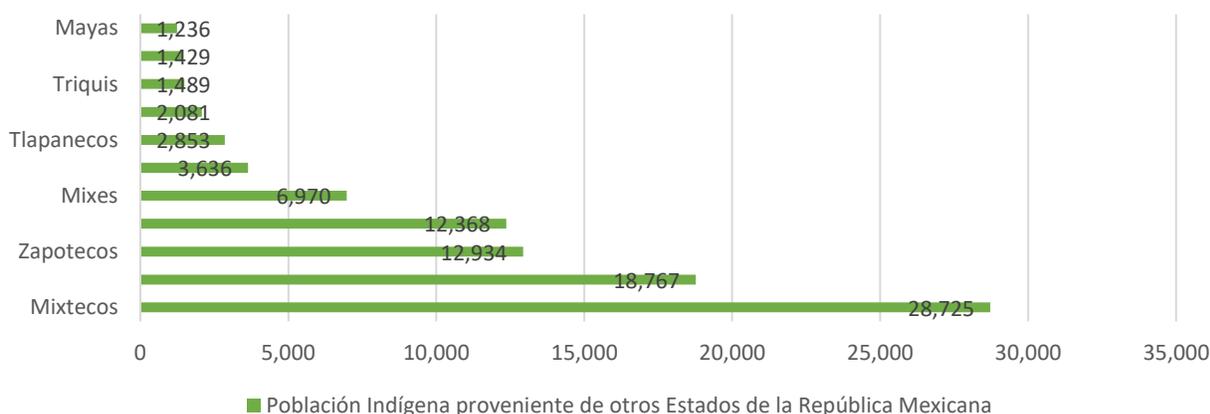
Consulta en Materia Educativa a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas del Estado de México

El presente permite dimensionar el universo de personas a quienes fue dirigida la consulta. Dada la composición pluricultural y pluriétnica, el Estado de México cuenta con una población de diversidad indígena hablante de su lengua materna reconocida en nuestro territorio.

La Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, reconoce como pueblos y comunidades indígenas a los distintos grupos indígenas de origen nacional procedentes de otras entidades federativas, en este sentido, nuestra entidad en los últimos años ha sido receptora de 103 mil 767 hablantes de alguna lengua indígena¹; los más representativos son:

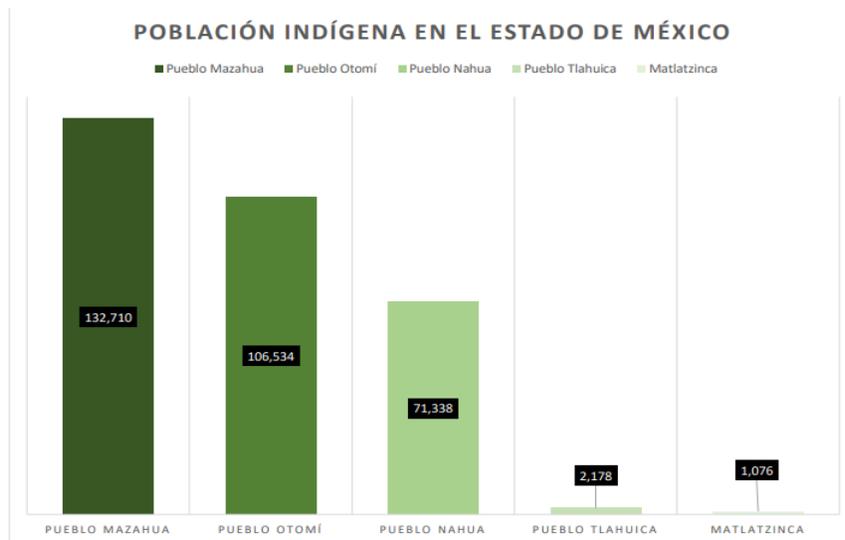
- Mixtecos 28 mil 725 (27.7%);
- Mazatecos 18 mil 767 (18.1%);
- Zapotecos 12 mil 934 (12.5 %);
- Totonacos 12 mil 368 (11.9%);
- Mixes 6 mil 970 (6.7%);
- Chinantecos 3 ml 636 (3.5 %);
- Tlapanecos 2 mil 853 (2.7 %);
- Tarascos 2 mil 081 (2.0 %);
- Triquis 1 mil 489 (1.4 %);
- Tzeltales 1, 429 (1.4 %);
- Mayas 1 mil 236 (1.2 %).²

Población Indígena proveniente de otros Estados de la República Mexicana



Provenientes de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Chiapas y Yucatán, principalmente, sin embargo, nuestra Constitución Local reconoce a cinco pueblos originarios: Mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca.

¹ Datos proporcionados por el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM).
² Censo de Población y Vivienda 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



Fase Preconsultiva

Se identificó como la medida legislativa a consultar: la creación de una nueva Ley de Educación del Estado de México con perspectiva pluricultural y pluriétnica.

Fase Informativa

La autoridad responsable durante los días 13, 14, 15 y 17 de junio de 2022, entregó de manera presencial ante las asambleas representativas de los pueblos indígenas Mazahua, Otomí, Nahuatl, Tlahuica y Matlatzinca la convocatoria que estableció los pasos a seguir durante el proceso de consulta, consistente en la creación de una nueva Ley de Educación para el Estado de México con perspectiva pluricultural y pluriétnica, detallando el impacto o repercusión que tendría su participación, así como la medida legislativa que se pretende impulsar. En dicha convocatoria se les presentaron y explicaron los temas de manera enunciativa pero no limitativa:

- Niveles y servicios en educación básica;
- Gratuidad de la educación superior;
- Objeto de la educación indígena;
- Consulta de buena fe y de manera previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas;
- Acciones en materia de educación indígena;
- Contenidos para opinión de los planes y programas de estudio;
- Procesos de admisión, promoción y reconocimiento;
- Atención prioritaria de escuelas en zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas;
- Atribuciones exclusivas de la autoridad educativa estatal;
- Creación de espacios y proyectos de difusión educativa, y
- Protección a la consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de México.

La convocatoria se tradujo en las cinco lenguas maternas de los pueblos indígenas reconocidos en nuestra Constitución Local, lo anterior derivado de las atenciones brindadas por el órgano técnico.

La presentación y explicación de la convocatoria fue asistida por al menos un traductor bilingüe perteneciente al respectivo pueblo originario.

Se difundió la convocatoria, acompañada de la liga de enlace web que dirigió a la convocatoria extensa, para consultarse en castellano y traducida en las lenguas: mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca.

Mediante las redes sociales y la página web oficial de la LXI Legislatura se difundieron invitaciones dirigidas a los pueblos indígenas, a través de videos informativos a viva voz por integrantes de cada etnia, comunicando el mensaje en su lengua materna. Se colocaron lonas con los datos básicos de las convocatorias en la lengua de cada pueblo originario en sitios estratégicos con mayor afluencia indígena para fortalecer la difusión.

Se convocaron a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de México de manera general, a integrantes, representantes, autoridades tradicionales, docentes en educación indígena, vocales consejeros representantes de indígenas, autoridades municipales indígenas, comisariados ejidales, autoridades comunales, comités de servicios comunitarios, delegados municipales, consejos y asambleas de las comunidades y pueblos indígenas pertenecientes a los municipios del Estado Libre y Soberano de México, organizaciones indígenas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y de investigación especializadas en temas indígenas.

Fase Deliberativa

A partir de la entrega física y publicación de la convocatoria (del 13 de junio al 4 de julio), los pueblos y comunidades indígenas convocados a través del diálogo y acuerdos, evaluaron internamente la propuesta y el contenido que les beneficiaría o afectaría en su caso, organizándose en diversas fechas y sedes.

Fase de Diálogo

Los días 4, 6, 7, 8, 12 y 15 de julio de 2022 la autoridad responsable estableció un diálogo con los pueblos y comunidades indígenas con sus representantes, así como integrantes de sus comunidades mediante asambleas. Los consultados participaron de manera previa, libre, informada, con un formato culturalmente adecuado y de buena fe, para generar acuerdos entre las partes. Se sometió a su consideración un orden del día, resultando su aprobación por unanimidad en cada asamblea.

A solicitud del pueblo matlatzinca, la autoridad responsable actualizó la fecha de la asamblea programada para el día lunes 11 de julio quedando definida el día martes 12 de julio.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se le extendió la solicitud para asistir a las asambleas como observador del proceso de consulta.

Los diálogos durante las asambleas consultivas no dieron inicio hasta la conclusión del ritual o ceremonia étnica ofrecida por los pueblos indígenas, así como las actividades conforme a sus costumbres y tradiciones.

Cada asamblea fue asistida por al menos un traductor bilingüe perteneciente al respectivo pueblo originario.

Durante la celebración de las asambleas de consulta se contó con la presencia de los Jefes Supremos, representantes de cada pueblo originario: Mazahua, Otomí, Nahuatl, Tlahuica y Matlatzinca respectivamente.

Las asambleas fueron videograbadas, transmitidas en redes sociales de la LXI Legislatura y con el levantamiento de imagen.

Se redactó una relatoría acompañada de los acuerdos establecidos durante la celebración de cada asamblea regional de consulta en su totalidad, misma que fue leída al término del diálogo, firmando como enterados de su contenido, al margen y al calce, de conformidad y para debida constancia por parte de al menos un integrante de la autoridad responsable y de representantes de los pueblos indígenas.

Fase de Decisión

Se comunican los resultados derivados de las actividades realizadas durante el proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas en fecha del 10 de agosto de 2022, misma que fue establecida en la convocatoria. Se consolidará una Comisión de Seguimiento integrada de manera representativa por las autoridades de los pueblos indígenas quienes participarán activamente para la formulación y entrega de un dictamen.

Actores involucrados en la consulta

| Pueblo | Lugar y fecha | Representantes del pueblo indígena | Diputados como autoridad responsable | Representantes del órgano garante de derechos humanos |
|----------------|---|--|---|--|
| Mazahua | Centro Ceremonial Mazahua, ubicado en San Felipe del Progreso. 4 de julio. | Margarito Sánchez Valdés: Presidente del Consejo Supremo de la Etnia Mazahua. Ausencio Valencia Largo: Presidente del Colectivo Intercultural de Pueblos Indígenas del Estado de México (CIPIEM). Marcial Mariano Sánchez: Perito traductor Mazahua. Ma. Angélica Marín Carmona: Coordinadora de Asuntos Indígenas de Villa de Allende. | Dip. Abraham Saroné Campos: Presidente de la Comisión. | Mtro. En D. Ricardo Vilchis Orozco: Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), sede Atlacomulco. |
| Nahuatl | Teatro Municipal de Tenango del Valle. 6 de julio. | Miguel Ángel Pavón Ávila: Director de Asuntos Indígenas de Tenango del Valle y secretario del CIPIEM. Fernando Esquivel Ramírez: Jefe Supremo Nahuatl. | Dip. Abraham Saroné Campos: Presidente de la Comisión. Dip. Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera: Prosecretaría de la Comisión. | Lic. Mireya Preciado Romero: Visitadora General de la CODHEM. |

| Pueblo | Lugar y fecha | Representantes | Diputados como autoridad responsable | Representantes del órgano garante de derechos humanos |
|--------------------|---|--|---|---|
| Nahua | Escuela primaria indígena "Nezahualcōyotl" Xaxacaltonco S/N, Santa Catarina del Monte del municipio de Texcoco. 7 de julio. | Juan Salgado Bautista: Jefe Supremo de los Pueblos Originarios, Ancestrales y Tribales de Mesoamérica y Aridoamérica. Rosa María Valencia Jiménez: Integrante del Consejo Regional Acolhua de Pueblos Indígenas de la Zona Oriente del Valle de México. | Dip. Rigoberto Vargas Cervantes: Secretario de la Comisión. Dip. Marco Antonio Cruz Cruz: Diputado Asociado de la Comisión. Dip. Mónica Granillo Velasco: Presidenta del Comité Editorial y de Biblioteca. | Lic. Emmanuel Ramírez Rodríguez: Defensor de Derechos Humanos del Municipio de Nezahualcōyotl. |
| Otomí | Centro Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya. 8 de julio | Gualterio Ramírez Luisa: Jefe Supremo Otomí. Ausencio Valencia Largo: Presidente del CIPIEM. María Ana González Hermitaño: Representante Indígena del Municipio de Toluca | Dip. Abraham Saroné Campos: Presidente de la Comisión. | Lic. Teresa Nava Bernal: Visitadora Adjunta de la CODHEM, Atención a Pueblos Indígenas. Lic. Sergio Núñez Luisa: Visitador de la CODHEM. |
| Pueblo | Lugar y fecha | Representantes | Diputados como autoridad responsable | Representantes del órgano garante de derechos humanos |
| Matlatzínca | Casa de Cultura de San Francisco Oxtotilpan, ubicado en el municipio de Temascaltepec. 12 de julio. | José Isabel González Benítez: Jefe Supremo Matlatzínca. Fernando Esquivel Ramírez: Jefe Supremo Nahua. Vicente Flores Escobar: Vocal Matlatzínca ante CEDIPIEM. | Dip. Abraham Saroné Campos: Presidente de la Comisión. | No asistió. |
| Tlahuica | Comisaría de Bienes Comunales de la Comunidad Agraria Indígena de San Juan Atzingo, ubicada en el municipio de Ocuilan. 15 de julio. | Raúl Raymundo Meregildo: Jefe Supremo Tlahuica. Alejo Gómez Procopio: Vocal ante el CEDIPIEM. Felipe González Zamora: <u>Presidente</u> del Consejo de Ancianos. | Dip. Abraham Saroné Campos: <u>Presidente</u> de la Comisión. Dip. Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera: Prosecretaría de la Comisión. | Lic. Mireya Preciado Romero: Visitadora General de la CODHEM, sede Tenango del Valle. |

Consulta en Materia Educativa a Personas con Discapacidad del Estado de México

Objeto de estudio

a) Personas con Discapacidad

El Censo de Población y vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) identifica a las personas con discapacidad como aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades consideradas básicas, como: ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, así como el realizar su cuidado personal y comunicarse.³

Este grupo de población es uno de los más vulnerables porque vive en condiciones agudas de exclusión.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad dispone y define cuatro tipos de discapacidad:

1. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
2. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

³ <https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx#:~:text=Censo%20de%20Poblaci%C3%B3n%20y%20Vivienda%202020..su%20cuidado%20perso%20na%20y%20comunicarse>

3. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, y
4. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

b) Delimitación

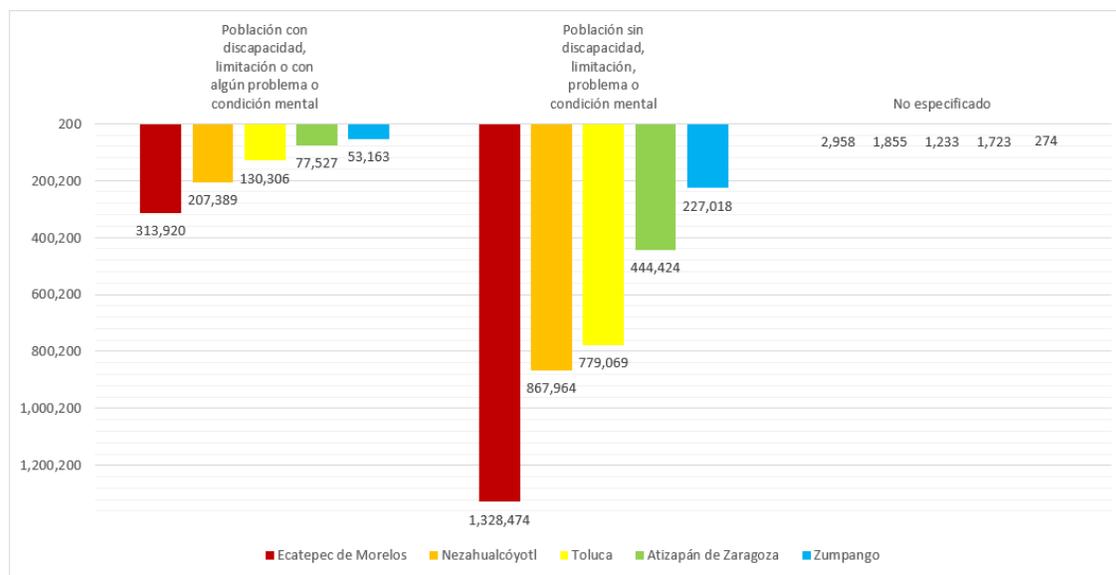
México ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial con 126 014 024 habitantes; de ellos, casi 21 millones de habitantes presentan alguna discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o algún problema o condición mental.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la entidad federativa más poblada del país es el Estado de México, con un registro de 16 992 418 habitantes, de las cuales el 51.4% (8 841 123) son mujeres y el 48.6% (8 251 295) son hombres; la edad promedio de todos los habitantes es de 30 años.⁴

Asimismo, de las cinco entidades en las que se concentra el mayor número de personas con discapacidad, el Estado de México encabeza, con un registro de 2 millones 786 mil 679. Dicha población demanda mejores condiciones de vida, por lo que es prioridad atender sus necesidades, y en el caso de lo que le compete a esta Comisión, velar porque el derecho a una educación inclusiva y con equidad, sea una realidad para las personas con discapacidad.

Los cinco municipios que cuentan con mayor concentración de personas con discapacidad son:

1. Ecatepec de Morelos;
2. Nezahualcóyotl;
3. Toluca;
4. Atizapán de Zaragoza, y
5. Zumpango.



Elementos mínimos para la consulta dirigida a las personas con discapacidad

Previa, pública y abierta. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos y procedimientos en una convocatoria en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar en el proyecto de iniciativa y proceso legislativo.

Accesible. Esto implica que las convocatorias deben realizarse con lenguaje ciudadano, en formato de lectura fácil y adaptada para ser entendible de acuerdo a las necesidades por el tipo de discapacidad; aunado a que el órgano legislativo debe procurar

⁴ [ResultCenso2020_EdMx.pdf \(ineqi.org.mx\)](https://ineqi.org.mx/ResultCenso2020_EdMx.pdf)

que la iniciativa y los dictámenes respectivos se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo.

Preferentemente directa. Es decir, que se priorice la participación inmediata de las personas con discapacidad y sólo secundariamente sus organizaciones representativas, a efecto de procurar que no se sustituya su voluntad.

Informada. A las personas con discapacidad u organizaciones involucradas se les debe proporcionar la información precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que pretende tomarse.

Regular y significativa. Debe realizarse en momentos significativos del proceso legislativo, esto es, en comisión previamente al dictamen respectivo y/o ante el pleno del órgano legislativo previamente a la discusión; aunado a que la participación de las personas con discapacidad o de las organizaciones que las representan deben ser analizadas y debatidas.

De participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones.

Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones. Además, resulta importante puntualizar que esta obligación no es oponible únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma, o derogación de normas generales que incidan directamente en las personas con discapacidad.

Actores involucrados en la consulta

| Región | Lugar y fecha | Intérpretes de lengua de señas mexicana | Diputados como autoridad responsable | Representantes del órgano garante de derechos humanos |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Asamblea Valle de Toluca | Palacio del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, Sala: Benito Juárez García. Calle Riva Palacio S/N Colonia Centro, Toluca de Lerdo, Méx. 13 de julio. | Lic. Viridiana Esquivel Colindres: DIFEM Lic. Carlos Rogel: IMEDIS | Dip. Abraham Saroné Campos: Presidente de la Comisión. Dip. Rigoberto Vargas Cervantes: Secretario de la Comisión. Dip. Mónica Granillo: Presidenta del Comité Editorial y Biblioteca de la LXI Legislatura del Estado de México | Lic. Teresa Nava Bernal: Visitadora Adjunta de la Comisión de Derechos Humanos (CODHEM). |

| Región | Lugar y fecha | Intérpretes de lengua de señas mexicana | Diputados como autoridad responsable | Representantes del órgano garante de derechos humanos |
|--------------------------|---|--|--|---|
| Asamblea Valle de México | Centro Cultural del Valle de México, Avenida Indeco S/N Colonia Los Reyes Iztacala, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México. 14 de julio. | Lic. Viridiana Esquivel Colindres: DIFEM Lic. Carlos Rogel: IMEDIS | Diputado Rigoberto Vargas Cervantes: Secretario de la Comisión. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz: Asociado la Comisión. Diputada Mónica Granillo Velazco: Presidenta del Comité Editorial y Biblioteca de la LXI Legislatura del Estado de México. | Lic. Ana Karen Vargas: Jefa del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad y Adulto Mayor de la CODHEM. |

De la misma forma, las diputadas y los diputados de la Comisión, tuvimos a bien celebrar consultas en materia educativa dirigidas a los sectores de la población cuya participación se prevé involucrada en la normatividad educativa del Estado de México. Los procesos de participación abierta permiten las contribuciones con respeto y equidad para manifestar coincidencias y disensos que se convierten en herramientas que aquilatan las propuestas e inquietudes de los sectores civil, académico, político y gubernamental, antes de adoptar cualquier medida legislativa.

Se procedió a la organización de la celebración de foros regionales de consulta para participar con propuestas para la construcción de la nueva Ley de Educación del Estado de México, invitando a los diversos actores de la comunidad educativa, como: los representantes de instituciones educativas, estudiantes, docentes, investigadores, especialistas en educación, madres y padres de familia, representaciones generales, autoridades en general, servidoras y servidores públicos educativos, organizaciones de la sociedad civil y diferentes representantes del sector público, social y privado. Derivado de lo anterior, se realizó el estudio y análisis de los principales ejes temáticos que se contemplarían en la nueva Ley de Educación del Estado de México.

El Foro Valle de México, se efectuó el 19 de febrero del presente año en el municipio de Chalco, Estado de México, en el cual se registró una participación de más de 246 ponentes de manera presencial y 230 a través de manera virtual; sumado al proceso, se celebró el Foro Valle de Toluca, efectuado el día 25 de febrero del año en curso en el municipio de Toluca, Estado de México, en cual se registró una participación de más de 142 ponentes de manera presencial y 123 en la modalidad virtual.

Durante estos recorridos y acercamientos, logramos constatar que muchas inquietudes históricas coinciden en dos temas, educación de excelencia para los educandos, y la dignificación del magisterio como primer respondiente del proceso educativo; como representantes populares nos responsabilizaremos en nuestros esfuerzos para atender el reclamo justificado y resonante de las y los participantes en la construcción de esta propuesta educativa.

Adyacente a las consultas y a fin de subsanar la deuda histórica con los pueblos y comunidades afromexicanas, la LXI Legislatura aprobó reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México por las que se reconoce como parte de la composición pluricultural del Estado de México y se les garantizan el pleno disfrute de sus derechos, así como la promoción de su igualdad plena y efectiva. Sus pueblos y comunidades contarán con los derechos garantizados por la Constitución para su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, así como el respeto a su cultura, lengua, usos, costumbres, educación, vivienda y empleo, también como a la participación y representación política, entre otros.

La reforma impulsada por el Presidente de esta Comisión, se apoyó de un proceso de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, celebrada el 20 de agosto de 2022, en cumplimiento a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas. Con este antecedente de reforma constitucional nuestras leyes locales que aborden la mención de los pueblos y comunidades afromexicanas, se configurarán con sustento; lo anterior, amparará la esfera jurídica de los pueblos y comunidades afromexicanas en la nueva Ley de Educación del Estado de México.

Con la finalidad de dar seguimiento a los trabajos de la Comisión, se aprobó por unanimidad de votos en fecha del 12 de octubre de 2022, el acuerdo por el que se integra el Comité de Revisión Técnica, integrado por diputadas y diputados y asesores, para analizar y revisar de manera permanente y conjunta la elaboración de una propuesta de anteproyecto integral de la Ley de Educación del Estado de México.

Reconocemos la participación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México, por el trabajo colaborativo en la revisión de la norma jurídica de la presente Ley.

Finalmente, se refrenda respetuosamente ante esta soberanía que mediante el acuerdo de nuestra Comisión, registrado el 27 de septiembre del presente año en reunión de trabajo, aprobamos por unanimidad de votos presentar esta iniciativa a nombre de los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

La presente propuesta, es resultado de un trabajo colegiado y consensado, además coincidente en la construcción y mejoramiento del Estado democrático-progresista, al que todas y todos aspiramos, concibiendo el alcance de su desarrollo a través de la educación.

ATENTAMENTE.- DIP. ABRAHAM SARONÉ CAMPOS.- PRESIDENTE.- DIP. RIGOBERTO VARGAS CERVANTES.- SECRETARIO.- DIP. AURORA GONZÁLEZ LEDEZMA.- PROSECRETARIA.- DIP. MARÍA DEL ROSARIO ELIZALDE VÁZQUEZ.- DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ.- DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA.- DIP. KARLA GABRIELA ESPERANZA AGUILAR TALAVERA.- DIP. GRETTEL GONZÁLEZ AGUIRRE.- DIP. ROMÁN FRANCISCO CORTÉS LUGO.- DIP. MARTHA AMALIA MOYA BASTÓN.- DIP. MARÍA ELIDA CASTELÁN MONDRAGÓN.- DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN.- DIP. JUANA BONILLA JAIME.

Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda que dice: Diputadas y Diputados Locales Estado de México.

DICTAMEN FORMULADO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 306, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” EL DÍA 6 DE MAYO DE 2011, Y EN SU LUGAR, SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Presidencia de la "LXI" Legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Educación del Estado de México, expedida mediante Decreto número 306 publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el día 6 de mayo de 2011 y, en su lugar, se expide la Ley de Educación del Estado de México, presentada por integrantes de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Desarrollado el estudio de la Iniciativa y ampliamente discutido en la Comisión Legislativa, nos permitimos, con sustento en lo establecido en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la aprobación de la Legislatura el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la "LXI" Legislatura celebrada el día diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, los integrantes de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en ejercicio del derecho de Iniciativa Legislativa señalado en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentaron a la consideración de la Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Educación del Estado de México, expedida mediante Decreto número 306, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el día 6 de mayo de 2011 y, en su lugar, se expide la Ley de Educación del Estado de México.

2.- En la mencionada sesión fue remitida la Iniciativa con Proyecto de Decreto a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen.

3.- El día diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, mediante oficio, las Secretarías de la Directiva de la "LXI" Legislatura hicieron llegar la Iniciativa con Proyecto de Decreto al Presidente de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen y, con inmediatez, en cumplimiento de sus funciones el Secretario Técnico de la Comisión Legislativa entregó copia de la Iniciativa con Proyecto de Decreto a cada integrante de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

4.- Los días 5 y 8 de abril, 17 de mayo, 9 de junio, 20 de agosto y 12 de octubre de 2022; así como los días 13 y 27 de septiembre de 2023, quienes integramos la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología celebramos reuniones previas, en etapa prelegislativa con motivo de la integración de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley de Educación del Estado de México, el día 25 de octubre del año en curso, iniciamos los trabajos de análisis de la Iniciativa y el día 13 de noviembre del citado año, realizamos reunión de dictaminación.

5.- La presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por las y los integrantes de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología fue el resultado de un cuidadoso proceso de integración y armonización legislativa para conformar una Ley consecuente con la Ley General de Educación y con la realidad económica, política y social de las y los mexiquenses.

Con la integración de la Iniciativa, la Comisión Legislativa busca favorecer el cumplimiento del mandato previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 15 de mayo de 2019, ordenamiento en el que se precisa que las Legislaturas de los Estados, que, en el ámbito de su competencia, realizarán la adecuación de la legislación estatal.

La integración del anteproyecto se llevó a cabo en cinco etapas, y es una propuesta colegiada, plural, incluyente, en la que cada integrante de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se involucró y fue protagonista del documento, así como diputadas y diputados asociados que se sumaron a las actividades y que contribuyeron con sus aportaciones.

Etapas de Integración: 1ª. Celebración de las consultas en materia educativa dirigidas a pueblos y comunidades indígenas y las personas Afromexicanas, personas con discapacidad y los diversos actores educativos. 2ª. Reconocimiento de los Afromexicanos, de conformidad con la Constitución Política del Estado de México. 3ª. Integración del Comité de Revisión Técnica. 4ª. Revisión de iniciativas legislativas de la "LXI" Legislatura en materia educativa para su incorporación en la nueva Ley. 5ª. Recepción y análisis de observaciones formuladas por diversas instancias, destacando la Coordinación de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.

En atención a la etapa 4ª, de integración de la Iniciativa fueron analizadas y, en lo conducente, se incorporaron propuestas de 20 iniciativas legislativas sometidas a la consideración de la "LXI" Legislatura por diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios, aclarando que algunas de ellas ya habían sido aprobadas por el Pleno Legislativo e incorporadas a la Ley vigente. Las propuestas legislativas, como parte del ejercicio de conformación integral del nuevo cuerpo normativo, fueron tomadas en cuenta, en lo conducente, enriqueciendo el contenido y alcances del proyecto de decreto de la Iniciativa que se dictamina. Conforme a las disposiciones jurídicas que norman el proceso legislativo, en lo aplicable y previa determinación de la Comisión Legislativa correspondiente, diversas iniciativas habrán de tenerse por resueltas.

En este contexto reconocemos al diputado Rigoberto Vargas Cervantes, a la diputada Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera, a la diputada Karla Leticia Fiesco García, a la diputada Ma. Trinidad Franco Arpero, a la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, al diputado Gerardo Jesús Izquierdo Rojas, al diputado Sergio García Sosa, al diputado Enrique Vargas del Villar, al diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez, al diputado Román Francisco Cortés Lugo, a la diputada Mónica Miriam Granillo Velasco, al diputado Omar Ortega Álvarez, a la diputada Viridiana Fuentes Cruz, a la diputada María Érida Castelán Mondragón, a la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, a la diputada Claudia Desiree Morales Robledo, a la diputada Myriam Cárdenas Rojas, a la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas, a la diputada Brenda Escamilla Sámano, al diputado Renee Alonso Rodríguez Yáñez, al diputado Daniel Andrés Sibaja González, al diputado Faustino de la Cruz Pérez, a la diputada Azucena Cisneros Coss, al diputado Camilo Murillo Zavala, a la diputada Luz Ma. Hernández Bermúdez, a la diputada Silvia Barberena Maldonado, a la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández, al diputado Alfredo Quiroz Fuentes, al diputado Emiliano Aguirre Cruz y al diputado Abraham Saroné Campos, sus propuestas legislativas y las destacadas aportaciones realizadas en la materia.

En el apartado de Consideraciones de este Dictamen, se describe cada una de las iniciativas y los autores promoventes, para los efectos procedentes.

6.- Como resultado de los trabajos de estudio desprendemos que el Proyecto de Decreto conlleva importantes aportaciones y grandes avances en materia educativa, el Proyecto de decreto, perfecciona la normativa actual y fortalece el marco jurídico armonizando su contenido con la legislación general y con las necesidades de nuestra Entidad, generando un basamento jurídico, de calidad, sólido y eficaz, para las y los mexiquenses, en el que sobresale lo siguiente: Garantiza el derecho a la educación; favorece la cobertura universal en educación, dispone la gratuidad de los certificados médicos para apoyar la economía de los educandos; los principios, fines y criterios de la educación se sustentan en valores; es congruente, con las acciones de la materia desarrolladas por la Federación y fortalece a los municipios; vigoriza el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación; asegura el ejercicio de derechos en relación con educación indígena y afromexicana; plantea un enfoque humanista en la educación; plantea una educación inclusiva; establece acciones para la educación especial; vigoriza la normativa de la educación para las personas adultas; permite la corresponsabilidad en el proceso educativo; garantiza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; combate el rezago educativo y la deserción escolar; facilita el control de los alimentos y las bebidas nutritivas en las escuelas; fomenta estilos de vida saludables; promueve la cultura del cuidado del agua; considera medidas para preservar la integridad física, psicológica y social del educando; promueve la cultura de la paz y no violencia en las escuelas; permite la contratación del seguro escolar contra accidentes para los educandos; dispone acciones para lograr los fines de la revalorización de las maestras y los maestros; impulsa medidas administrativas en apoyo de las y los docentes; incorpora medidas con la infraestructura física educativa; incluyendo mantenimiento de muebles e inmuebles; y prevé disposiciones en cuanto a la intervención de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.

7.- El Proyecto de Decreto de la Ley de Educación del Estado de México, garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Las disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de México.

Su objeto es regular la educación impartida en el Estado de México por parte de las autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados y desconcentrados, los municipios y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

La educación es considerada un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El contexto internacional, nacional y estatal actual exige que como entidad con características demográficas sociales, culturales y económicas, específicas construyan un proyecto educativo, que, conforme a los principios de la política educativa nacional, permita ofertar un servicio educativo pertinente, con las condiciones de vida de los habitantes del Estado de México, de acuerdo con las aspiraciones, que como sociedad tenemos para el presente y futuro, asumiendo un compromiso que se traduzca en mayores oportunidades de una vida digna para todos.

Por lo que, resulta procedente la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Educación del Estado de México, expedida mediante decreto número 306 publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el día 6 de mayo de 2011 y, en su lugar, se expide la Ley de Educación del Estado de México.

CONSIDERACIONES.

Compete a la "LXI" Legislatura conocer y resolver la Iniciativa con Proyecto de Decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 fracciones I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno.

La dictaminación de la Iniciativa atiende también a lo preceptuado en el artículo 61 fracción IV del ordenamiento constitucional invocado que faculta a la Legislatura para cumplir con las obligaciones de carácter legislativo que le fueren impuestas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de la Unión, expidiendo al efecto las leyes locales necesarias.

Apreciamos que la propuesta legislativa busca atender el mandato de la Ley General de Educación publicada el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, que establece la responsabilidad de las Legislaturas para armonizar el marco jurídico en la materia, cuyo artículo sexto transitorio dispone: *"Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con el presente Decreto."*

Es evidente, como se expresa en la Iniciativa que a la distancia de poco más de doce años el Estado de México no ha generado una reforma educativa profunda que actualice al sistema gubernamental de conformidad con las nuevas realidades y contextos, por lo que, es necesario expedir una nueva normativa jurídica, acorde con el presente y que sea útil para la constitución a un mejor futuro, como demanda el servicio educativo.

Las y los dictaminadores, integrantes de la Comisión Legislativa, ratificamos que la propuesta es respetuosa de las atribuciones plasmadas para cada autoridad educativa conforme a la distribución de la función social en educación, es decir, considerando la participación que le corresponde a la autoridad educativa federal y reconociendo la participación de las autoridades educativas, estatal y municipal, así como la concurrencia entre ellas que permite la Ley General desde sus respectivos ámbitos de competencia, como se hace ver en la parte expositiva de la propuesta legislativa.

Destacamos que la presentación de la Iniciativa fue producto de un minucioso proceso de revisión e integración normativa, en el que la Comisión Legislativa de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología desempeño un papel principal, sustanciando diversas reuniones de trabajo, en la fase prelegislativa, y posteriormente, en la legislativa, hasta la dictaminación.

Tuvimos una reunión el 5 de abril de 2022, con la finalidad de presentar el Plan de Trabajo para Armonizar la Ley General de Educación en el Estado de México, resultando su aprobación por unanimidad de votos.

El 8 de abril de 2022, celebramos con el objetivo de presentar la propuesta de Ley de Educación Marco para las Entidades Federativas del Acuerdo Educativo Nacional para la Armonización Legislativa Estatal, las y los miembros de la Comisión, reunión de trabajo, en la que se contó con la participación de la Coordinación Sectorial de Enlace con el Congreso de la Jefatura de la Oficina de la Secretaría de Educación Pública, la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México, y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.

Nos reunimos el 17 de mayo de 2022, con el objeto de informar a los titulares del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), el Instituto Mexiquense para la Discapacidad (IMEDIS) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), sobre los procesos de consulta que se realizarían a los pueblos y comunidades indígenas, afroamericanas, así como a las personas con discapacidad; se solicitó la colaboración institucional de dichos organismos gubernamentales para el desarrollo de las asambleas regionales con la finalidad de armonizar la Ley General de Educación en el Estado de México. También, se realizó la presentación del cronograma de actividades, las fases y las características que deben regir a la consulta en materia educativa indígena y afroamericana; así como, los elementos mínimos a considerar en la consulta dirigida a las personas con discapacidad en materia de educación inclusiva.

La Comisión Legislativa realizó una reunión de trabajo el 9 de junio de 2022, con el objeto de aprobar y publicar las convocatorias para la “Consulta en Materia Educativa a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas del Estado de México” y la “Consulta en Materia Educativa dirigida a las personas con discapacidad del Estado de México”.

Resaltamos que las consultas se enfocaron en impulsar la armonización de la Ley General de Educación en el Estado de México con una perspectiva pluricultural, pluriétnica e inclusiva; previo a ello, bajo los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas resoluciones judiciales, procurando el respeto esencial de las fases y las características que componen a esta y además congruente con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la exposición de motivos de la Iniciativa se puntualizó el desarrollo de las consultas.

Por otra parte, las diputadas y los diputados de la Comisión, en la etapa previa, tuvimos a bien celebrar consultas en materia educativa dirigidas a los sectores de la población cuya participación se prevé involucrada en la normatividad educativa del Estado de México. Los procesos de participación abierta permiten las contribuciones con respeto y equidad para manifestar coincidencias y disensos que se convierten en herramientas que aquilatan las propuestas e inquietudes de los sectores civil, académico, político y gubernamental, antes de adoptar cualquier medida legislativa.

Asimismo, como se comentó en la Iniciativa, adyacente a las consultas y a fin de subsanar la deuda histórica con los pueblos y comunidades afromexicanas, la LXI Legislatura aprobó reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México por las que se reconoce como parte de la composición pluricultural del Estado de México y se les garantizó el pleno disfrute de sus derechos, así como la promoción de su igualdad plena y efectiva. La reforma impulsada por el Presidente de esta Comisión, se apoyó de un proceso de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, celebrada el 20 de agosto de 2022, en cumplimiento a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas. Con este antecedente de reforma constitucional nuestras leyes locales que aborden la mención de los pueblos y comunidades afromexicanas, se configurarán con sustento; lo anterior, amparará la esfera jurídica de los pueblos y comunidades afromexicanas en la nueva Ley de Educación del Estado de México.

Para dar seguimiento a los trabajos de la Comisión, aprobamos por unanimidad de votos en fecha del 12 de octubre de 2022, el acuerdo por el que se integra el Comité de Revisión Técnica, integrado por diputadas, diputados y asesores, para analizar y revisar de manera permanente y conjunta la elaboración de una propuesta de anteproyecto integral de la Ley de Educación del Estado de México.

En este tenor, reconocemos la participación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México, por el trabajo colaborativo en la revisión de la norma jurídica de la presente Ley.

Con base en lo actuado, el 27 de septiembre del presente año en reunión de trabajo, aprobamos por unanimidad de votos presentar la Iniciativa a nombre de los integrantes de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS ARGUMENTOS.

Reconocemos, como lo hace la Iniciativa, la trascendencia de la educación en el desarrollo individual y colectivo de las y los mexiquenses, y advertimos que una de las más nobles tareas e importantes responsabilidades es la de legislar en relación con el derecho de la educación y con los principios y las instituciones que contribuirán a su materialización, y por ende a la formación integral de la persona humana.

Destacamos que la educación ocupa un lugar principal en la agenda pública y que su normativa es transversal pues implica a la universalidad de conocimiento, del bienestar y de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y que implica también la participación de las madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros como parte de la comunidad educativa del país y del Estado cuya intervención será decisiva en el bienestar del presente y de futuras generaciones y en el propio mejoramiento de las instituciones que sustentan al Estado Mexicano.

Como se afirma en la Iniciativa, la educación es un elemento *sine qua non* para el afianzamiento del Estado Constitucional de Derecho, cuyas bases se sustentan en la Carta Magna y en la Ley General de la materia, y su contenido particulariza los principios del artículo 3º. Constitucional, y fundamenta la propuesta legislativa que se dictamina.

En tal sentido, el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.”

“Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.”

“La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.”

“El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.”

Quienes dictaminamos encontramos que la Iniciativa es concordante con este basamento constitucional y busca generar un nuevo ordenamiento jurídico para el Estado de México, que a partir de esos principios favorezca la atención de la educación en nuestra Entidad, en armonía con la legislación general de la materia.

Es evidente que la normativa propuesta adquiere mayor relevancia tratándose del Estado de México, pues es la Entidad con la matrícula más grande del país de alumnas y alumnos, como se ilustra en la Iniciativa, sin pasar por alto la sobresaliente labor que con profesionalismos y dedicación desempeñan las maestras y los maestros, así como la infraestructura que se necesita para su mejor atención.

Apreciamos que la propuesta legislativa pretende atender los problemas a los que se ha enfrenado históricamente el pueblo mexiquense y que incluyen el abandono escolar y rezago educativo, así como, condiciones de desigualdad e inequidad en servicios y oportunidades educativas, que si bien es cierto, han sido abordados y tratados en acciones y políticas públicas, también lo es, que han resultado insuficientes y que exigen de nuevos soportes jurídicos, esto es, de una legislación actualizada, de vanguardia, en sintonía con la dinámica social del país y del Estado de México, como la propuesta legislativa que nos ocupa.

Coincidimos con las y los autores de la propuesta legislativa, en el sentido de que, como Congreso del Estado de México, tenemos la responsabilidad de brindar las herramientas jurídicas, indefensables para atender las demandas y los requerimientos sociales, y, en ese propósito, se inscribe la Iniciativa, de la que advertimos un destino de observancia permanente ante su ejecución.

Más aún, no podemos definir al Sistema Educativo sin la reconocida participación de quienes por su preparación y desempeño profesional han destacado e incidido en la promoción de los aprendizajes de nuestras alumnas y alumnos, así como su colaboración respetuosa y armónica en favor de la comunidad escolar, a las maestras y maestros, en quienes depositamos nuestra confianza para participar en la nueva política educativa estatal.

Estamos de acuerdo en que la propuesta visibiliza la adopción de los principios educativos de nuestro país: La rectoría del Estado en la educación; el federalismo educativo con base en una clara distribución de competencias; el reconocimiento de las realidades y contextos regionales y locales del Estado de México, y el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las acciones educativas del Estado.

De igual forma, en que rescata los ideales de una educación humanista que considera a la dignidad, el conocimiento y la formación como resultado del génesis en el Sistema Educativo Estatal que se ajustará a los siguientes objetivos: Ubicar como centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de México, para lograr una educación con equidad y de excelencia, pilares de la Nueva Escuela Mexicana; fortalecer el federalismo educativo para cumplir con los principios, fines y criterios de la educación; impulsar la corresponsabilidad social en el proceso de construcción de saberes, y armonizar la legislación del Estado de México con el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias.

Apreciamos que la propuesta legislativa fue construida con base en un muy completo proceso de integración, que se nutrió con la realidad y con la objetividad técnica suficiente, para asegurar una Ley verdaderamente útil y de vanguardia, consecuente con los principios constitucionales y con las exigencias en materia educativa. En este tenor y de conformidad con un cuidadoso estudio resaltamos aspectos trascendentes del Proyecto de Decreto, en los términos siguientes:

Es evidente que la propuesta legislativa garantiza el derecho a la educación, teniendo por objeto regular la educación impartida en el Estado de México por parte de las autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados, los municipios y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, además, su aplicación y vigilancia para su cumplimiento corresponderá a las autoridades educativas del Estado de México y de los municipios.

Creemos que incide favorablemente en la cobertura universal en educación, y en el Estado de México reforzará el derecho a la educación que toda persona tiene, comprendido como el medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional.

Es correcto que ratifique la gratuidad de los certificados médicos para apoyar la economía de los educandos, al disponer de las medidas necesarias para que los certificados médicos de los educandos que lo requieran para sus trámites escolares se emitan sin costo alguno.

Encontramos altamente valioso, sobre principios, fines y criterios de la educación sustentados en valores que promuevan y atiendan todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial, especial y superior, además se apoyará a la investigación científica, tecnológica y humanística, alentando el fortalecimiento y difusión de la cultura estatal, nacional y universal. También que fomente la educación dual, en los tipos de educación media superior y superior.

Es concordante con el modelo de la Nueva Escuela Mexicana en la educación del Estado de México. Así, las acciones que desarrolle la federación, el Estado de México y sus municipios, tendrán como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientando el Sistema Educativo Estatal, incidiendo en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad y el impulso de las transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Lo anterior será a través de la Nueva Escuela Mexicana, tal y como lo dispone la Ley General de Educación.

Responde a elevadas expectativas en la materia, particularmente, en lo referente al derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación. Reconocerá el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la cultura.

Resaltamos que atiende los principios constitucionales y la normativa internacional aplicable tratándose de la educación indígena y afroamericana. Garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afroamericanas, migrantes y jornaleros agrícolas; además la educación indígena deberá atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística, basándose en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de las culturas del Estado de México.

Mención especial nos merece su enfoque humanista en la educación, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad en armonía con la naturaleza.

Responde también a las expectativas de una educación inclusiva, referida al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, para eliminar las prácticas de discriminación, exclusión y segregación.

Valoramos las acciones para la educación especial que contempla pues se establecerá un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación.

Da atención a las personas adultas, teniéndolas dentro de sus objetivos y regulando el proporcionar los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo a través de diversos tipos y modalidades de estudio.

Encontramos que vigoriza la corresponsabilidad en el proceso educativo. Las madres y los padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

Nuestra obligación principal es cuidar y fortalecer el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En ese sentido, prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, se garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo dicho principio constitucional.

Necesario y de gran actualidad es el combate al rezago educativo y a la deserción escolar, uno de los problemas más grandes en la eficacia de la educación, por lo que, es un gran acierto la normativa que establece programas y campañas de manera periódica para disminuir el rezago educativo y la deserción escolar en el Estado de México.

El adecuado control de los alimentos y las bebidas nutritivas en las escuelas, es fundamental para el provecho de los educandos, por ello, es pertinente realizar acciones de vigilancia para que en los alimentos y bebidas que se preparen y procesen al interior de las escuelas cumplan con el valor nutritivo para la salud de los educandos.

Asimismo, es comento el fomento de estilos de vida saludables que subyace en la propuesta legislativa y que contribuirá al desarrollo de una cultura de la salud, promoviendo la educación física, la práctica del deporte, los hábitos de higiene y de sana alimentación, promoviendo y fomentando la educación sobre salud bucodental. Así como la educación sexual y reproductiva, la salud e higiene menstrual y la prevención de adicciones a través del conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Por lo que, hace a la promoción de la cultura del cuidado del agua es plausible e indispensable promover la cultura del cuidado del agua, enfocada a soluciones creativas para su captación, con el fin de darle un uso racional y responsable.

Son viables las medidas para preservar la integridad física, psicológica y social del educando como propone el Proyecto de Decreto, del que se desprende que se implementará una coordinación con las instituciones académicas para capacitar a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.

En nuestra consideración es obligado promover la cultura de la paz y no violencia en las escuelas, como se hace en la propuesta legislativa, para generar la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. También se realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.

En el mismo contexto, concebimos los protocolos para el fomento de la cultura de la paz y no violencia. En términos, de la propuesta legislativa se emitirán los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de acciones que promuevan la cultura de la paz y no violencia. Entre los protocolos que se emitan, deberán encontrarse para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, se determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.

Es pertinente prever seguro escolar contra accidentes para los educandos. De conformidad con la normativa se realizará la contratación de un seguro escolar contra accidentes para los educandos que cursen el tipo básico dentro del Sistema Educativo Estatal.

Conviene desarrollar acciones para lograr los fines de la revalorización de las maestras y los maestros y la propuesta priorizará la labor pedagógica de los docentes y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre la carga administrativa, promoviendo su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en el ámbito donde desarrollen su labor.

Resulta correcto, en apoyo de la descarga administrativa del magisterio que haya revisión permanente de las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y eficiencia.

Es adecuado que se dé mayor precisión en la regulación de requisitos y condiciones de la infraestructura física educativa, como se plasma en las disposiciones jurídicas. Los muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, procurando el uso de energías renovables, para proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión.

La propuesta legislativa contribuye al mantenimiento de los muebles e inmuebles destinados al servicio educativo, promueve la participación directa de los municipios para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales. Los ayuntamientos coadyuvarán en el mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y luz.

Son apropiadas las disposiciones referentes a derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela. Serán normadas las intervenciones precisas para el buen actuar de las madres, los padres de familia o tutores respecto a la responsabilidad que tienen sobre sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años. Asimismo, se establece el procedimiento conducente en caso de cometer alguna omisión respecto a sus obligaciones.

La conformación de la Iniciativa en sus fases prelegislativa y legislativa fueron muy completas, de estudio técnico-objetivo y de suma de consensos, y como parte de los trabajos analizamos 20 iniciativas presentadas a la Legislatura por diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios, determinando, con sujeción a la técnica legislativa incorporar al texto del Proyecto de Decreto aquellas propuestas que estimamos viables, aun cuando algunas ya habían sido resueltas por la Asamblea Legislativa, precisando que, en términos de las disposiciones legales y reglamentarias, se determinaron en situación jurídica de las iniciativas, teniéndose por atendidas en lo conducente, en los casos que se estime procedente.

A continuación, nos permitimos describir las iniciativas que, en lo conducente, fueron analizadas y tomadas en cuenta en el Proyecto de Decreto correspondiente.

1. En materia de Menstruación Digna.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción X al artículo 43 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; se adiciona la fracción II Ter al artículo 12, se reforma la fracción XIX del artículo 17, se reforman las fracciones XXXV y XLIII, se agrega la fracción LIV, recorriéndose la subsecuente, del artículo 27 y se agrega la fracción XVI del artículo 28, recorriéndose la subsecuente, de la Ley de Educación del Estado de México. PRD

2. Con el fin de apoyar a los menores huérfanos de la entidad a continuar sus estudios.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona a la Ley de Educación del Estado de México. PAN

3. Con el propósito fundamental de priorizar el interés superior, la igualdad de género y la gestión de la higiene menstrual en niñas, adolescentes y mujeres, garantizando con ello su permanencia y participación en los servicios educativos, que el estado suministre productos para la gestión menstrual, así como planes y programas con perspectiva de género y educación menstrual.

Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman diversos artículos del Código Administrativo del Estado de México y de la Ley de Educación del Estado de México. PAN

4. Incluir como fin de la educación los conceptos de igualdad de género, y la erradicación de todo tipo de violencia.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVIII del artículo 17 de la Ley de Educación del Estado de México. Nueva Alianza (Sin Partido)

5. Con el objeto de evitar el abandono escolar, estimular el desempeño académico y favorecer las condiciones para que se reduzca la deserción, generando becas que no dependan solo de los promedios, sino que sean en sí mismo un estímulo para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no abandonen los estudios y logren sus metas.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XXI del artículo 25 de la Ley de Educación del Estado de México. PAN

6. Con el objeto de buscar disminuir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el Estado de México.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, la **Ley de Educación del Estado de México**, la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la Ley de Movilidad del Estado de México, la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de México, la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios, la Ley de Seguridad del Estado de México, la Ley de Víctimas del Estado de México, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado de México, la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México, la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, el Código Administrativo del Estado de México, el Código Civil del Estado de México, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y el Código Penal del Estado de México. Diputadas de la LXI Legislatura

7. Con el objeto de otorgar becas por orfandad a niñas, niños y adolescentes para garantizar la continuidad de sus estudios.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI Quinques del artículo 27 de la **Ley de Educación del Estado de México**. PAN

8. Con el propósito de involucrar a las madres y padres de familia en el aprovechamiento educativo de sus hijas e hijos.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción tercera del Artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; se agrega un último párrafo al Artículo 7, se agrega un último párrafo al Artículo 10; se agrega la fracción XVII Bis, XXVII Bis y se reforma la fracción XVII del Artículo 12; se agrega el último párrafo al Artículo 15; se reforma la fracción LIV del Artículo 27, recorriéndose la subsecuente; se agrega la fracción XIII del Artículo 32; se agregan las fracciones I, VII, VIII, VIX del Artículo 185, se modifica la denominación del CAPITULO DÉCIMO para quedar "DE LOS PADRES DE FAMILIA Y TUTORES, y se crea la sección primera "DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES" y la sección segunda "DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN PARA PADRES, MADRES Y TUTORES" , agregándole los Artículos 185 Bis, 185 Ter, 185 Quater, 185 Quinquies y 185 Sexies, de la **Ley de Educación del Estado de México**. PRD

9. A efecto de atender y mantener las Escuelas de Tiempo Completo en la Entidad.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 27 de la Ley de Educación del Estado de México. Morena

10. En materia de alfabetización tecnológica.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo dieciseisavo y el párrafo vigesimoprimer del artículo 5 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, se reforma la fracción XXIX del artículo 12, la fracción XI del artículo

17, las fracciones XIV y XVI, XXI, XXXI y se agrega la fracción XVI Bis del artículo 27 de la Ley de Educación del Estado de México y se reforma la fracción VIII y se agrega la fracción X del artículo 9 de la Ley de la Juventud del Estado de México. PRD

11. Con la finalidad de crear la Universidad del Agua Mexiquense.

Iniciativa de reforma por el que se adiciona un párrafo al artículo 7, se adiciona un párrafo a la fracción XXVI del artículo 17 y se adiciona un párrafo al artículo 89, de la Ley de Educación del Estado de México. PAN

12. Adicionar como atribución de la Secretaría de las Mujeres la difusión de la información en materia de masculinidades positivas, así como que sea uno de los fines de la educación que imparta el Estado.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan una fracción XVII Bis del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y una fracción XVIII Bis al artículo 17 de la Ley de Educación del Estado de México. PRI

13. Con el objetivo de establecer una única entrega de actas de nacimiento en el ingreso de los estudiantes.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de Educación del Estado de México. Morena

14. Prever la educación dual como modalidad educativa en las instituciones del tipo Medio Superior y Superior, con carácter tecnológico.

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de México. PRI

15. Con la finalidad de crear la “Escuela de Negocios, Oficios e impulso a Emprendedores del Estado de México” para poder brindar la opción de obtener la formación necesaria para crear un proyecto que le permita al emprendedor introducirse al mercado.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de México. PAN

16. A efecto de otorgar certeza jurídica a los procedimientos preventivos tipo “mochila segura”, así como también reforzar medidas de seguridad en planteles educativos del Estado.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes del Estado de México, la Ley de Educación del Estado de México. La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Ley de Seguridad del Estado de México. Morena

17. Respecto a temas de salud e higiene menstrual.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción XX, recorriéndose la subsecuente al artículo 2.16 y se reforma la fracción XVI del artículo 3.8 del Código Administrativo del Estado de México, se adiciona una fracción XII al artículo 31 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y se reforma la fracción XIX del artículo 17 de la Ley de Educación del Estado de México. PVEM

18. Con la finalidad de instrumentar distintas propuestas a diversos códigos y leyes que sustentan las bases y el punto de inicio para la transformación estructural del campo mexiquense; particularmente en materia educativa con el fomento e impulso del respeto, reconocimiento, valoración e importancia de la agricultura en la vida del ser humano en los programas de estudio a nivel básico.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, de la Ley de Educación del Estado de México, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. PRI

19. Con el fin de dar atención a los casos de acoso y violencia escolar.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de México; Ley de Educación del Estado de México, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y de la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México. **Morena**

20. Con el fin de que los padres de familia trabajadores puedan tomar reuniones o juntas escolares a través de plataformas o medios digitales.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de México. PT

"El contexto internacional, nacional y estatal actual, exige que como entidad con características demográficas, sociales, culturales y económicas específicas construya un proyecto educativo que, conforme a los principios de la política educativa nacional, permita ofertar un servicio educativo pertinente con las condiciones de vida de los habitantes del Estado de México; de acuerdo con las aspiraciones que como sociedad tenemos para el presente y futuro, asumiendo un compromiso que se traduzca en mayores oportunidades de una vida digna para todos".

ANÁLISIS Y ESTUDIO TÉCNICO DEL TEXTO NORMATIVO.

Sin duda, una de las materias más relevantes en la vida legislativa de los pueblos es la legislación relacionada con la educación, pues tiene que ver con la normativa jurídica y con las instituciones vinculadas con la formación, el conocimiento y el propio desarrollo individual y colectivo de la población, con mejores niveles de bienestar y progreso de las naciones, con la ciencia, la tecnología y con el conocimiento que favorece los derechos humanos y la dignidad de la persona humana.

La educación se constituye en un elemento indispensable para la transformación y para la elevación del nivel de vida entendido como posibilidad de incorporación social, igualdad de condiciones laborales, superación individual y colectiva y mejores expectativas de crecimiento.

En nuestro país, la educación ha ocupado un papel central y así ha sido ratificado en nuestra Ley fundamental, documento político y jurídico que concreta los valores, principios y la fuente jurídica de las y los mexicanos.

La educación ha sido una prioridad y ha sido enarbolada en los grandes movimientos de nuestra historia, sobre todo, en la Revolución Mexicana, en la que fue considerada como uno de los grandes motivos para mejorar la realidad de la gran mayoría de los mexicanos, llegando a ser un derecho humano fundamental y su garantía una obligación a cargo del Estado.

El Estado de México no ha sido ajeno a las exigencias del proceso educativo y la legislación estatal ha hecho suyos los postulados nacionales en la materia, sin embargo, entendemos que después de poco más de 12 años de la vigencia de la actual Ley de Educación del Estado de México es imprescindible un nuevo ordenamiento congruente con la dinámica social que vivimos, con la realidad nacional y de nuestra Entidad Federativa, con la propia evolución cultural, tecnológica y socioeconómica del concierto internacional.

Coincidimos con la procedencia de la Iniciativa, legitimada con un amplio proceso legislativo de conformación, que incluye una etapa previa de consulta a diversos sectores con apego a los derechos humanos y a la propia naturaleza de la materia que se regula. El nuevo ordenamiento sienta las bases jurídicas de la educación en el Estado de México como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, responde también a la evolución de nuestra Entidad y permite que la educación se convierta en un verdadero instrumento de superación de las y los mexiquenses.

Reconocemos que el Proyecto de Decreto de la Ley de Educación del Estado de México, garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Las disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de México.

Estamos de acuerdo con su objeto que es el de regular la educación impartida en el Estado de México por parte de las autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados y desconcentrados, los municipios y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Así como; que la educación sea considerada un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cuanto a la estructura del Proyecto de Decreto, con base en el proceso de integración y en las diversas aportaciones realizadas, estamos de acuerdo en que la nueva Ley se componga de 157 artículos y 7 transitorios, distribuidos en los Títulos y Capítulos siguientes:

| LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO | |
|--|--|
| Título Primero Del derecho a la educación | Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II Del ejercicio del derecho a la educación Capítulo III De la educación en el Estado de México |
| Título Segundo Del Sistema Educativo Estatal | Capítulo I De la naturaleza del Sistema Educativo Estatal Capítulo II Del tipo de educación básica Capítulo III Del tipo de educación media superior Capítulo IV Del tipo de educación superior Capítulo V Del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación Capítulo VI De la educación indígena Capítulo VII De la educación humanista Capítulo VIII De la educación inclusiva y especial Capítulo IX De la educación para personas adultas |

| | |
|--|--|
| <p>Título Tercero Del Proceso Educativo</p> | <p>Capítulo I De la orientación integral en el proceso educativo Capítulo II De los planes y programas de estudio Capítulo III De las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital en el proceso educativo Capítulo IV De la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior Capítulo V Del calendario escolar Capítulo VI De la participación de madres y padres de familia o tutores en el proceso educativo Capítulo VII De otros complementos del proceso educativo</p> |
| <p>Título Cuarto Del educando</p> | <p>Capítulo I Del educando como prioridad en el Sistema Educativo Estatal Capítulo II Del fomento de estilos de vida saludables en el entorno escolar Capítulo III De la cultura de la paz, convivencia democrática en las escuelas y entornos escolares libres de violencia</p> |
| <p>Título Quinto De la revalorización de las maestras y los maestros</p> | <p>Capítulo I Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo Capítulo II De la descarga administrativa Capítulo III De los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en educación básica y en educación media superior Capítulo IV Del sistema integral de formación, capacitación y actualización Capítulo V De la formación docente</p> |
| <p>Título Sexto De los planteles educativos</p> | <p>Capítulo Único De las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes</p> |
| <p>Título Séptimo De la mejora continua de la educación</p> | <p>Capítulo Único Del proceso de mejora continua de la educación en el Estado de México</p> |
| <p>Título Octavo Del Federalismo Educativo</p> | <p>Capítulo Único De la distribución de la función social en educación en el Estado de México</p> |
| <p>Título Noveno Del financiamiento a la educación</p> | <p>Capítulo Único De los recursos destinados a la Educación</p> |
| <p>Título Décimo De la corresponsabilidad social en el proceso educativo</p> | <p>Capítulo I De la participación de madres y padres de familia o tutores Capítulo II De los Consejos de Participación Escolar Capítulo III Del servicio social Capítulo IV De la participación de los medios de comunicación</p> |
| <p>Título Décimo Primero De la validez de estudios y certificación de conocimientos</p> | <p>Capítulo Único De las disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de conocimientos</p> |
| <p>Título Décimo Segundo De la educación impartida por particulares</p> | <p>Capítulo I De los particulares que impartan educación Capítulo II De los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares Capítulo III Del recurso administrativo</p> |

Por lo tanto, es procedente la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Educación del Estado de México, expedida mediante Decreto número 306 publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el día 6 de mayo de 2011 y, en su lugar, se expide la Ley de Educación del Estado de México.

En cuanto al régimen transitorio es correcto que la autoridad educativa estatal dentro de su ámbito de competencia deberá emitir o ajustar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones normativas conforme a lo establecido en el Decreto y las disposiciones que establezca la autoridad educativa federal, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor y que la publicación de las disposiciones normativas a las que se refiere el artículo anterior, seguirán aplicándose las disposiciones normativas vigentes.

Asimismo, estimamos adecuado que los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, continuarán, hasta su conclusión, regidos con los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones en los cuales se fundamentaron.

También, resulta pertinente que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del Decreto, se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes y que el sistema integral de formación, capacitación y actualización del Estado de México, previsto en el artículo 97 del Decreto deberá constituirse antes de finalizar el año 2024.

En atención a las razones mencionadas, y analizados y valorados los argumentos; se realizó el estudio técnico del Proyecto de Decreto; demostrado el beneficio social de la Iniciativa de Decreto; y acreditados los requisitos de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Es de aprobarse, en lo conducente, conforme al Proyecto de Decreto que ha sido elaborado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Educación del Estado de México, expedida mediante Decreto número 306 publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el día 6 de mayo de 2011, y en su lugar, se expide la Ley de Educación del Estado de México, presentada por integrantes de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto correspondiente.

TERCERO.- Conforme a lo expuesto y con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias que norman el proceso legislativo, de ser procedente, ténganse por atendidas, en lo conducente, las propuestas legislativas contenidas en diversas iniciativas descritas en este dictamen.

CUARTO.- Previa discusión y aprobación por la Legislatura en Pleno, remítase el Proyecto de Decreto a la Titular del Ejecutivo Estatal para los efectos procedentes.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los trece días del mes de noviembre de dos mil veintitrés.

LISTA DE VOTACIÓN

FECHA: 13/NOVIEMBRE/2023

ASUNTO: DICTAMEN FORMULADO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 306 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" EL DÍA 6 DE MAYO DE 2011, Y EN SU LUGAR, SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

COMISIÓN LEGISLATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

| DIPUTADA(O) | FIRMA | | |
|--|---------|-----------|------------|
| | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN |
| Presidente Dip. Abraham Saroné Campos | √ | | |
| Secretario Dip. Rigoberto Vargas Cervantes | √ | | |
| Prosecretaria Dip. Aurora González Ledezma | √ | | |
| Dip. María del Rosario Elizalde Vázquez | √ | | |
| Dip. Faustino de la Cruz Pérez | | | |
| Dip. Valentín González Bautista | √ | | |
| Dip. Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera | √ | | |
| Dip. Gretel González Aguirre | √ | | |
| Dip. Román Francisco Cortés Lugo | | | |
| Dip. Martha Amalia Moya Bastón | √ | | |
| Dip. Sergio García Sosa | | | |
| Dip. María Elida Castelán Mondragón | √ | | |
| Dip. María Luisa Mendoza Mondragón | √ | | |
| Dip. Juana Bonilla Jaime | √ | | |

CONSEJERÍA JURÍDICA

Al margen Escudo del Estado de México, un logotipo, que dice: Estado de México ¡El poder de servir!, una leyenda, que dice: CONSEJERÍA JURÍDICA.

ACUERDO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA LA TERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DE LA LICENCIADA DANIELA GOÑI ROJO, COMO NOTARIA INTERINA DE LA NOTARÍA PÚBLICA 151 Y SE DECLARA LA REINCORPORACIÓN AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DEL LICENCIADO JOSÉ GOÑI DÍAZ, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 151 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.

LICENCIADO JESÚS GEORGE ZAMORA, CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 2 FRACCIÓN II, 27 Y 28 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO; 2 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO.

CONSIDERANDO

Que la necesidad de dotar de certeza jurídica a los hechos y actos que generan consecuencias de derecho sustenta la fe pública notarial que el Estado delega a las notarias y notarios, coadyuvando con el Estado para garantizar el respeto a los derechos y bienes de las personas.

Que las notarias y notarios públicos tienen a su cargo, en los casos en que no estén encomendadas expresa y exclusivamente a las autoridades, funciones de orden público que incluyen dar formalidad a los actos jurídicos y dar fe de los hechos que le consten.

Que mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 21 de septiembre de 1994, se designó al licenciado José Goñi Díaz Notario Titular de la notaría pública 4 del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México.

Que mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 25 de febrero de 2002, se publicó el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reordenan y asignan los números a las notarías públicas de la entidad y por el que la notaría 4 de Chalco, pasó a ser la notaría 114 del Estado de México.

Que mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 13 de junio de 2005, se creó la notaría 151 del Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Que mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 22 de junio de 2005, se autorizó al licenciado José Goñi Díaz, su reubicación a la Notaría Pública número 151 del Estado de México, con residencia en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Que mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 27 de febrero de 2023, se concedió al licenciado José Goñi Díaz, Notario Público 151 del Estado de México, con residencia en el municipio de Naucalpan de Juárez, licencia para separarse de la función notarial, por el término

de un año, renunciable, nombrándose a la licenciada Daniela Goñi Rojo, Notaria Interina de la Notaría 151 del Estado de México.

Que el licenciado José Goñi Díaz, Notario Público 151 del Estado de México, con residencia en el municipio de Naucalpan de Juárez, por escrito presentado el 16 de febrero de 2024, notificó su reincorporación como titular de la citada notaría a partir del 28 de febrero de 2024.

Que siendo de orden público la función notarial, su prestación debe darse en forma permanente para no afectar los intereses de los particulares que tramitan sus asuntos en la Notaría de referencia.

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA LA TERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DE LA LICENCIADA DANIELA GOÑI ROJO, COMO NOTARIA INTERINA DE LA NOTARÍA PÚBLICA 151 Y SE DECLARA LA REINCORPORACIÓN AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DEL LICENCIADO JOSÉ GOÑI DÍAZ, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 151 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.

PRIMERO. Se declara la terminación de la función notarial de la licenciada Daniela Goñi Rojo, como Notaria Interina de la Notaría Pública 151 del Estado de México, con residencia en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

SEGUNDO. Se declara la reincorporación al ejercicio de la función notarial del licenciado José Goñi Díaz, Notario Público 151 del Estado de México, con residencia en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al licenciado José Goñi Díaz, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la licenciada Daniela Goñi Rojo, para su conocimiento y efectos legales correspondientes

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola vez en un diario de mayor circulación en la entidad.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, el 27 del mes de febrero de dos mil veinticuatro.

El Consejero Jurídico, Licenciado Jesús George Zamora.- Rúbrica.

CONSEJERÍA JURÍDICA – SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Al margen Escudo del Estado de México, un logotipo, que dice: Estado de México ¡El poder de servir!, una leyenda, que dice: CONSEJERÍA JURÍDICA, otra leyenda, que dice: MUJERES, Secretaría de las Mujeres.

ACUERDO DEL CONSEJERO JURÍDICO Y DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “CANASTA ALIMENTARIA PARA VÍCTIMAS DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN”.

LIC. JESÚS GEORGE ZAMORA, CONSEJERO JURÍDICO, Y MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN, SECRETARIA DE LAS MUJERES, EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 52 y 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PUBLICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 226 EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO; 4, FRACCIONES II Y IX, 42 FRACCIONES II Y XXI DE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y

CONSIDERANDO

Que el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, es la máxima institución en la materia en el Estado de México, que tiene por objeto establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección de las personas víctimas y ofendidas del delito.

Que la Consejería Jurídica a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, en materia de atención a las personas víctimas y ofendidas, ejercerá entre sus atribuciones, el participar de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, en el diseño e instrumentación de políticas gubernamentales, tendentes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y, en ese contexto, intervenir en la ejecución de estrategias de protección a las víctimas y ofendidos, a través de programas dirigidos a personas víctimas y ofendidas, bajo un enfoque transversal de derechos humanos y género así como de protección de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Que la Secretaría de las Mujeres es la dependencia encargada de promover, coordinar, impulsar, formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas, programas y acciones relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la transversalización de la perspectiva de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres por razón de género y condición social, la implementación de acciones afirmativas que acorten las brechas sociales, la protección integral de mujeres, y la eliminación de cualquier tipo de discriminación que obstaculice el acceso igualitario a las oportunidades, el empoderamiento, y el ejercicio de sus derechos.

Que a la Secretaría de las Mujeres, entre otras, le corresponde formular, proponer, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a la instrumentación de políticas públicas, programas estatales y acciones que promuevan la igualdad de género, la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de las medidas institucionales que aseguren el ejercicio de sus derechos, oportunidades y acceso igualitario a la participación equitativa en el desarrollo económico, político, social y cultural, a fin de eliminar los estereotipos y prácticas sociales que refuerzan la discriminación hacia las mujeres. Además, coordinar, dirigir y supervisar al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Que el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, refiere que, en todas las medidas concernientes al Interés Superior de la Niñez, deben estar basadas en la consideración del Interés Superior del Niño, y corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.

Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México es un órgano desconcentrado de la Consejería Jurídica, con autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto permitir la representación y participación directa de las personas víctimas u ofendidas en todas las instituciones del Sistema Estatal de Víctimas, propiciando su intervención en la gestión y la construcción de políticas gubernamentales, al igual que en el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema Estatal de Víctimas; con la finalidad de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, así como la prestación del servicio de asesoría jurídica.

Que la Ley de Víctimas del Estado de México establece que las personas víctimas podrán solicitar y recibir ayuda oportuna, rápida, gratuita y efectiva de acuerdo con las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el delito, con el objetivo

de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, en el momento de la comisión del delito o de la violación de derechos humanos, que haya sido determinada por un órgano jurisdiccional o de derechos humanos, respectivamente.

Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, establece que las Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el goce de sus derechos, especialmente para que: Se les brinde protección oportuna, se les atienda en igualdad de condiciones en todos los servicios, antes que los adultos; Se diseñen y ejecuten políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos, por lo que se deberá asignar mayores recursos a las instituciones públicas o privadas encargadas en la atención de sus necesidades; y prevalezca el Interés Superior de la Niñez para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para su protección.

Que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el INEGI, en el Estado de México viven 16,992,418 habitantes, de los cuales 8,251,295, son hombres y 8,741,123 son mujeres, asimismo, en el Estado de México viven 4 millones 421 mil 644 niñas y niños de 0 a 15 años, que representan el 26% de la población de esta entidad.

Que, con base en datos de la ENIGH 2020, en la entidad se registran 3 millones 322 mil 656 personas en pobreza y con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Que, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2023 el acumulado de presuntos feminicidios en el Estado de México fue de 86.

Que, con base en la información proporcionada por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, se reportaron un total de 6,596 personas desaparecidas en el Estado de México, de las cuales están pendientes de localizar 1791.

Que, de acuerdo con información del INEGI (2020), en promedio por hogar habitan 3.6 personas en el Estado de México, por lo que se estima con las cifras anteriores la existencia de un total de 349 personas familiares ofendidas del delito de feminicidio, y 18,637 personas familiares ofendidas por el delito de desaparición.

Que, atendiendo a la Sentencia de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoce la existencia de homicidios de mujeres cometidos por razones de género, también conocidos como feminicidios, y señala que las irregularidades en la investigación y el maltrato a las víctimas, son formas de discriminación y violencia por parte del Estado; entre distintas acciones, se fortaleció al Instituto Nacional de la Mujer que cuenta con programas de asistencia social y jurídica para las víctimas de violencia y discriminación.

Que el Manual y Protocolo de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, señala en su numeral 4. Denominado "Hacia un Concepto Amplio de Víctima de Feminicidio", que la tipificación del delito de feminicidio es relativamente de recién creación en México y en el Estado de México, por lo que casos de feminicidio, cometidos antes del tipo penal, pueden haber sido calificados como homicidios, por lo que la interpretación del concepto de víctima, restringido a la calificación jurídica del delito excluye a un gran número de casos de la atención brindada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, y se podría convertir en la práctica en una forma de discriminación y violencia de género.

Que en dicho Manual y Protocolo se utiliza un concepto amplio de víctima de feminicidio que toma en cuenta la muerte violenta de una mujer y la existencia de razones de género en la privación de la vida, asimismo, incluye a las mujeres sobrevivientes de feminicidio, con el fin de garantizar sus derechos a la ayuda, asistencia y atención.

Que el Programa "Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición", tiene por objeto el otorgamiento de un apoyo económico para favorecer la adquisición de productos de la Canasta Básica al núcleo familiar de la víctima de delitos de desaparición y/o feminicidio; así como de la víctima a la que se le haya causado la muerte o una discapacidad física o discapacidad mental a consecuencia de un delito donde existan razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne; siempre y cuando sean cometidos, continuados o consumados en el Estado de México.

Que en atención a lo establecido en el Artículo Transitorio Décimo Quinto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado el 28 de diciembre de 2023, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", la Consejería Jurídica en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, serán las encargadas de implementar los mecanismos necesarios para la operación de los recursos destinados al Programa "Canasta Alimentaria por el Delito de Feminicidio", es por lo que la publicación y firma de las presentes Reglas de Operación se realizará entre la Secretaría de las Mujeres y la Consejería Jurídica.

Que en fecha 29 de febrero de 2024, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió el dictamen respectivo a las presentes Reglas de Operación.

En razón a lo anterior, se expide el siguiente:

ACUERDO DEL CONSEJERO JURÍDICO Y DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “CANASTA ALIMENTARIA PARA VÍCTIMAS DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN”.

1. Disposiciones Generales

1.1. Definición del Programa

El Programa “Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Femicidio y Desaparición”, tiene por objeto otorgar un apoyo económico para la adquisición de productos de la Canasta Básica a favor del núcleo familiar de la víctima de los delitos de desaparición y/o feminicidio, así como de la víctima a la que se le haya causado la muerte o una discapacidad física o discapacidad mental a consecuencia de un delito donde existan razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne; siempre y cuando sean cometidos, continuados o consumados en el Estado de México.

2. Derechos que Atiende

Derecho a la alimentación, a la no discriminación y a la prioridad.

3. Glosario de Términos

Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:

Adolescente: A toda persona cuya edad esté comprendida entre los doce años y menor a los dieciocho años; cuando exista duda de que se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente;

Apoyo Económico: A la transferencia monetaria que será otorgada a la Persona Beneficiaria, a través del medio de entrega;

Canasta Básica: Al conjunto de productos alimenticios, de limpieza y aseo personal indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo;

Comisión Ejecutiva: A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México;

Comité: Al Comité de admisión, seguimiento, comprobación y remisión del Programa “Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Femicidio y Desaparición”;

Consejería Jurídica: A la Consejería Jurídica del Estado de México;

Constancia: Al documento emitido por el área de Trabajo Social, para determinar que los niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de la víctima se encuentran bajo el resguardo de la persona que solicita el Programa, mismos que tendrá una vigencia durante el ejercicio fiscal correspondiente;

Coordinación Administrativa: A la Coordinación Administrativa de la Consejería Jurídica, que es la responsable de la gestión, administración, dispersión, comprobación y remisión del recurso económico del Programa;

Cuenta Bancaria: Al número de cuenta bancaria o interbancaria a nombre de la Persona Beneficiaria o Persona Representante, que además de identificar y asociar a la Persona Beneficiaria, le permite el acceso al Apoyo Económico del Programa “Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Femicidio y Desaparición”;

Discapacidad Física: A la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

Discapacidad Mental: A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

Instancia Ejecutora: A la Unidad de Género y Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México;

Instancia Normativa: Al Comité de Admisión y Seguimiento del Programa “Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Femicidio y Desaparición”;

Instancia Responsable: A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México;

Interés Superior de la Niñez: Al máximo beneficio que ha de otorgarse de conformidad con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro beneficio o derecho y que tiene como propósito alcanzar su desarrollo integral, así como la plenitud de sus aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades, tomando en consideración que cada uno de ellos es una universalidad y una individualidad en la que la familia, la comunidad y el propio estado garantizarán ese pleno desarrollo;

Lista de Espera: A la relación de personas solicitantes que, cumpliendo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa “Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Femicidio y Desaparición”, no son sujetas de Apoyo Económico por haberse agotado los recursos disponibles para el Programa;

Medio de Entrega: A la transferencia electrónica realizada por la Coordinación Administrativa en la cuenta Bancaria proporcionada por la Persona Beneficiaria o Persona Representante;

Niña o Niño: A toda persona cuya edad sea menor a doce años, cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años de edad, se presumirá que es niña o niño;

Núcleo Familiar: Al grupo de personas emparentadas que viven en un mismo hogar y que hayan tenido relación inmediata y vivido en el mismo hogar de la persona víctima del delito de desaparición y/o femicidio; así como de la víctima a la que se le haya causado la muerte o una discapacidad física o discapacidad mental a consecuencia de un delito donde existan razones de género, en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne.

Padrón de Personas Beneficiarias: A la relación Oficial de Personas Beneficiarias atendidas por el Programa “Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Femicidio y Desaparición”;

Personas Beneficiarias: A las personas integrantes del Núcleo Familiar, quienes a través de su representante, reciben el Apoyo Económico del Programa “Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Femicidio y Desaparición”, que forman parte de la población atendida del programa; siempre y cuando el delito se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México;

Persona Ofendida: A los familiares o personas físicas que tengan relación inmediata con la persona Víctima y que hayan sufrido indirectamente un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos humanos a consecuencia de conductas consideradas como delitos de desaparición o femicidio, así como con la víctima a la que se le haya causado la muerte o una discapacidad física o discapacidad mental a consecuencia de un delito donde existan razones de género, en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne;

Reglas de Operación: A las Reglas de Operación del “Programa Canasta Alimentaria por el Delito de Femicidio y Desaparición”;

Razones de Género: A la muerte de una mujer por razones de género cuando la Víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la Víctima; haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la Víctima; la Víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público;

SeMujeres: A la Secretaría de las Mujeres;

Solicitud de Ingreso: Al formato establecido por la Comisión Ejecutiva, que deberá ser llenado y firmado por las personas solicitantes que cumplan con los requisitos y criterios de selección establecidos en las presentes Reglas de Operación;

Unidad de Trabajo Social: A la Unidad de Trabajo Social de la Comisión Ejecutiva, y

Víctima: A la persona física que ha sufrido algún daño o menoscabo físico, mental, emocional, económico o en general, cualquiera que ponga en peligro o lesione sus bienes jurídicos o sus derechos, o bien, se trate de la violación a sus derechos humanos como consecuencia de la comisión de los delitos de desaparición o feminicidio; así como de la víctima a la que se le haya causado la muerte o una discapacidad física o discapacidad mental a consecuencia de un delito donde existan razones de género, en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne.

4. Objetivo

Otorgar un apoyo económico para la adquisición de productos de la Canasta Básica a favor de las personas ofendidas integrantes del núcleo familiar de la víctima de los delitos de desaparición y/o feminicidio, así como de la víctima a la que se le haya causado la muerte o una discapacidad física o discapacidad mental a consecuencia de un delito donde existan razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne; siempre y cuando sean cometidos, continuados o consumados en el Estado de México.

5. Universo de Atención

5.1. Población Universo

Víctimas o personas ofendidas del núcleo familiar de las víctimas, de los delitos de desaparición y/o feminicidio; así como víctimas o personas ofendidas del núcleo familiar de las víctimas, a las que se les haya causado la muerte o una discapacidad física o discapacidad mental a consecuencia de un delito donde existan razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne.

5.2. Población Potencial

Víctimas o personas ofendidas del núcleo familiar de las víctimas, de los delitos de desaparición y/o feminicidio; así como víctimas o personas ofendidas del núcleo familiar de las víctimas, a las que se les haya causado la muerte o una discapacidad física o discapacidad mental a consecuencia de un delito donde existan razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne; siempre y cuando sean cometidos, continuados o consumados en el Estado de México.

5.3. Población Objetivo

5.3.1. Vertiente Víctima o Persona Ofendida del Delito de Feminicidio o Desaparición

Víctimas o personas ofendidas del núcleo familiar de las víctimas, de los delitos de desaparición y/o feminicidio; siempre y cuando sean cometidos, continuados o consumados en el Estado de México.

5.3.2. Vertiente Víctima o Persona Ofendida de Delitos por Razón de Género

Personas ofendidas del núcleo familiar de las víctimas a las que se les haya causado la muerte, así como víctimas o personas ofendidas del núcleo familiar de las víctimas a las que se les haya causado una discapacidad física o discapacidad mental; a consecuencia de un delito donde existan razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne; siempre y cuando sean cometidos, continuados o consumados en el Estado de México.

6. Cobertura

El Programa podrá cubrir los 125 municipios del Estado de México y las entidades federativas donde residan personas beneficiarias.

7. Apoyo

7.1 Tipo de Apoyo

Transferencia de recursos monetarios, en una y hasta en doce ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada.

7.2. Monto del Apoyo

7.2.1 Vertiente Víctima o Persona Ofendida del Delito de Feminicidio o Desaparición

Apoyo Económico de \$2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, en una y hasta en doce ocasiones, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

7.2.2. Vertiente Víctima o Persona Ofendida de Delitos por Razón de Género

Apoyo Económico de \$2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, en una y hasta en doce ocasiones, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

El Apoyo Económico y el trámite serán gratuitos, y se cubrirá en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, a través de la Instancia Responsable, y no generarán un costo adicional a las Personas Beneficiarias, con excepción de las comisiones bancarias que se pudieran generar por el manejo de cuenta.

7.3. Origen de los Recursos

El presupuesto asignado al Programa es en su totalidad de origen estatal.

Dicho presupuesto se destinará para cubrir el Apoyo Económico, que se otorga a las Personas Beneficiarias, el cual deberá ser justificado ante la Secretaría de Finanzas y autorizado por dicha Dependencia.

8. Mecanismos de Enrolamiento

8.1. Personas Beneficiarias

8.1.1. Requisitos y Criterios de Selección

- I. Contar con la calidad de víctima o persona ofendida integrante del núcleo familiar de la víctima, por los delitos de desaparición y/o feminicidio; o de víctima o persona ofendida integrante del núcleo familiar de la víctima a la que se le haya causado la muerte o una discapacidad física o mental a consecuencia de un delito donde exista Razones de Género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne;
- II. Que el delito del que deriva su calidad de Víctima u Persona Ofendida se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México;
- III. Para la Vertiente Víctima o Persona Ofendida de Delitos por Razón de Género, a cuyas víctimas se les haya causado una discapacidad física o discapacidad mental; se deberá presentar documento emitido por instituciones públicas de salud especializadas que acrediten que la víctima cuenta con alguna Discapacidad Física o Mental a consecuencia del delito;
- IV. Firmar el formato donde la persona solicitante autoriza que se realice el depósito a la Cuenta Bancaria proporcionada y manifiesta que el apoyo económico se utilizará para los fines establecidos en el programa;
- V. En caso de que las personas beneficiarias sean niñas, niños o adolescentes, contar con la Constancia emitida por la Unidad de Trabajo Social, previa verificación, que acredite se encuentran al cuidado de quien suscribe la Solicitud de Ingreso, la persona solicitante podrá requerir el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, quien vigilará en todo momento se garantice el interés superior de la niñez.
- VI. Los demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

Además de los requisitos antes establecidos, las personas solicitantes deberán presentar o cumplir lo siguiente:

- I. Formato de Solicitud de Ingreso dirigida a la Instancia Responsable, para el acceso al Programa, debidamente requisitada y firmada por el tutor que se encuentre reconocido jurídicamente para representar a la persona beneficiaria y, en el caso de niñas, niños y adolescentes, que las tenga bajo su cuidado;

La Solicitud de Ingreso al Programa deberá ser actualizada al ejercicio fiscal corriente. Si la persona solicitante se encuentra en lista de espera, deberá actualizar su Carta de Solicitud de Ingreso al Programa, al año fiscal vigente.
- II. Copia de identificación oficial vigente de quien suscribe el documento;
- III. Copia simple legible del acta de nacimiento de las personas beneficiarias;
- IV. Contar con número de registro, en el Registro Estatal de Víctimas;
- V. Copia del estado de cuenta a nombre de la persona beneficiaria o persona representante;
- VI. Los demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

Los datos personales recabados de las personas solicitantes serán tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y demás normatividad en la materia.

8.1.1.1. Permanencia en el Programa

Las Personas Beneficiarias podrán continuar en el Programa siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los numerales 8.1.1 y 8.1.7 de las presentes Reglas de Operación, y de acuerdo al presupuesto autorizado.

En el caso de los usuarios que fueron Personas Beneficiarias en el ejercicio fiscal inmediato anterior, deberán realizar nueva solicitud de ingreso una vez que entren en vigor las presentes Reglas de Operación o en enero del ejercicio fiscal en curso, quienes deberán cumplir con los requisitos expuestos en los numerales 8.1.1 y 8.1.7 de las presentes Reglas de Operación.

8.1.2. Criterios de Priorización

Las solicitudes de ingreso al Programa serán atendidas en el orden en que fueron recibidas por la Instancia Ejecutora y conforme al número de folio asignado a cada Persona Solicitante y de acuerdo al presupuesto autorizado.

El orden de prioridad para otorgar los apoyos económicos a quien sea persona ofendida integrante del núcleo familiar, será:

- a) Hijas e hijos menores de edad;
- b) Hijas e hijos mayores de edad;
- c) Padres
- d) Cónyuge, concubino o concubina;
- e) Hermanos.

En ningún caso, se otorgará más de un apoyo económico a un mismo Núcleo Familiar.

El Comité dará preferencia a las personas solicitantes:

- I. Con condición de orfandad;
- II. Con alguna discapacidad física o mental;
- III. Con condición de pobreza extrema;
- IV. Que sean integrantes de comunidades originarias;
- V. Con solicitud de autoridad judicial o administrativa competente siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en la regla 8.1.1., previa autorización de la Instancia Normativa;
- VI. Que la persona beneficiaria haya sido usuaria de algún Refugio, Casa de Transición, Centro Naranja, Centro de Atención Integral para Mujeres (CAIM) o Centros Regionales de Atención a Mujeres Rurales e Indígenas (CRAMRI), dependientes de la Secretaría de las Mujeres.
- VII. Los demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

8.1.3. Modalidades de Registro

La Persona Solicitante que desee ingresar al Programa, deberá realizar los trámites de registro de manera personal o a través de tutor. La Instancia Responsable deberá seguir estrictamente el orden de la lista de espera. La Instancia Responsable, a través de la Unidad de Trabajo Social, deberá facilitar los formatos de acceso al Programa, a aquellas personas solicitantes que cuenten con la calidad de persona ofendida o víctima y sean integrantes del núcleo familiar de la víctima.

Para el caso de personas solicitantes que por sus condiciones de discapacidad física o mental, no puedan realizar el trámite de manera personal, se nombrará a un representante o tutor, mayor de edad, acompañando un certificado de salud expedido por una institución pública que acredite la circunstancia que le impide a la persona solicitante llevar a cabo su registro.

Una vez que la Instancia Ejecutora valide y capture la información proporcionada por la Persona Solicitante, emitirá el número de folio.

Cuando la persona solicitante se encuentre en una lista de espera, no será necesario realizar nuevamente el trámite de forma personal.

El trámite de registro es gratuito y no significa necesariamente su incorporación al Programa.

8.1.4. Formatos

- I. Solicitud de Ingreso;

- II. Formato de autorización de depósito, y
- III. Los demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

8.1.5 Integración del Padrón de Personas Beneficiarias

La Instancia Responsable integrará y actualizará el Padrón de Personas Beneficiarias de acuerdo con lo establecido en la Ley de Víctimas del Estado de México y su Reglamento, en el artículo 92 fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como en las demás normas en la materia.

Es responsabilidad de la Instancia Ejecutora a través de la Unidad de Trabajo Social, integrar y resguardar los padrones de las Personas Beneficiarias y será el Comité quien los valide.

8.1.6. Derechos de las Personas Beneficiarias

- I. Recibir el Apoyo Económico correspondiente en términos de las presentes Reglas de Operación;
- II. Reserva y privacidad de la información personal, y
- III. Ser tratados con respeto y equidad, y con base en los principios contenidos en la Ley de Víctimas del Estado de México y demás ordenamientos aplicables.

8.1.7. Obligaciones de las Personas Beneficiarias

- I. Proporcionar la información socioeconómica requerida de manera veraz en tiempo y forma;
- II. Proporcionar la documentación que requiera la Instancia Normativa para la correcta operación del presente Programa;
- III. Hacer uso del Apoyo Económico para los fines establecidos en el Programa. En ningún caso el apoyo económico se podrá transferir, vender, prestar, permutar, modificar o alterar sus objetivos;
- IV. Informar a la Comisión Ejecutiva cuando ya no funjan como tutores o curadores, o ya no se tenga bajo su cuidado o resguardo a las personas beneficiarias niñas, niños y adolescentes;
- V. En caso de ser necesario, permitir las visitas domiciliarias programadas por la Unidad de Trabajo Social, y
- VI. Las demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

8.1.8. Causas de cancelación del Apoyo Económico

- I. Incumplir con alguna de las obligaciones previstas en el numeral 8.1.7 de las presentes Reglas de Operación;
- II. Cuando la persona solicitante ya no tenga bajo su cuidado a personas beneficiarias niñas, niños y adolescentes.
- III. No proporcionar los datos de la Cuenta Bancaria para realizar la transferencia monetaria;
- IV. Realizar actos de proselitismo con los Apoyos Económicos del Programa a favor de una persona aspirante, postulante, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, a través de un partido político, coalición o de manera independiente, y
- V. Las demás que por causa justificada y grave determine la Instancia Normativa.

8.1.9 Sanciones a las Personas Beneficiarias

8.1.9.1. Causas de Suspensión Temporal del Apoyo Económico

- I. En caso de que existan inconsistencias en el registro de la Persona Beneficiaria, hasta que así lo determine la Instancia Normativa;
- II. Cuando la Persona Beneficiaria o su representante haga mal uso de los recursos, o los destine para cualquier otro concepto que no sea para la adquisición de productos de la Canasta Básica, y
- III. Las demás que por causa justificada y grave determine la Instancia Normativa.

La suspensión, será de manera temporal, hasta en tanto no se subsane cualquiera de las causas que dieron origen a la suspensión.

8.1.9.2 Causas de Baja del Programa

- I. Por fallecimiento;
- II. Cuando la Persona Beneficiaria renuncie voluntariamente al Programa, lo cual tendrá que sustentarse con evidencia escrita;
- III. Cuando la Persona Solicitante no proporcione sin causa justificada la información y los formatos de manera veraz en tiempo y forma, cuando le sean requeridos;
- IV. Cuando la Persona Beneficiaria realice actos de proselitismo a favor de algún aspirante, postulante, precandidato o candidato a un cargo de elección popular o a un partido político, con los Apoyos Económicos;
- V. En el caso del delito de desaparición, cuando se le retire del Registro Estatal de Víctimas;
- VI. Cuando la persona desaparecida sea localizada con vida;
- VII. Cuando se incumpla con alguno de los requisitos establecidos en el apartado 8.1.7 y 8.1.8 de las presentes Reglas de Operación;
- VIII. Cuando se de alguna de las causas de graduación previstas en el apartado 8.2.; y
- IX. Las demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

La persona titular de la Secretaría Técnica recabará toda la información y documentación que acredite la causa de baja o suspensión del Programa de los Beneficiarios, y la someterá a consideración del Comité.

El Comité en un lapso no mayor a quince días hábiles, deberá emitir el acuerdo de manera fundada y motivada de la baja o suspensión del Programa y deberá notificar al usuario de manera personal.

8.1.10. Corresponsabilidad de las Personas Beneficiarias

Por la naturaleza de la población objetivo a la cual va dirigido el Programa no se establece ninguna corresponsabilidad de las Personas Beneficiarias.

8.2. Graduación de las Personas Beneficiarias

Sin perjuicio de la obligación de realizar la solicitud anual respectiva, las personas beneficiarias dejarán de recibir el apoyo económico del Programa:

- a) En el caso de personas beneficiarias niñas, niños o adolescentes, cuando cumplan la mayoría de edad.
- b) En el caso de personas beneficiarias con alguna discapacidad física o mental, cuando dejen de tener tal condición.
- c) En el caso de personas beneficiarias con condición de pobreza extrema, cuando dejen de tener tal condición o cuando hayan recibido el apoyo económico del Programa por más de 3 años.
- d) En todos los demás casos, cuando hayan recibido el apoyo económico del Programa por más de 3 años.

9. Instancias Participantes

9.1. Instancia Normativa

El Comité es el responsable de normar el Programa e interpretar las presentes Reglas de Operación.

9.2. Instancia Ejecutora

La Unidad de Género y Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva es la Instancia Responsable de la operación del Programa.

9.3. Instancia Responsable

La Comisión Ejecutiva será la responsable de coordinar la ejecución del Programa.

9.4. Comité de Admisión y Seguimiento

9.4.1. Integración

El Comité se integrará por:

- I. Presidencia, a cargo de la persona titular de la Consejería Jurídica;
- II. Secretaría, a cargo de la persona titular de la Instancia Responsable;
- III. Persona representante de la SeMujeres;
- IV. Persona representante de la Secretaría de Finanzas;
- V. Persona titular de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto de la Instancia Responsable;
- VI. Persona titular de la Defensoría Especializada para la Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Instancia Responsable;
- VII. Persona representante de la Sociedad Civil o Institución Académica;
- VIII. Persona titular de la Coordinación Administrativa; y
- IX. Persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica como representante de la Secretaría de la Contraloría.

La persona representante de la sociedad civil o institución académica será elegida y aprobada por las demás personas integrantes del Comité, en la primera sesión del año, de entre una terna que proponga la persona representante de la SeMujeres. Cada año, deberá elegirse a una persona representante distinta de la sociedad civil o institución académica; no podrá existir reelección consecutiva.

Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente. El cargo otorgado dentro del Comité será honorífico.

Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona a cargo de la Secretaría del Comité y la persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica, quienes solo tendrán derecho a voz.

Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad o, en su ausencia, la persona representante de la SeMujeres emitirá el voto de calidad.

Una vez instalado el Comité, sesionará bimestralmente de forma ordinaria a partir de que la Coordinación Administrativa, informe a la Instancia Responsable, que ya se cuenta con el recurso para su operación, y a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a su liberación y de manera extraordinaria cuando sea necesario. En cada sesión ordinaria la Instancia Responsable deberá informar de manera detallada al Comité sobre el ejercicio de los recursos del programa.

La persona a cargo de la Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la Presidencia, con tres días hábiles de anticipación como mínimo para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación.

Previo aprobación del Comité, se podrá invitar a sus sesiones a personas representantes del sector público, academia o sociedad civil, cuya intervención se considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra índole que se sometan a su consideración y que sean en beneficio de víctimas o personas ofendidas del delito.

Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad más una de las personas integrantes, siempre y cuando se encuentre presente la Presidencia, la Secretaría, la persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica, o sus suplencias debidamente acreditadas.

La persona a cargo de la Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando de manera sucinta el sentido de las intervenciones y cada uno de los acuerdos tomados. Previa aprobación, deberá ser firmada por las personas integrantes del Comité.

Podrá ser considerado el medio electrónico para la notificación de las sesiones a los Integrantes del Comité.

9.4.2 Atribuciones

Son atribuciones del Comité:

- I. Emitir la convocatoria para la incorporación al Programa;
- II. Recibir las Solicitudes de Ingreso requisitadas y firmadas, dirigidas a la Instancia Responsable para su ingreso al Programa y aprobarlos o negarlos, según sea el caso;
- III. Aprobar el padrón de Personas Beneficiarias;
- IV. Autorizar la inclusión de nuevas Personas Beneficiarias, en sustitución de las bajas que se presenten durante la ejecución del Programa, conforme a la lista de espera;
- V. Autorizar la continuidad de Personas Beneficiarias en el Programa;
- VI. Suspender el Programa cuando las Personas Beneficiarias incurran en alguna causal establecida en el numeral 8.1.9.1 de las presentes Reglas de Operación;
- VII. Cancelar el apoyo económico o dar de baja del Programa a Personas Beneficiarias cuando éstas incumplan con lo establecido en el numeral 8.1.8 y 8.1.9.2 de las presentes Reglas de Operación;
- VIII. Determinar la reanudación del Apoyo Económico del Programa cuando las Personas Beneficiarias lo soliciten por escrito y haya cesado la causa que dio lugar a la suspensión del mismo;
- IX. Aprobar el Apoyo Económico a las Personas Beneficiarias que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación;
- X. Solicitar la información que se requiera para el cumplimiento del Programa, a las áreas integrantes de la Instancia Responsable, quienes deberán entregarla en un plazo no mayor a setenta y dos horas;
- XI. En caso de ser necesario, solicitar a la Unidad de Trabajo Social, a la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito y al Registro Estatal de Víctimas, realicen los estudios correspondientes o aporten información, a efecto de determinar si los solicitantes son tutores de Personas Beneficiarias o si éstos tienen la calidad de Víctimas o Personas Ofendidas y si cuentan con los requisitos establecidos en la presentes Reglas de Operación;
- XII. Emitir y modificar sus lineamientos internos;
- XIII. Solicitar a la Unidad de Trabajo Social que emita la Constancia en la que se establezca que el tutor tiene bajo su cuidado a la Personas Beneficiarias, en caso de que las Personas Solicitantes no cuenten con documento legal que lo acredite.

La Constancia antes referida únicamente tendrá validez durante el ejercicio fiscal correspondiente, será de uso exclusivo para este Programa y la misma no exime de la obligación de las Personas Solicitantes de realizar los procedimientos legales correspondientes para obtener mediante sentencia judicial la guarda y custodia de las Personas Beneficiarias;
- XIV. Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como para el cumplimiento de sus objetivos;
- XV. Proponer las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación para garantizar la correcta operación del Programa en favor de las Personas Beneficiarias;
- XVI. El Comité por conducto de sus integrantes o a través del personal de la Instancia Responsable designado, podrá verificar cuando sea necesario, que los Apoyos Económicos otorgados dentro del Programa cumplen con los fines para los cuales fue creado, mediante:
 - a) Visita domiciliaria cuando se detecte o se presuma que se está haciendo mal uso de los recursos, se destinen para cualquier otro concepto que no sea de los establecidos en la Canasta Básica; o cuando se haya proporcionado información o documentación falsa. En su caso, el Comité hará del conocimiento a la autoridad competente;
 - b) Solicitud de información o documentación al tutor o a la Persona Beneficiaria que ampare que los recursos han sido ejercidos para cubrir los rubros previstos en el Programa;
 - c) Entrevista a las Personas Beneficiarias para conocer como han mejorado sus condiciones de vida;

- d) Verificación de que haya mejoramiento en las condiciones de vida de las personas beneficiarias niñas, niños o adolescentes, y
- e) Las demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

10. Mecánica Operativa

10.1. Operación del Programa

- I. La Instancia Responsable emitirá la convocatoria para la incorporación al Programa en los medios oficiales que determine la Instancia Normativa;
- II. La Coordinación Administrativa deberá gestionar la totalidad de los recursos asignados para la operación del Programa;
- III. Las personas solicitantes que cumplan con los requisitos y criterios de selección, deberán apearse a lo establecido en la convocatoria;
- IV. Las personas solicitantes deberán entregar en la Instancia Responsable la Solicitud de Ingreso acompañada de la documentación completa, solicitada en los requisitos y criterios de selección de este Programa, o podrá ser entregada a la Unidad de Trabajo Social;
- V. En los casos que se requiera, será el tutor el responsable de ingresar y dar seguimiento a la Solicitud de Ingreso en la Instancia Ejecutora de este Programa;
- VI. Cuando se considere necesario, se realizará la validación en campo, con la finalidad de verificar la información proporcionada por las personas representantes. Esta verificación se llevará a cabo a través de una visita domiciliaria, por parte del personal de la Unidad de Trabajo Social, en el domicilio proporcionado por la persona solicitante o tutor;
- VII. La Unidad de Trabajo Social elaborará la relación de personas solicitantes y lo presentará ante la Instancia Ejecutora;
- VIII. La Instancia Ejecutora presentará ante el Comité la relación de Personas Solicitantes para su revisión o en su caso aprobación;
- IX. Si el expediente resulta aprobado para recibir el Apoyo Económico solicitado, la Instancia Ejecutora integrará a las Personas Beneficiarias en el Padrón de Personas Beneficiarias de este Programa para validación del Comité, y le notificará a las Personas Representantes;
- X. Si el expediente no es aprobado para recibir el Apoyo Económico, la Instancia Ejecutora informará a los interesados de la misma manera que en la fracción anterior;
- XI. Una vez autorizado el Apoyo Económico por parte del Comité, el mismo será entregado a las Personas Beneficiarias a través del Medio de Entrega;
- XII. Los Apoyos Económicos se entregarán exclusivamente a las Personas Beneficiarias inscritas en el Padrón de Personas Beneficiarias;
- XIII. La Instancia Ejecutora integrará el Padrón de Personas Beneficiarias;
- XIV. La entrega de Apoyos Económicos a las Personas Beneficiarias se realizará una vez que sean aprobados por el Comité, y
- XV. La Coordinación Administrativa, entregará el primer Apoyo Económico a las Personas Beneficiarias por única ocasión, dentro de los primeros siete días hábiles a partir de la aprobación de la solicitud, así mismo la entrega de los Apoyos Económicos subsecuentes, se realizarán dentro de los primeros siete días hábiles de cada mes.

10.2. Sustitución de Personas Beneficiarias

En caso de cancelación del apoyo económico o causar baja por los supuestos establecidos en los apartados 8.1.8. y 8.1.9.2, la Instancia Responsable enviará al Comité, para su aprobación, la propuesta de bajas a efecto de que autorice las sustituciones de las Personas Beneficiarias a partir de la Lista de Espera.

La Instancia Responsable informará al Comité de las sustituciones realizadas y convocará a las nuevas Personas Beneficiarias para otorgarles el Medio de Entrega. La transferencia será a partir de su incorporación al Programa, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada.

11. Transversalidad

La Instancia Responsable podrá celebrar convenios de colaboración y coordinación con instituciones públicas o privadas, con la finalidad de coadyuvar en la operación y cumplir con los objetivos del Programa, debiendo informar al Comité de la celebración de dichos convenios.

Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o dupliquen con otros programas de desarrollo social o acciones de gobierno.

12. Mecanismos de Participación Social

En la operación y seguimiento del Programa se considerará la participación en el Comité de personas u organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en la defensa de los derechos de las Personas Víctimas y Ofendidos, a invitación de la persona titular de la Presidencia del Comité.

13. Difusión

13.1. Medios de Difusión

La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley de Víctimas del Estado de México, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como en los medios que determine el Comité.

Las presentes Reglas de Operación que emiten la Consejería Jurídica y la SeMujeres, serán publicadas en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Toda la documentación que se utilice para la promoción y publicidad del presente Programa deberá contener la siguiente leyenda:

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A SUS REGLAS DE OPERACIÓN. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE DISPONGA LA LEY DE LA MATERIA".

Las presentes Reglas de Operación serán traducidas a las lenguas originarias de los pueblos indígenas más representativos del Estado de México, mismas que deberán ser publicadas en la página oficial de la Comisión Ejecutiva.

13.2. Convocatoria

La convocatoria al Programa será emitida por la Instancia Responsable, en los medios que determine la Instancia Normativa.

14. Transparencia

La Instancia Responsable resguardará los datos de las Personas Beneficiarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, la Ley de Víctimas del Estado de México y su Reglamento.

15. Seguimiento

La Instancia Responsable dará seguimiento al Programa y rendirá un informe bimestral a la Instancia Normativa.

16. Auditoría, Control y Vigilancia

La auditoría, control y vigilancia de este Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México o el Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica,

debiéndose establecer los mecanismos necesarios para la verificación de la entrega del Apoyo Económico a las Personas Beneficiarias.

17. Quejas y Denuncias

Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega del Apoyo Económico del Programa podrán ser presentadas por las Personas Beneficiarias, a través de las siguientes vías:

- I. De manera escrita: en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, con domicilio en Paseo de los Cisnes Número 49, Colonia La Asunción, C.P. 52172, Metepec, Estado de México o en la Secretaría de la Mujer, con domicilio en Avenida Miguel Hidalgo Oriente Número 1031, Barrio San Bernardino, Toluca, Estado de México C.P. 50090;
- II. Vía telefónica: al Número de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (722) 2 75 86 64, o en la Secretaría de las Mujeres (722) 213 89 15;
- III. Vía Internet: a los correos electrónicos comisionada.ceav@edomex.gob.mx o subavg.semujeres@edomex.gob.mx;
- IV. Personalmente: al Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica ubicado en Instituto Literario Poniente 510, Código Postal 50000 Toluca de Lerdo, Estado de México;
- V. Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: A través de la aplicación "Denuncia Edomex", a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, y
- VI. Vía plataforma digital del Sistema de Atención Mexiquense "SAM": en la siguiente liga https://www.secogem.gob.mx/SAM/sit_atn_mex.asp.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" y estará vigente hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa.

TERCERO. Se abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía jurídica que sean contrarias al presente Acuerdo.

CUARTO. Los instrumentos jurídicos celebrados, así como las relaciones jurídicas derivadas de la operación del Programa, continuaran su vigencia, hasta la terminación de los mismos y en concordancia con las presentes Reglas de Operación.

QUINTO. Las dudas y lo no previsto que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas por la Instancia Normativa del Programa.

SEXTO. La entrega del Apoyo Económico del Programa se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal autorizada.

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

EL CONSEJERO JURÍDICO, LIC. JESÚS GEORGE ZAMORA.- RÚBRICA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN.- RÚBRICA.

Al margen Escudo del Estado de México, un logotipo, que dice: Estado de México ¡El poder de servir!, una leyenda, que dice: CONSEJERÍA JURÍDICA, otra leyenda, que dice: MUJERES, Secretaría de las Mujeres.

ACUERDO DEL CONSEJERO JURÍDICO Y DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA “REPARACIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO DE FEMINICIDIO”, PARA EL ESTADO DE MÉXICO.

LIC. JESÚS GEORGE ZAMORA, CONSEJERO JURÍDICO, Y MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN, SECRETARIA DE LAS MUJERES, EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 52 y 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PUBLICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 226 EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO; 4, FRACCIONES II Y IX, 42 FRACCIONES II Y XXI DE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y

CONSIDERANDO

Que el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, es la máxima institución en la materia en el Estado de México, que tiene por objeto establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección de las personas víctimas y ofendidas del delito.

Que la Consejería Jurídica, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México en materia de atención a las víctimas y ofendidos, ejercerá entre sus atribuciones, el participar de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, en el diseño e instrumentación de políticas gubernamentales tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y, en ese contexto, intervenir en la ejecución de estrategias de protección a las víctimas y ofendidos, a través de programas dirigidos a víctimas y ofendidos bajo un enfoque transversal de género y de protección de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Que la Secretaría de las Mujeres es la dependencia encargada de promover, coordinar, impulsar, formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas, programas y acciones relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la transversalización de la perspectiva de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres por razón de género y condición social, la implementación de acciones afirmativas que acorten las brechas sociales, la protección integral de mujeres, y la eliminación de cualquier tipo de discriminación que obstaculice el acceso igualitario a las oportunidades, el empoderamiento, y el ejercicio de sus derechos.

Que a la Secretaría de las Mujeres, entre otras, le corresponde formular, proponer, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a la instrumentación de políticas públicas, programas estatales y acciones que promuevan la igualdad de género, la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de las medidas institucionales que aseguren el ejercicio de sus derechos, oportunidades y acceso igualitario a la participación equitativa en el desarrollo económico, político, social y cultural, a fin de eliminar los estereotipos y prácticas sociales que refuerzan la discriminación hacia las mujeres. Además, coordinar, dirigir y supervisar al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Que el Manual y Protocolo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de Femicidio en su Capítulo Segundo, establece tres fases, de acuerdo con las necesidades de las víctimas u ofendidos a partir de la comisión del delito de femicidio, dentro de las cuales, su fase 3 dispone que la CEADEM establecerá un programa administrativo de reparación integral del daño a víctimas u ofendidos del delito de femicidio, que incluya al menos las siguientes medidas:

- Establecer un Registro de víctimas y víctimas indirectas u ofendidos del delito de femicidio.
- Compensación: Las víctimas tendrán acceso a la indemnización equivalente al monto pecuniario más alto que prevé la Ley de Víctimas del Estado de México como compensación subsidiaria, es decir, “hasta cinco mil unidades de medida y actualización y si este se presentará en transporte público de pasajeros, oficiales, escolares en servicio u otros, dicha cantidad podría elevarse hasta tres veces”.
- Rehabilitación: Atención médica y psicológica especializada.
- Asesoría jurídica con perspectiva de género en la investigación y los procesos judiciales.

- Satisfacción: Realizar, de acuerdo con las víctimas, conmemoraciones públicas, memoriales, reconocimiento público de la responsabilidad del Estado u otras medidas simbólicas para dignificar a las víctimas de feminicidio.
- Prevención: Actividades de sensibilización y difusión sobre la problemática de la violencia de género y el feminicidio, así como sobre los derechos humanos de las mujeres.

Que dicho Manual y Protocolo en su Capítulo Segundo, establece como objetivos de la Tercera Fase, entre otros; el garantizar el derecho a la reparación integral del daño a las víctimas indirectas u ofendidos del delito de feminicidio, así como a las mujeres sobrevivientes de feminicidio, garantizar la participación de las víctimas u ofendidos en la determinación de las medidas de reparación y su integralidad; establecer las acciones en los dos supuestos que establece la Ley de Víctimas del Estado de México, para acceder a la reparación integral del daño: a partir de la resolución de un órgano competente y a través de un Programa Integral de Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio.

Que, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2023 el acumulado de presuntos feminicidios en el Estado de México fue de 86.

Que en atención a lo establecido en el Artículo Transitorio Décimo Quinto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado el 28 de diciembre de 2023, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", la Consejería Jurídica en coordinación con la Secretaría de las Mujeres serán las encargadas de implementar los mecanismos necesarios para la operación de los recursos destinados al Programa "Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio" es por lo que la publicación y firma de las presentes Reglas de Operación se realizará entre la Secretaría de las Mujeres y la Consejería Jurídica.

Que en fecha 29 de febrero de 2024, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió el dictamen respectivo a las presentes Reglas de Operación.

En razón a lo anterior, se expide el siguiente:

ACUERDO DEL CONSEJERO JURÍDICO Y DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA "REPARACIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO DE FEMINICIDIO", PARA EL ESTADO DE MÉXICO.

1. Disposiciones Generales

1.1. Definición del Programa

El Programa "Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio" es un programa de reparación integral del daño con Perspectiva de Género, contemplado dentro del Manual y Protocolo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de Feminicidio y pretende garantizar a las víctimas u ofendidos del delito de feminicidio cuando una mujer haya sido privada de la vida como resultado de la violencia de género y/o en aquellos casos en donde se actualizan las razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, y a toda mujer sobreviviente de feminicidio independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público le asigne, una medida de compensación pecuniaria, que exprese la voluntad del Estado por reconocer su responsabilidad, donde se materialice su compromiso con mejorar las condiciones de vida de las víctimas y la reconstrucción de su proyecto de vida.

2. Derecho Humano que Atiende

Derecho a la compensación subsidiaria como parte de la reparación integral del daño.

3. Glosario de Términos

Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:

Adolescente: A toda persona cuya edad esté comprendida entre los doce años y menor a los dieciocho años, cuando exista duda de que se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente;

Comisión Ejecutiva: A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México;

Comité Técnico: Al órgano de consulta, verificación, supervisión, comprobación y remisión del cumplimiento de las presentes Reglas de Operación";

Coordinación Administrativa: A la Coordinación Administrativa de la Consejería Jurídica, que es la responsable de la gestión, administración, dispersión, comprobación y remisión del recurso económico del Programa;

Consejería jurídica: A la Consejería Jurídica del Estado de México;

Discapacidad Física: A la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

Discapacidad Mental: A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

Instancia Ejecutora: A la Unidad de Género y Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México;

Instancia Normativa: Al Comité Técnico del Programa “Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Femicidio”;

Instancia Responsable: A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México;

Interés Superior de la Niñez: Al máximo beneficio que ha de otorgarse de conformidad con los derechos de las niñas, niños y adolescentes respecto de cualquier otro beneficio o derecho y que tiene como propósito alcanzar su desarrollo integral, así como la plenitud de sus aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades, tomando en consideración que cada uno de ellos es una universalidad y una individualidad en la que la familia, la comunidad y el propio estado garantizarán ese pleno desarrollo;

Niña o Niño: A toda persona cuya edad sea menor a doce años, cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años de edad, se presumirá que es niña o niño;

Núcleo Familiar: Al grupo de personas emparentadas que viven en un mismo hogar y que hayan tenido relación inmediata y vivido en el mismo hogar de la víctima.

Ofendidos: A los familiares o personas físicas del Núcleo Familiar de la víctima del delito de femicidio cuando una mujer haya sido privada de la vida como resultado de la violencia de género y/o en aquellos casos en donde se actualizan las razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, y a toda mujer sobreviviente de femicidio independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público le asigne y que tengan reconocida su calidad de ofendidos o víctimas indirectas por autoridad competente;

Persona Beneficiaria: A las víctimas u ofendidos que previo cumplimiento de los requisitos respectivos forman parte de la población atendida por el Programa, que tengan otorgada la calidad debidamente reconocida por autoridad competente; que previo cumplimiento de los requisitos respectivos

Programa: Al Programa “Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Femicidio”;

Razones de Género: A la muerte de una mujer por razones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público;

Reglas de Operación: A las presentes Reglas de Operación del Programa “Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Femicidio”

SeMujeres: A la Secretaría de las Mujeres;

Unidad de Trabajo Social: A la Unidad de Trabajo Social de la Comisión Ejecutiva, y

Víctima: Se considera víctima del delito de femicidio cuando una mujer haya sido privada de la vida como resultado de la violencia de género y/o en aquellos casos en donde se actualizan las razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, y a toda mujer sobreviviente de femicidio independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público le asigne.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Garantizar el acceso a una medida de compensación pecuniaria subsidiaria, que exprese la voluntad del Estado, por reconocer su responsabilidad, donde se materialice su compromiso para mejorar las condiciones de vida de las Víctimas u Ofendidos del delito de feminicidio y la reconstrucción de su proyecto de vida.

4.2. Objetivos específicos

- I. Garantizar el derecho a la compensación subsidiaria como parte de la reparación integral del daño, y
- II. Reincorporar a las Víctimas u Ofendidos en la medida de lo posible, en su proyecto de vida.

5. Universo de Atención

5.1. Población Universo

A las Víctimas y Ofendidos de los delitos de feminicidio cuando una mujer haya sido privada de la vida como resultado de la violencia de género y/o en aquellos casos en donde se actualizan las razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, y a toda mujer sobreviviente de feminicidio independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público le asigne; siempre y cuando el delito se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México.

5.2. Población Potencial

A las Víctimas y Ofendidos del Núcleo Familiar de la víctima de los delitos de feminicidio cuando una mujer haya sido privada de la vida como resultado de la violencia de género y/o en aquellos casos en donde se actualizan las razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, y a toda mujer sobreviviente de feminicidio independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público le asigne; siempre y cuando el delito se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México, y que tengan reconocida dicha calidad por autoridad competente.

5.3. Población Potencial

A las Víctimas y Ofendidos del Núcleo Familiar de la víctima de los delitos de feminicidio cuando una mujer haya sido privada de la vida como resultado de la violencia de género y/o en aquellos casos en donde se actualizan las razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, y a toda mujer sobreviviente de feminicidio independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público le asigne; siempre y cuando el delito se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México, y que tengan reconocida dicha calidad por autoridad competente.

6. Cobertura

El Programa cubrirá los 125 municipios del Estado de México.

7. Apoyo

7.1. Tipo de Apoyo

Compensación económica subsidiaria que se otorga a las Personas Beneficiarias como parte de la reparación integral del daño, establecida en el último párrafo del artículo 58 ter de la Ley de Víctimas del Estado de México. El monto que será entregado por concepto de compensación pecuniaria, será otorgado por una sola vez a las Personas Beneficiarias.

7.2. Monto del Apoyo

- I. Se otorgará a las Personas Beneficiarias hasta 5,000.00 (cinco mil UMAS) Unidades de Medida y Actualización, y
- II. Se otorgará a las Personas Beneficiarias hasta 15,000.00 (quince mil UMAS) Unidad de Medida y Actualización, cuando el feminicidio haya ocurrido en el transporte público de pasajeros, oficiales o escolares en servicio.

El apoyo que se otorgará a las Personas Beneficiarias es gratuito y será cubierto en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, a través del Programa "Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio".

8. Personas Beneficiarias

8.1. Requisitos

Para poder ser Persona Beneficiaria del Programa, además de los requisitos establecidos en la Ley de Víctimas del Estado de México y su Reglamento, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Contar con la calidad de Víctimas u Ofendidos por el delito de feminicidio, cuando una mujer haya sido privada de la vida como resultado de la violencia de género y/o en aquellos casos en donde se actualizan las razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, y a toda mujer sobreviviente de feminicidio independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público le asigne; siempre y cuando el delito se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México;
- II. En el caso de que las Personas Beneficiarias sean Niñas, Niños o Adolescentes, podrá solicitar el beneficio del Programa a través de su representante legal (padre o tutor o curador), acompañando a la solicitud, la guarda y custodia provisional o definitiva expedida por autoridad competente, y se podrá requerir el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, quien vigilará en todo momento se garantice el interés superior de la niñez.
- III. En caso de que los solicitantes no cuenten con la guarda y custodia provisional o definitiva expedida por autoridad competente, la Unidad de Trabajo Social deberá realizar estudios en materia de trabajo social, correspondientes para determinar si el solicitante tiene bajo su cuidado a las Niñas, Niños o Adolescentes Beneficiarios;
- IV. No haber recibido compensación o reparación del daño por el mismo delito, como parte de la reparación integral del daño por cualquier otra vía o institución, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o algún otro medio fehaciente;
- V. Firmar el formato donde el solicitante autoriza que se realice el depósito al número de cuenta proporcionada, y
- VI. Que el delito del que deriva su calidad de Víctima u Ofendido se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México.

Además de los requisitos antes establecidos, deberán presentar o cumplir lo siguiente:

- I. Carta de solicitud de acceso al Programa, suscrita por la Víctima u Ofendido
- II. Original o copia certificada de la sentencia definitiva o resolución de la autoridad judicial donde se reconozca la calidad de víctima u ofendido por el delito de feminicidio, cuando una mujer haya sido privada de la vida como resultado de la violencia de género y/o en aquellos casos en donde se actualizan las razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, y a toda mujer sobreviviente de feminicidio independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público le asigne;
- III. Original o copia certificada de la sentencia o resolución donde se dicta u ordena la reparación del daño, o en su caso copia de la sentencia del procedimiento abreviado, según sea el caso;
- IV. Para el caso de que se desconozca el paradero del presunto responsable, la carpeta haya agotado las investigaciones y no se pueda judicializar, deberá comprobarse fehacientemente el pertenecer al Núcleo Familiar de la víctima, a través de la Constancia que emita la Unidad de Trabajo Social;
- V. En el caso de Niñas, Niños o Adolescentes, que sean reconocidos por autoridad judicial como Ofendidos, para recibir la reparación del daño, deberá suscribirse la carta de solicitud de acceso al Programa, a través de quien tenga a su cuidado a las Niñas, Niños o Adolescentes o de quien ejerza la patria potestad, tutor, o curador, según sea el caso, que se encuentren reconocidos jurídicamente para representarlos, en este caso deberá presentarse la documentación que acredite la guarda y custodia de quien solicita el acceso al Programa en nombre y representación de las Niñas, Niños o Adolescentes, así como copia de identificación oficial;
- VI. Contar con una cuenta bancaria a nombre de la Persona Beneficiaria donde se realizará el depósito o transferencia electrónica del recurso;
- VII. Contar con número de registro, ante el Registro Estatal de Víctimas, y
- VIII. No haber sido beneficiado por alguna otra institución pública o privada.

Los datos personales recabados de las personas solicitantes serán tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y demás normatividad en la materia.

8.1.2 Criterios de Priorización

Se dará preferencia a las personas solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación, considerando la siguiente prelación:

- I. Que la persona beneficiaria sea niña, niño o adolescente y se encuentren en situación de orfandad;
- II. Que la persona beneficiaria cuente con alguna discapacidad física o mental;
- III. Que la persona beneficiaria tenga la imposibilidad de trabajar a consecuencia del delito;
- IV. Que la persona beneficiaria se encuentre en una condición de pobreza extrema;
- V. Que la persona beneficiaria sea integrante de una comunidad indígena;
- VI. Cuando exista solicitud de autoridad judicial o administrativa competente;
- VII. Que la persona beneficiaria haya sido usuaria de algún Refugio, Casa de Transición, Centro Naranja, Centro de Atención Integral para Mujeres (CAIM) o Centros Regionales de Atención a Mujeres Rurales e Indígenas (CRAMRI), dependientes de la Secretaría de las Mujeres.
- VIII. Los demás criterios de prelación que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

Para el otorgamiento de la reparación subsidiaria se seguirá el orden de preferencia que establece el artículo 10, párrafo tercero de la Ley de Víctimas del Estado de México; excepto cuando el culpable del delito sea una de tales personas.

8.1.3 Modalidades del Registro

La Persona Solicitante que desee ingresar al Programa, deberá realizar los trámites de registro de manera personal o a través de tutor. La Instancia Responsable deberá seguir estrictamente el orden de la lista de espera. La Instancia Responsable, a través de la Unidad de Trabajo Social, deberá facilitar los formatos de acceso al Programa, a aquellas personas solicitantes que cuenten con la calidad de persona ofendida o víctima y sean integrantes del núcleo familiar de la víctima.

Para el caso de personas solicitantes que por sus condiciones de discapacidad física o mental, no puedan realizar el trámite de manera personal, se nombrará a un representante o tutor, mayor de edad, acompañando un certificado de salud expedido por una institución pública que acredite la circunstancia que le impide a la persona solicitante llevar a cabo su registro.

Una vez que la Instancia Ejecutora valide y capture la información proporcionada por la Persona Solicitante, emitirá el número de folio.

Cuando la persona solicitante se encuentre en una lista de espera, no será necesario realizar nuevamente el trámite de forma personal.

El trámite de registro es gratuito y no significa necesariamente su incorporación al Programa.

8.1.4 Formatos

- I. Carta de solicitud de acceso al Programa;
- II. Formato de autorización de depósito, y
- III. Los demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

8.1.5 Integración de la Lista de las Personas Beneficiarias

La Instancia Ejecutora integrará y actualizará la lista de Personas Beneficiarias de acuerdo con lo establecido en la Ley de Víctimas del Estado de México y su Reglamento, en el artículo 92 fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como en las demás normas en la materia.

Es responsabilidad de la Instancia Ejecutora, integrar y resguardar las listas de las Personas Beneficiarias y será el Comité Técnico quien los valide.

8.1.6 Derechos de las Personas Beneficiarias

- i. Recibir el monto correspondiente por compensación subsidiaria como parte de la reparación integral del daño, conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación;
- ii. Reserva y privacidad de la información personal, y
- iii. Ser tratadas con respeto y equidad y con base en los principios contenidos en la Ley de Víctimas del Estado de México y demás disposiciones jurídicas aplicables.

8.2 Obligaciones de las Personas Beneficiarias

- i. Proporcionar la información socioeconómica requerida de manera veraz en tiempo y forma;
- ii. Proporcionar la documentación que requiera la Instancia Normativa para la correcta operación del presente Programa;
- iii. Cuando el recurso sea otorgado al tutor, curador o a la persona que acredite tener la guardia y custodia de las Niñas, Niños o Adolescentes beneficiarios, ésta deberá firmar el acta circunstanciada donde se establece que actúa en representación de las Personas Beneficiarias, sin que esto le beneficie de manera particular, haciendo buen uso de los recursos obtenidos a favor de las Niñas, Niños o Adolescentes y empleando el recurso otorgado únicamente para lograr en la medida de lo posible la recuperación del proyecto de vida de las Niñas, Niños o Adolescentes beneficiarios;
- iv. Disponibilidad para que se le realice el estudio socioeconómico y las verificaciones que aplica la Unidad de Trabajo Social de la Comisión Ejecutiva, cuando así lo requiera el Comité Técnico;
- v. Proporcionar una cuenta bancaria a nombre de la Persona Beneficiaria, a fin de realizar el depósito o transferencia electrónica correspondiente al apoyo, y
- vi. Las demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

8.3 No se otorgará la compensación pecuniaria en los siguientes supuestos:

- i. Cuando la Persona Beneficiaria renuncie al programa, lo cual tendrá que sustentarse con evidencia escrita;
- ii. Cuando la Persona Beneficiaria proporcione datos o documentación falsa para su incorporación al programa;
- iii. Haber recibido compensación o reparación del daño por el mismo delito, por cualquier otra vía o institución, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o algún otro medio fehaciente, y
- iv. Cuando se incumpla con lo establecido en las presentes Reglas de Operación.

En caso de muerte de la Persona Beneficiaria, quien tendrá derecho a recibir el monto de la compensación pecuniaria, será en el orden de prelación establecido en el artículo 10 párrafo cuarto de la Ley de Víctimas del Estado de México.

9. Instancias Participantes

9.1. Instancia Normativa

El Comité es el responsable de normar el Programa e interpretar las presentes Reglas de Operación.

9.2. Instancia Ejecutora

La Unidad de Género y Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva es la Instancia Responsable de la operación del Programa.

9.3. Instancia Responsable

La Comisión Ejecutiva será la responsable de coordinar la ejecución del Programa.

9.4. Comité de Admisión y Seguimiento

- I. Integración

El Comité se integrará por:

- I. Presidencia, a cargo de la persona titular de la Consejería Jurídica;
- II. Secretaría, a cargo de la persona titular de la Instancia Responsable;
- III. Persona representante de la SeMujeres;
- IV. Persona representante de la Secretaría de Finanzas;
- V. Persona titular de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto de la Instancia Responsable;
- VI. Persona titular de la Defensoría Especializada para la Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Instancia Responsable;

- VII. Persona representante de la Sociedad Civil o Institución Académica;
- VIII. Persona titular de la Coordinación Administrativa; y
- IX. Persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica como representante de la Secretaría de la Contraloría.

La persona representante de la sociedad civil o institución académica será elegida y aprobada por las demás personas integrantes del Comité, en la primera sesión del año, de entre una terna que proponga la persona representante de la SeMujeres. Cada año, deberá elegirse a una persona representante distinta de la sociedad civil o institución académica; no podrá existir reelección consecutiva.

Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente. El cargo otorgado dentro del Comité será honorífico.

Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona a cargo de la Secretaría del Comité y la persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica, quienes solo tendrán derecho a voz.

Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad o, en su ausencia, la persona representante de la SeMujeres emitirá el voto de calidad.

Una vez instalado el Comité, sesionará bimestralmente de forma ordinaria a partir de que la Coordinación Administrativa, informe a la Instancia Responsable, que ya se cuenta con el recurso para su operación, y a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a su liberación y de manera extraordinaria cuando sea necesario. En cada sesión ordinaria la Instancia Responsable deberá informar de manera detallada al Comité sobre el ejercicio de los recursos del programa.

La persona a cargo de la Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la Presidencia, con tres días hábiles de anticipación como mínimo para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación.

Previo aprobación del Comité, se podrá invitar a sus sesiones a personas representantes del sector público, academia o sociedad civil, cuya intervención se considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra índole que se sometan a su consideración y que sean en beneficio de víctimas o personas ofendidas del delito.

Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad más una de las personas integrantes, siempre y cuando se encuentre presente la Presidencia, la Secretaría, la persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica, o sus suplencias debidamente acreditadas.

La persona a cargo de la Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando de manera sucinta el sentido de las intervenciones y cada uno de los acuerdos tomados. Previo aprobación, deberá ser firmada por las personas integrantes del Comité.

Podrá ser considerado el medio electrónico para la notificación de las sesiones a los Integrantes del Comité.

9.4.3 Atribuciones

Son atribuciones del Comité:

- I. Emitir la convocatoria para la incorporación al Programa;
- II. Recibir las Solicitudes de Ingreso requisitadas y firmadas, dirigidas a la Instancia Responsable para su ingreso al Programa y aprobarlos o negarlos, según sea el caso;
- III. Aprobar el padrón de Personas Beneficiarias;
- IV. Autorizar la inclusión de nuevas Personas Beneficiarias, en sustitución de las bajas que se presenten durante la ejecución del Programa, conforme a la lista de espera;
- V. Autorizar la continuidad de Personas Beneficiarias en el Programa;
- VI. Suspender el Programa cuando las Personas Beneficiarias incurran en alguna causal establecida en el numeral 8.1.9.1 de las presentes Reglas de Operación;
- VII. Cancelar el apoyo económico o dar de baja del Programa a Personas Beneficiarias cuando éstas incumplan con lo establecido en el numeral 8.1.8 y 8.1.9.2 de las presentes Reglas de Operación;

- VIII. Determinar la reanudación del Apoyo Económico del Programa cuando las Personas Beneficiarias lo soliciten por escrito y haya cesado la causa que dio lugar a la suspensión del mismo;
- IX. Aprobar el Apoyo Económico a las Personas Beneficiarias que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación;
- X. Solicitar la información que se requiera para el cumplimiento del Programa, a las áreas integrantes de la Instancia Responsable, quienes deberán entregarla en un plazo no mayor a setenta y dos horas;
- XI. En caso de ser necesario, solicitar a la Unidad de Trabajo Social, a la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito y al Registro Estatal de Víctimas, realicen los estudios correspondientes o aporten información, a efecto de determinar si los solicitantes son tutores de Personas Beneficiarias o si éstos tienen la calidad de Víctimas o Personas Ofendidas y si cuentan con los requisitos establecidos en la presentes Reglas de Operación;
- XII. Emitir y modificar sus lineamientos internos;
- XIII. Solicitar a la Unidad de Trabajo Social que emita la Constancia en la que se establezca que el tutor tiene bajo su cuidado a la Personas Beneficiarias, en caso de que las Personas Solicitantes no cuenten con documento legal que lo acredite.
- La Constancia antes referida únicamente tendrá validez durante el ejercicio fiscal correspondiente, será de uso exclusivo para este Programa y la misma no exime de la obligación de las Personas Solicitantes de realizar los procedimientos legales correspondientes para obtener mediante sentencia judicial la guarda y custodia de las Personas Beneficiarias;
- XIV. Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como para el cumplimiento de sus objetivos;
- XV. Proponer las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación para garantizar la correcta operación del Programa en favor de las Personas Beneficiarias;
- XVI. El Comité por conducto de sus integrantes o a través del personal de la Instancia Responsable designado, podrá verificar cuando sea necesario, que los Apoyos Económicos otorgados dentro del Programa cumplen con los fines para los cuales fue creado, mediante:
- a) Visita domiciliaria cuando se detecte o se presuma que se está haciendo mal uso de los recursos, se destinen para cualquier otro concepto que no sea de los establecidos en la Canasta Básica; o cuando se haya proporcionado información o documentación falsa. En su caso, el Comité hará del conocimiento a la autoridad competente;
 - b) Solicitud de información o documentación al tutor o a la Persona Beneficiaria que ampare que los recursos han sido ejercidos para cubrir los rubros previstos en el Programa;
 - c) Entrevista a las Personas Beneficiarias para conocer como han mejorado sus condiciones de vida;
 - d) Verificación de que haya mejoramiento en las condiciones de vida de las personas beneficiarias niñas, niños o adolescentes, y
 - e) Las demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

10. Mecánica Operativa

10.1. Operación del Programa

- I. Las Víctimas u Ofendidos, que cumplan los requisitos de las presentes Reglas de Operación podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva y solicitar ser Persona Beneficiaria del presente Programa;
- II. La Coordinación Administrativa deberá gestionar la totalidad de los recursos asignados para la operación del Programa;
- III. La SeMujeres podrá canalizar a la Comisión Ejecutiva, a personas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación;

- IV. Posteriormente, deberán entregar en la Comisión Ejecutiva la documentación completa, solicitada en los requisitos y criterios de selección de este Programa, o podrá ser entregada directamente a la Unidad de Trabajo Social;
- V. La Instancia Ejecutora validará que los solicitantes, cumplen con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación, para lo cual se podrá auxiliar de la Unidad de Trabajo Social;
- VI. Una vez integrado el expediente, la Instancia Ejecutora deberá presentar ante el Comité Técnico las fichas del caso a valorar para su revisión y en su caso aprobarlo o negarlo;
- VII. Una vez autorizada la compensación, por parte del Comité Técnico, la Instancia Ejecutora, remitirá a la Coordinación Administrativa, el cronograma con las fechas programadas para que la Coordinación Administrativa sea la responsable de otorgar el apoyo económico a las Personas Beneficiarias;
- VIII. Si el expediente no es aprobado para recibir el apoyo la Instancia Ejecutora informará a los interesados dicha situación, y
- IX. Los apoyos se entregarán exclusivamente a las Personas Beneficiarias inscritas en el padrón, en ningún caso podrá ser a través de apoderados legales.

11. Transversalidad

La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de colaboración y coordinación con instituciones públicas o privadas, con la finalidad de coadyuvar en la operación y cumplir con los objetivos del programa, debiendo informar al Comité y al Consejo Consultivo de la celebración de dichos convenios.

Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o dupliquen con otros programas de desarrollo social o acciones de gobierno.

12. Mecanismos de Participación Social

En la operación y seguimiento del Programa se considerará la participación en el Comité de personas u organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en la defensa de los derechos de las personas Víctimas y Ofendidos, a invitación de la persona titular de la presidencia del Comité.

13. Difusión

13.1. Medios de Difusión

La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley de Víctimas del Estado de México, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como en los medios que determine el Comité Técnico.

Las presentes Reglas de Operación que emiten la Consejería Jurídica y la SeMujeres, serán publicadas en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Toda la documentación que se utilice para la promoción y publicidad del presente Programa deberá contener la siguiente leyenda:

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A SUS REGLAS DE OPERACIÓN. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES, CONFORME A LO QUE DISPONGA LA LEY DE LA MATERIA".

Las presentes Reglas de Operación serán traducidas a las lenguas originarias de los pueblos indígenas más representativos del Estado de México, mismas que deberán ser publicadas en la página oficial de la Comisión Ejecutiva.

14. Transparencia

La Comisión Ejecutiva resguardará los datos de las Personas Beneficiarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, Ley de Víctimas del Estado de México y su Reglamento.

15. Seguimiento

La Instancia Ejecutora dará seguimiento al Programa y rendirá un informe de manera anual al concluir el ejercicio fiscal a la Instancia Normativa.

16. Auditoría, Control y Vigilancia

La auditoría, control y vigilancia de este Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México o el Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica, debiéndose establecer los mecanismos necesarios para la verificación de la entrega de los apoyos a las Personas Beneficiarias.

17. QUEJAS Y DENUNCIAS

Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega del apoyo económico del Programa podrán ser presentadas por las Personas Beneficiarias, a través de las siguientes vías:

- I. De manera escrita: en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, con domicilio en Paseo de los Cisnes número 49, Colonia La Asunción, C.P. 52172, Metepec, Estado de México o en la Secretaría de las Mujeres, con domicilio en Avenida Miguel Hidalgo Oriente Número 1031, Barrio San Bernardino, Toluca, Estado de México C.P. 50090;
- II. Vía telefónica: al número de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (722) 2 75 86 64, o en la Secretaría de las Mujeres (722) 213 89 15;
- III. Vía Internet: a los correos electrónicos comisionada.ceav@edomex.gob.mx o subavg.semujeres@edomex.gob.mx;
- IV. Personalmente: al Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica ubicado en Instituto Literario Poniente 510, Código Postal 50000 Toluca de Lerdo, Estado de México;
- V. Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: A través de la aplicación "Denuncia Edomex", a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, y
- VI. Vía plataforma digital del Sistema de Atención Mexiquense "SAM": en la siguiente liga https://www.secogem.gob.mx/SAM/sit_atn_mex.asp.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" y estará vigente hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa.

TERCERO. Se abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía jurídica que sean contrarias a las contenidas en el presente Acuerdo.

CUARTO. Los instrumentos jurídicos celebrados, así como las relaciones jurídicas derivadas de la operación del Programa, continuaran su vigencia, hasta la terminación de los mismos y en concordancia con las presentes Reglas de Operación.

QUINTO. Las dudas y lo no previsto que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas por la Instancia Normativa del Programa.

SEXTO. La entrega del apoyo económico del Programa se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal autorizada.

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

EL CONSEJERO JURÍDICO, LIC. JESÚS GEORGE ZAMORA.- RÚBRICA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN.- RÚBRICA.

Al margen Escudo del Estado de México, un logotipo, que dice: Estado de México ¡El poder de servir!, una leyenda, que dice: CONSEJERÍA JURÍDICA, otra leyenda, que dice: MUJERES, Secretaría de las Mujeres.

ACUERDO DEL CONSEJERO JURÍDICO Y DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA VALENTINA “ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR EL DELITO DE FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN”, PARA EL ESTADO DE MÉXICO.

LIC. JESÚS GEORGE ZAMORA, CONSEJERO JURÍDICO, Y MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN, SECRETARIA DE LAS MUJERES, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 52 y 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PUBLICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 226 EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO; 4, FRACCIONES II Y IX, 42 FRACCIONES II Y XXI DE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y

CONSIDERANDO

Que el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, es la máxima institución en la materia en el Estado de México, que tiene por objeto establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección de las personas víctimas y ofendidas del delito.

Que la Consejería Jurídica, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, en materia de atención a las personas víctimas y ofendidas, ejercerá entre sus atribuciones, el participar de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, en el diseño e instrumentación de políticas gubernamentales tendentes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y, en ese contexto, intervenir en la ejecución de estrategias de protección a las víctimas y ofendidos, a través de programas dirigidos a personas víctimas y ofendidas, bajo un enfoque transversal de derechos humanos y género así como de protección de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Que la Secretaría de las Mujeres, es la dependencia encargada de promover, coordinar, impulsar, formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas, programas y acciones relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la transversalización de la perspectiva de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres por razón de género y condición social, la implementación de acciones afirmativas que acorten las brechas sociales, la protección integral de mujeres, y la eliminación de cualquier tipo de discriminación que obstaculice el acceso igualitario a las oportunidades, el empoderamiento, y el ejercicio de sus derechos.

Que a la Secretaría de las Mujeres, entre otras, le corresponde formular, proponer, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a la instrumentación de políticas públicas, programas estatales y acciones que promuevan la igualdad de género, la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de las medidas institucionales que aseguren el ejercicio de sus derechos, oportunidades y acceso igualitario a la participación equitativa en el desarrollo económico, político, social y cultural, a fin de eliminar los estereotipos y prácticas sociales que refuerzan la discriminación hacia las mujeres. Además, coordinar, dirigir y supervisar al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Que el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, refiere que, en todas las medidas concernientes al Interés Superior de la Niñez, deben estar basadas en la consideración del Interés Superior del Niño, y corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.

Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México es un órgano desconcentrado de la Consejería Jurídica, con autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto permitir la representación y participación directa de las personas víctimas u ofendidas en todas las instituciones del Sistema Estatal de Víctimas, propiciando su intervención en la gestión y la construcción de políticas gubernamentales, al igual que en el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema Estatal de Víctimas; con la finalidad de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, así como la prestación del servicio de asesoría jurídica.

Que la Ley de Víctimas del Estado de México establece que las personas víctimas podrán solicitar y recibir ayuda oportuna, rápida, gratuita y efectiva de acuerdo con las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el delito, con el objetivo de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,

utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, en el momento de la comisión del delito o de la violación de derechos humanos que haya sido determinada por un órgano jurisdiccional o de derechos humanos, respectivamente.

Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, establece que las niñas, niños y adolescentes tiene derecho a que se les asegure prioridad en el goce de sus derechos, especialmente para que: Se les brinde protección oportuna, se les atienda en igualdad de condiciones en todos los servicios, antes que los adultos; se diseñen y ejecuten políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos, por lo que se deberá asignar mayores recursos a las instituciones públicas o privadas encargadas en la atención de sus necesidades; y prevalezca el interés superior de la niñez para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para su protección.

Que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el INEGI, en el Estado de México viven 16,992,418 habitantes, de los cuales 8,251,295, son hombres y 8,741,123 son mujeres, asimismo, en el Estado de México viven 4 millones 421 mil 644 niñas y niños de 0 a 15 años, que representan el 26% de la población de esta entidad.

Que, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2023 el acumulado de presuntos feminicidios en el Estado de México fue de 86.

Que, con base en la información proporcionada por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, se reportaron un total de 6,596 personas desaparecidas en el Estado de México, de las cuales están pendientes de localizar 1791.

Que, de acuerdo con información del INEGI (2020), en promedio por hogar habitan 3.6 personas en el Estado México, por lo que se estima, con las cifras anteriores la existencia de un total de 349 personas familiares ofendidas del delito de feminicidio, y 18,637 personas familiares ofendidas por el delito de desaparición.

Que las medidas de ayuda se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo que el costo o las erogaciones en que incurra la autoridad en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las personas ofendidas o víctimas indirectas.

Que, atendiendo a la Sentencia de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce la existencia de homicidios de mujeres cometidos por razones de género, también conocidos como feminicidios, y señala que las irregularidades en la investigación y el maltrato a las víctimas son formas de discriminación y violencia por parte del Estado. Entre distintas acciones, se fortaleció al Instituto Nacional de la Mujer que cuenta con programas de asistencia social y jurídica para las víctimas de violencia y discriminación.

Que el Manual y Protocolo de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, señala en su numeral 4. Denominado “Hacia un concepto amplio de víctima de feminicidio”, que la tipificación del delito de feminicidio es relativamente de recién creación en México y en el Estado de México, por lo que casos de feminicidio, cometidos antes del tipo penal, pueden haber sido calificados como homicidios, por lo que la interpretación del concepto de víctima restringido a la calificación jurídica del delito, excluye a un gran número de casos de la atención brindada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, y se podría convertir en la práctica en una forma de discriminación y violencia de género.

Que en dicho Manual y Protocolo se utiliza un concepto amplio de víctima de feminicidio que toma en cuenta la muerte violenta de una mujer y la existencia de razones de género, en la privación de la vida, asimismo, incluye a las mujeres sobrevivientes de feminicidio, con el fin de garantizar sus derechos a la ayuda, asistencia y atención.

Que el Programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Feminicidio y Desaparición” tiene como objetivo contribuir al sano desarrollo integral de Niñas, Niños y Adolescentes mediante el otorgamiento de Apoyos Económico para realizar actividades y adquirir bienes compensatorios que eleven su bienestar, cuando se encuentran en situación de orfandad a consecuencia de los delitos de desaparición y/o feminicidio, o delitos donde existan Razones de Género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne; así como a aquellas Niñas, Niños y Adolescentes donde exista dependencia económica directa con la víctima y ésta, a consecuencia del delito por Razones de Género, tenga una Discapacidad Física o Discapacidad Mental siempre y cuando el delito sea cometido, continuado o consumado en el Estado de México.

Que en atención a lo establecido en el Artículo Transitorio Décimo Quinto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado el 28 de diciembre de 2023, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, la Consejería Jurídica en coordinación con la Secretaría de las Mujeres serán las encargadas de implementar los mecanismos necesarios para la operación de los recursos destinados al Programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Feminicidio y Desaparición”, es por lo que la publicación y firma de las presentes Reglas de Operación se realizará entre la Secretaría de las Mujeres y la Consejería Jurídica.

Que en fecha 29 de febrero de 2024, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió el dictamen respectivo a las presentes Reglas de Operación.

En razón a lo anterior, se expide el siguiente:

ACUERDO DEL CONSEJERO JURÍDICO Y DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA VALENTINA “ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR EL DELITO DE FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN”, PARA EL ESTADO DE MÉXICO.

1. Disposiciones Generales

1.1. Definición del Programa

El Programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Orfandad por el Delito de Femicidio y Desaparición” tiene como objetivo contribuir al sano desarrollo integral de Niñas, Niños y Adolescentes mediante el otorgamiento de Apoyos Económicos para realizar Actividades Complementarias que eleven su bienestar, cuando se encuentran en situación de orfandad a consecuencia de los delitos de desaparición y/o feminicidio, o delitos donde existan Razones de Género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne; así como a aquellas Niñas, Niños y Adolescentes, donde exista dependencia económica directa con la víctima y ésta, a consecuencia del delito por Razones de Género, tenga una Discapacidad Física o Mental siempre y cuando el delito sea cometido, continuado o consumado en el Estado de México.

2. Derechos que Atiende

Derechos de prioridad de la niñez, a la no discriminación, al bienestar y al sano desarrollo integral.

3. Glosario de Términos

Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:

Actividades y bienes compensatorios: Al conjunto de actividades y bienes relacionados con la cultura artística y literaria, turismo, de esparcimiento, visitas a sitios naturales y recreativos, al juego y actividades deportivas, educativas, físico-deportivas, sociofamiliares, de pasatiempos, aficiones o hobbies, ropa, calzado, acceso a las tecnologías de la información y comunicación incluido el de banda ancha e internet, compra de medicamentos, uniformes y útiles escolares, o actividades y bienes de la misma naturaleza, que puedan contribuir al desarrollo integral, al crecimiento, a una vida digna, a la incorporación a la vida social y a una vida saludable de las personas beneficiarias;

Adolescente: A toda persona cuya edad esté comprendida entre los doce años y menor a los dieciocho años, cuando exista duda de que se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente;

Apoyo Económico: A la transferencia monetaria que será otorgada a la persona beneficiaria a través del medio de entrega;

Comisión Ejecutiva: A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México;

Comité: Al Comité de admisión, seguimiento comprobación, y remisión del Programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Femicidio y Desaparición”;

Consejería Jurídica: A la Consejería Jurídica del Estado de México;

Constancia: Al documento emitido por la Unidad de Trabajo Social, para determinar que las Niñas, Niños y Adolescentes, hijos e hijas de la víctima se encuentran bajo el resguardo de la persona que solicita el ingreso al Programa, mismo que tendrá una vigencia durante el ejercicio fiscal correspondiente;

Coordinación Administrativa: A la Coordinación Administrativa de la Consejería Jurídica, quien es la responsable de la gestión, administración, dispersión, comprobación y remisión del recurso económico del Programa;

Cuenta Bancaria: Al número de cuenta bancaria o interbancaria a nombre de la Persona Beneficiaria o Persona Representante, que además de identificar y asociar a la Persona Beneficiaria, le permite el acceso al Apoyo Económico del Programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Femicidio y Desaparición”;

Discapacidad Física. A la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras

que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

Instancia Ejecutora: A la Unidad de Género y Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México;

Instancia Normativa: Al Comité de Admisión y Seguimiento del Programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Femicidio y Desaparición”;

Instancia Responsable: A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México;

Interés Superior de la Niñez: Al máximo beneficio que ha de otorgarse de conformidad con los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes respecto de cualquier otro beneficio o derecho y que tiene como propósito alcanzar su desarrollo integral, así como la plenitud de sus aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades, tomando en consideración que cada uno de ellos es una universalidad y una individualidad en la que la familia, la comunidad y el propio estado garantizarán ese pleno desarrollo;

Lista de Espera: A la relación de personas solicitantes que, cumpliendo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Femicidio y Desaparición”, no son sujetos de Apoyo Económico por haberse agotado los recursos disponibles para el Programa;

Medio de Entrega: A la transferencia electrónica realizada por la Coordinación Administrativa en la Cuenta Bancaria proporcionada por la Persona Beneficiaria o Persona Representante;

Niña o Niño: A toda persona cuya edad sea menor a doce años, cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años de edad, se presumirá que es niña o niño;

Padrón de Personas Beneficiarias: A la relación oficial de Personas Beneficiarias atendidas por el Programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Femicidio y Desaparición”;

Personas Beneficiarias: A las Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por los delitos de desaparición y/o femicidio, o delitos donde existan Razones de Género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne; así como a aquellas Niñas, Niños y Adolescentes donde exista dependencia económica directa con la víctima y ésta, a consecuencia del delito por Razones de Género, tenga una Discapacidad Física o Mental, siempre y cuando el delito se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México;

Persona Ofendida: A los familiares o personas físicas que tengan relación inmediata con la persona Víctima y que hayan sufrido indirectamente un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos humanos a consecuencia de conductas consideradas como delitos de desaparición, femicidio y/o aquellos delitos donde existan razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne;

Programa: Al Programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Femicidio y Desaparición”;

Reglas de Operación: A las presentes Reglas de Operación del Programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Femicidio y Desaparición”;

Razones de Género: A la muerte de una mujer por razones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público;

SeMujeres: A la Secretaría de las Mujeres;

Solicitud de Ingreso: Al formato establecido por la Comisión Ejecutiva, que deberá ser llenado y firmado por las personas solicitantes que cumplan con los requisitos y criterios de selección establecidos en las presentes Reglas de Operación;

Tutor: Al padre, las o los abuelos, tutores, personas cuidadoras o la persona que tenga bajo sus cuidados a la Persona Beneficiaria y sea constatada tal calidad por la Unidad de Trabajo Social, quienes no podrán ejercerlo de manera conjunta;

Unidad de Trabajo Social: A la Unidad de Trabajo Social de la Comisión Ejecutiva, y

Víctima: A la persona física que ha sufrido algún daño o menoscabo físico, mental, emocional, económico o en general, cualquiera que ponga en peligro o lesione sus bienes jurídicos o sus derechos, o bien, se trate de la violación a sus derechos humanos como consecuencia de la comisión de los delitos de desaparición, feminicidio y/o aquellos delitos donde existan razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Contribuir al sano desarrollo integral de Niñas, Niños y Adolescentes que tengan la calidad de personas beneficiarias, mediante el otorgamiento de Apoyos Económico para realizar actividades o adquirir bienes compensatorios que eleven su bienestar, cuando se encuentran en situación de orfandad a consecuencia de los delitos de desaparición y/o feminicidio, o delitos donde existan Razones de Género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne; así como a aquellas Niñas, Niños y Adolescentes donde exista dependencia económica directa con la Víctima y ésta, a consecuencia del delito por Razones de Género, tenga una Discapacidad Física o Mental; siempre y cuando el delito se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México.

5. Universo de Atención

5.1. Población Universo

Niñas, Niños y Adolescentes, en situación de orfandad por causa de los delitos de desaparición, feminicidio y/o aquellos delitos donde existan razones de género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne.

5.2. Población Potencial

Niñas, Niños y Adolescentes ofendidos, en situación de orfandad a consecuencia de los delitos de feminicidio, desaparición, o delitos donde existan Razones de Género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público le asigne.

5.3. Población objetivo

5.3.1. Vertiente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el delito de feminicidio o desaparición

Niñas, Niños y Adolescentes menores de 18 años, en situación de orfandad a consecuencia de los delitos de feminicidio o desaparición, cometidos en el Estado de México que tengan reconocida su calidad de Persona Ofendida por autoridad competente.

5.3.2 Vertiente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad con Discapacidad Física o Mental

Niñas, Niños y Adolescentes menores de 18 años con alguna Discapacidad Física o Mental, y que se encuentren en situación de orfandad a consecuencia de los delitos de feminicidio, desaparición o delitos donde existan Razones de Género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público le asigne, cometidos en el Estado de México, y que tengan reconocida su calidad de Persona Ofendida por autoridad competente.

5.3.3. Vertiente niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de víctimas de delito por Razones de Género

Niñas, Niños y Adolescentes menores de 18 años hijas e hijos en situación de orfandad a consecuencia del delito en donde existan Razones de Género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne y que tengan reconocida su calidad de Persona Ofendida por autoridad competente.

5.3.4. Vertiente Niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de mujeres víctimas con Discapacidad Física o Discapacidad Mental

Niñas, Niños y Adolescentes menores de 18 años que tengan dependencia económica directa con la Víctima, y ésta, a consecuencia del delito por Razones de Género, tenga una Discapacidad Física o Mental.

6. Cobertura

El Programa podrá cubrir los 125 municipios del Estado de México y las entidades federativas donde residan personas beneficiarias..

7. Apoyo

7.1. Tipo de Apoyo

Transferencia de recursos monetarios, en una y hasta en doce ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada.

7.2. Monto del apoyo

7.2.1. Vertiente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el delito de feminicidio o desaparición

Apoyo Económico de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, en una y hasta en doce ocasiones, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

7.2.2. Vertiente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad con Discapacidad Física o Mental

Apoyo Económico de \$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, en una y hasta en doce ocasiones, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

7.2.3 Vertiente niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de víctimas de delito por Razones de Género

Apoyo Económico de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N) mensuales, en una y hasta en doce ocasiones, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

7.2.4. Vertiente Niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de mujeres víctimas con Discapacidad Física o Discapacidad Mental

Apoyo Económico de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N) mensuales, en una y hasta en doce ocasiones, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

El apoyo y el trámite serán gratuitos y se cubrirán en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, a través de la Instancia Responsable y no generarán un costo adicional a las Personas Beneficiarias, con excepción de las comisiones bancarias que se pudieran generar por el manejo de la cuenta.

7.3. Origen de los Recursos

El presupuesto asignado al Programa es en su totalidad de origen estatal.

Dicho presupuesto se destinará para cubrir el Apoyo Económico que se otorga a las Personas Beneficiarias, el cual deberá de ser justificado ante la Secretaría de Finanzas y autorizado por dicha Dependencia.

8. Mecanismos de Enrolamiento

8.1. Personas Beneficiarias

8.1.1. Requisitos y Criterios de Selección

- a) Contar con la calidad de Persona Ofendida o Víctima por delitos de desaparición y/o feminicidio, o delitos donde existan Razones de Género en los términos del Código Penal del Estado de México, independientemente de la clasificación jurídica que el Ministerio Público les asigne;
- b) Que el delito del que deriva su calidad de Víctima o Persona Ofendida se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México;
- c) Para la Vertiente Niñas, Niños y Adolescentes hijas e hijos de mujeres Víctimas con Discapacidad Física o Mental, se deberá presentar documento emitido por instituciones públicas de salud especializadas que acrediten que la Víctima cuenta con alguna Discapacidad Física o Mental a consecuencia del delito;
- d) Firmar el formato donde la persona solicitante autoriza que se realice el depósito a la Cuenta Bancaria proporcionada y manifiesta que el apoyo económico se utilizará para los fines establecidos en el Programa;

- e) Contar con la Constancia emitida por la Unidad de Trabajo Social, previa verificación, que acredite que las Niñas, Niños y Adolescentes se encuentran al cuidado de quien suscribe la Solicitud de Ingreso, y se podrá solicitar el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, quien vigilará en todo momento se garantice el interés superior de la niñez.
- f) Los demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

Además de los requisitos antes establecidos, los solicitantes deberán presentar o cumplir lo siguiente:

- I. Formato de Solicitud de Ingreso dirigida a la Instancia Responsable, para el acceso al Programa, debidamente requisitada y firmada por el Tutor que se encuentre reconocido jurídicamente para representar a la persona beneficiaria y que la tenga bajo su cuidado;

La Solicitud de Ingreso al Programa deberá ser actualizada al ejercicio fiscal corriente. Si la persona solicitante se encuentra en lista de espera, deberá actualizar su Carta de Solicitud de Ingreso al Programa, al año fiscal vigente.
- II. Para el caso de la modalidad Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad con Discapacidad Física o Mental, dicha discapacidad se podrá acreditar provisionalmente, por el término máximo de un mes, con documento emitido por la Unidad de Trabajo Social;
- III. Copia simple legible del acta de nacimiento de las Personas Beneficiarias;
- IV. Copia de identificación oficial vigente de quien suscribe el documento;
- V. Contar con número de registro, ante el Registro Estatal de Víctimas;
- VI. Cuenta Bancaria a nombre de la Persona Beneficiaria o persona representante;
- VII. Copia del estado de cuenta a nombre de la Persona Beneficiaria o persona representante, y;
- VIII. Los demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

Los datos personales recabados de las personas solicitantes serán tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y demás normatividad en la materia.

8.1.1.1. Permanencia en el Programa

Las Personas Beneficiarias podrán continuar en el Programa siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los numerales 8.1.1 y 8.1.7 de las presentes Reglas de Operación y de acuerdo con el presupuesto autorizado.

En el caso de los usuarios que fueron Personas Beneficiarias en el ejercicio fiscal inmediato anterior, deberán realizar nueva solicitud de ingreso una vez que entren en vigor las presentes Reglas de Operación o en enero del ejercicio fiscal en curso, quienes deberán cumplir con los requisitos expuestos en los numerales 8.1.1 y 8.1.7 de las presentes Reglas de Operación.

8.1.2. Criterios de Priorización

Las solicitudes de ingreso al Programa serán atendidas en el orden en que fueron recibidas por la Instancia Ejecutora y conforme al número de folio asignado a cada Persona Solicitante y de acuerdo al presupuesto autorizado.

El Comité dará preferencia a las personas solicitantes:

- I. Con condición de orfandad;
- II. Con alguna discapacidad física o mental;
- III. Con condición de pobreza extrema;
- IV. Que sean integrantes de comunidades originarias;
- V. Con solicitud de autoridad judicial o administrativa competente siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en la regla 8.1.1., previa autorización de la Instancia Normativa;
- VI. Los demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

8.1.3. Modalidades de Registro

La persona solicitante que desee ingresar al Programa deberá realizar los trámites de registro de manera personal o a través de tutor. La Instancia Responsable deberá seguir estrictamente el orden de la lista de espera. La Instancia Responsable a

través de la Unidad de Trabajo Social deberá facilitarle los formatos de acceso al Programa a aquellas personas solicitantes que cuenten con la calidad de Persona Ofendida o Víctima, y que el delito se haya cometido, continuado o consumado en el Estado de México.

Para el caso de personas solicitante que por sus condiciones de Discapacidad Física o Mental no pueda realizar el trámite de manera personal, se nombrará a un representante o tutor, mayor de edad, acompañado de un certificado de salud expedido por una institución pública que acredite la circunstancia que le impide a la persona solicitante llevar a cabo su registro.

Una vez que la Instancia Ejecutora valide y capture la información proporcionada por la persona solicitante, emitirá el número de folio.

Cuando la persona solicitante se encuentre en una lista de espera, no será necesario realizar nuevamente el trámite de forma personal.

El trámite de registro es gratuito y no significa necesariamente su incorporación al Programa.

8.1.4. Formatos

- a) Solicitud de Ingreso;
- b) Formato de autorización de depósito, y
- c) Los demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

8.1.5 Integración del Padrón de Personas Beneficiarias

La Instancia Responsable integrará y actualizará el Padrón de Personas Beneficiarias de acuerdo con lo establecido en la Ley de Víctimas del Estado de México y su Reglamento, en el artículo 92 fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como en las demás normas en la materia.

Es responsabilidad de la Instancia Ejecutora a través de la Unidad de Trabajo Social, integrar y resguardar los padrones de las Personas Beneficiarias y será el Comité quien los valide.

8.1.6. Derechos de las Personas Beneficiarias

- a) Recibir el Apoyo Económico correspondiente en términos de las presentes Reglas de Operación;
- b) Reserva y privacidad de la información personal, y
- c) Ser tratados con respeto y equidad y con base en los principios contenidos en la Ley de Víctimas del Estado de México y demás ordenamientos aplicables.

8.1.7. Obligaciones de las Personas Beneficiarias

- a) Proporcionar la información socioeconómica requerida de manera veraz en tiempo y forma;
- b) Proporcionar la documentación que requiera la Instancia Normativa para la correcta operación del presente Programa;
- c) Hacer uso del Apoyo Económico para los fines establecidos en el Programa. En ningún caso el apoyo económico se podrá transferir, vender, prestar, permutar, modificar o alterar sus objetivos;
- d) Informar a la Comisión Ejecutiva cuando ya no funjan como tutores o curadores, o ya no se tenga bajo su cuidado o resguardo a las Niñas, Niños y Adolescentes;
- e) En caso de ser necesario, permitir las visitas domiciliarias programadas por la Unidad de Trabajo Social;
- f) Las demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

8.1.8. Causas de cancelación del Apoyo Económico

- a) Incumplir con alguna de las obligaciones previstas en el numeral 8.1.7 de las presentes Reglas de Operación;
- b) No proporcionar los datos de la Cuenta Bancaria para realizar la transferencia monetaria;

- c) Realizar actos de proselitismo con los Apoyos Económicos del Programa a favor de una persona aspirante, postulante, precandidata o candidata a un cargo de elección popular, a través de un partido político, coalición o de manera independiente, y
- d) Las demás que por causa justificada y grave determine la Instancia Normativa.

8.1.9 Sanciones a las Personas Beneficiarias

8.1.9.1. Causas de Suspensión Temporal del Apoyo Económico

- I. En caso de que existan inconsistencias en el registro de la Persona Beneficiaria, hasta que así lo determine la Instancia Normativa;
- II. Cuando el que ejerza la guardia y custodia de la Persona Beneficiaria haga mal uso de los recursos, o los destine para cualquier otro concepto no contemplado en las presentes Reglas de Operación, y
- III. Las demás que por causa justificada y grave determine la Instancia Normativa.

La suspensión, será de manera temporal, hasta en tanto no se subsane cualquiera de las causas que dieron origen a la suspensión.

8.1.9.2 Causas de Baja del Programa

- I. Por fallecimiento;
- II. Cuando la Persona Beneficiaria renuncie voluntariamente al Programa, lo cual tendrá que sustentarse con su manifestación escrita;
- III. Cuando la persona solicitante no proporcione sin causa justificada la información y los formatos de manera veraz en tiempo y forma, cuando le sean requeridos;
- IV. Cuando con los Apoyos Económicos la Persona Beneficiaria realice actos de proselitismo a favor de algún aspirante, postulante, precandidato o candidato a un cargo de elección popular o a un partido político;
- V. En el caso del delito de desaparición, cuando se le retire del Registro Estatal de Víctimas;
- VI. Cuando la persona desaparecida sea localizada con vida;
- VII. Cuando se incumpla con alguno de los requisitos establecidos en el apartado 8.1.7 y 8.1.8 de las presentes Reglas de Operación;
- VIII. Cuando se de alguna de las causas de graduación previstas en el apartado 8.2.
- IX. Las demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

La persona titular de la Secretaría Técnica recabará toda la información y documentación que acredite la causa de suspensión o baja del Programa de las Personas Beneficiarias, y la someterá a consideración del Comité.

El Comité en un lapso no mayor a quince días hábiles deberá emitir el acuerdo de manera fundada y motivada de la suspensión o baja del Programa y deberá notificar al usuario de manera personal.

8.1.10. Corresponsabilidad de las Personas Beneficiarias

Por la naturaleza de la población objetivo a la cual va dirigido el Programa no se establece ninguna corresponsabilidad de las Personas Beneficiarias.

8.2. Graduación de las Personas Beneficiarias

Sin perjuicio de la obligación de realizar la solicitud anual respectiva, las personas beneficiarias dejarán de recibir el apoyo económico del Programa:

- a) En el caso de personas beneficiarias niñas, niños o adolescentes, cuando cumplan la mayoría de edad.
- b) En el caso de personas beneficiarias con alguna discapacidad física o mental, cuando dejen de tener tal condición.
- c) En el caso de personas beneficiarias con condición de pobreza extrema, cuando dejen de tener tal condición o cuando hayan recibido el apoyo económico del Programa por más de 3 años.

- d) En todos los demás casos, cuando hayan recibido el apoyo económico del Programa por más de 3 años.

9. Instancias Participantes

9.1. Instancia Normativa

El Comité es el responsable de normar el Programa e interpretar las presentes Reglas de Operación.

9.2. Instancia Ejecutora

La Unidad de Género y Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva es la Instancia Responsable de la operación del Programa.

9.3. Instancia Responsable

La Comisión Ejecutiva será la responsable de coordinar la ejecución del Programa.

9.4. Comité de Admisión y Seguimiento

9.4.1. Integración

El Comité se integrará por:

- I. Presidencia, a cargo de la persona titular de la Consejería Jurídica;
- II. Secretaría, a cargo de la persona titular de la Instancia Responsable;
- III. Persona representante de la SeMujeres;
- IV. Persona representante de la Secretaría de Finanzas;
- V. Persona titular de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto de la Instancia Responsable;
- VI. Persona titular de la Defensoría Especializada para la Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Instancia Responsable;
- VII. Persona representante de la Sociedad Civil o Institución Académica;
- VIII. Persona titular de la Coordinación Administrativa; y
- IX. Persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica como representante de la Secretaría de la Contraloría.

La persona representante de la sociedad civil o institución académica será elegida y aprobada por las demás personas integrantes del Comité, en la primera sesión del año, de entre una terna que proponga la persona representante de la SeMujeres. Cada año, deberá elegirse a una persona representante distinta de la sociedad civil o institución académica; no podrá existir reelección consecutiva.

Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente. El cargo otorgado dentro del Comité será honorífico.

Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona a cargo de la Secretaría del Comité y la persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica, quienes solo tendrán derecho a voz.

Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad o, en su ausencia, la persona representante de la SeMujeres emitirá el voto de calidad.

Una vez instalado el Comité, sesionará bimestralmente de forma ordinaria a partir de que la Coordinación Administrativa, informe a la Instancia Responsable, que ya se cuenta con el recurso para su operación, y a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a su liberación y de manera extraordinaria cuando sea necesario. En cada sesión ordinaria la Instancia Responsable deberá informar de manera detallada al Comité sobre el ejercicio de los recursos del programa.

La persona a cargo de la Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la Presidencia, con tres días hábiles de anticipación como mínimo para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación.

Previa aprobación del Comité, se podrá invitar a sus sesiones a personas representantes del sector público, academia o sociedad civil, cuya intervención se considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra índole que se sometan a su consideración y que sean en beneficio de víctimas o personas ofendidas del delito.

Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad más una de las personas integrantes, siempre y cuando se encuentre presente la Presidencia, la Secretaría, la persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica, o sus suplencias debidamente acreditadas.

La persona a cargo de la Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando de manera sucinta el sentido de las intervenciones y cada uno de los acuerdos tomados. Previa aprobación, deberá ser firmada por las personas integrantes del Comité.

Podrá ser considerado el medio electrónico para la notificación de las sesiones a los Integrantes del Comité.

9.4.2 Atribuciones

Son atribuciones del Comité:

- I. Emitir la convocatoria para la incorporación al Programa;
- II. Recibir las Solicitudes de Ingreso requisitadas y firmadas, dirigidas a la Instancia Responsable para su ingreso al Programa y aprobarlos o negarlos, según sea el caso;
- III. Aprobar el Padrón de Personas Beneficiarias.
- IV. Autorizar la inclusión de nuevas Personas Beneficiarias, en sustitución de las bajas que se presenten durante la ejecución del Programa, conforme a la lista de espera;
- V. Autorizar la continuidad de Personas Beneficiarias en el Programa;
- VI. Suspender el Programa cuando las Personas Beneficiarias incurran en alguna causal establecida en el numeral 8.1.9.1 de las presentes Reglas de Operación;
- VII. Cancelar el apoyo económico o dar de baja del Programa a Personas Beneficiarias cuando éstas incumplan con lo establecido en los numerales 8.1.8. y 8.1.9.2 de las presentes Reglas de Operación;
- VIII. Determinar la reanudación del Apoyo Económico del Programa cuando las Personas Beneficiarias lo soliciten por escrito y haya cesado la causa que dio lugar a la suspensión del mismo;
- IX. Aprobar el Apoyo Económico a las Personas Beneficiarias que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación;
- X. Solicitar la información que se requiera para el cumplimiento del Programa, a las áreas integrantes de la Instancia Responsable, quienes deberán entregarla en un plazo no mayor a setenta y dos horas;
- XI. En caso de ser necesario, solicitar a la Unidad de Trabajo Social, a la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito y al Registro Estatal de Víctimas, realicen los estudios correspondientes o aporten información a efecto de determinar si los solicitantes son Tutores de las Personas Beneficiarias o si éstos tienen la calidad de Víctimas o Personas Ofendidas, así como para verificar si cuentan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación;
- XII. Emitir y modificar sus lineamientos internos;
- XIII. Solicitar a la Unidad de Trabajo Social que emita la Constancia en la que se establezca que el tutor tiene bajo su cuidado a la Persona Beneficiaria, en caso de que las personas solicitantes no cuenten con documento legal que lo acredite. La Constancia antes referida únicamente tendrá validez durante el ejercicio fiscal correspondiente, será de uso exclusivo para este Programa y la misma no exime de la obligación de las personas solicitantes de realizar los procedimientos legales correspondientes para obtener mediante sentencia judicial la guarda y custodia de las Personas Beneficiarias;
- XIV. Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como para el cumplimiento de sus objetivos;

- XV. Proponer las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación para garantizar la correcta operación del Programa en favor de las Personas Beneficiarias;
- XVI. El Comité, por conducto de sus integrantes o a través del personal de la Instancia Responsable designada, podrá verificar cuando sea necesario, que los Apoyos Económicos otorgados dentro del Programa cumplen con los fines para los cuales fue creado, mediante:
- a) Visita domiciliaria, cuando se detecte o se presuma que se está haciendo mal uso de los recursos, se destinen para cualquier otro concepto que no sea de los establecidos en las actividades y bienes compensatorios; o cuando se haya proporcionado información o documentación falsa. En su caso, el Comité hará del conocimiento a la autoridad competente;
 - b) Solicitud de información o documentación al Tutor o a la Persona Beneficiaria que ampare que los recursos han sido ejercidos en favor de las hijas e hijos de Víctimas o Personas Ofendidas para cubrir los rubros previstos en el Programa;
 - c) Entrevista a las Personas Beneficiarias para conocer como han mejorado sus condiciones de vida y si deberá darse continuidad a la atención psicosocial de las Personas Beneficiarias;
 - d) Verificación de que haya mejoramiento en las condiciones de vida de las Niñas, Niños y Adolescentes, y
 - e) Las demás que por causa justificada determine la Instancia Normativa.

10. Mecánica Operativa

10.1. Operación del Programa

- I. La Instancia Responsable emitirá la convocatoria para la incorporación al Programa en los medios oficiales que determine la Instancia Normativa;
- II. La Coordinación Administrativa deberá gestionar la totalidad de los recursos asignados para la operación del Programa;
- III. Las personas solicitantes que cumplan con los requisitos y criterios de selección deberán apearse a lo establecido en la convocatoria;
- IV. Las personas solicitantes deberán entregar en la Instancia Responsable la Solicitud de Ingreso acompañada de la documentación completa, solicitada en los requisitos y criterios de selección de este Programa o podrá ser entregada a la Unidad de Trabajo Social;
- V. Se podrá ingresar la solicitud de ingreso de varios miembros de una familia, que se encuentren reconocidos por autoridad competente como Personas Ofendidas;
- VI. En los casos en los que se requiera, el tutor legal será el responsable de ingresar y dar seguimiento a la Solicitud de Ingreso en la Instancia Ejecutora de este Programa;
- VII. La validación en campo se hará con la finalidad de verificar la información proporcionada por las personas representantes. Esta verificación se llevará a cabo a través de una visita domiciliaria, por parte del personal de la Unidad de Trabajo Social, en el domicilio proporcionado por la persona solicitante o Tutor;
- VIII. La Unidad de Trabajo Social elaborará la relación de Personas Solicitantes y lo presentará ante la Instancia Ejecutora;
- IX. La Instancia Ejecutora presentará ante el Comité la relación de Personas Solicitantes para su revisión o en su caso aprobación;
- X. Si el expediente resulta aprobado para recibir el Apoyo Económico solicitado, la Instancia Ejecutora integrará a las Personas Beneficiarias en el Padrón de Personas Beneficiarias de este Programa para validación del Comité, y le notificará a las personas solicitantes o Tutor;
- XI. Si el expediente no es aprobado para recibir el Apoyo Económico, la Instancia Ejecutora informará a los interesados de la misma manera que en la fracción anterior;
- XII. Una vez autorizado el Apoyo Económico por parte del Comité, el mismo será entregado a las Personas Beneficiarias a través del Medio de Entrega;

- XIII. Los Apoyos Económicos se entregarán exclusivamente a las Personas Beneficiarias inscritas en el Padrón de Personas Beneficiarias;
- XIV. La Instancia Ejecutora integrará el Padrón de Personas Beneficiarias;
- XV. La entrega de Apoyos Económicos a las Personas Beneficiarias se realizará una vez que sean aprobados por el Comité, y
- XVI. La Coordinación Administrativa entregará el primer Apoyo Económico a las Personas Beneficiarias por única ocasión, dentro de los primeros siete días hábiles a partir de la aprobación de la solicitud, así mismo la entrega de los Apoyos Económicos subsecuentes se realizarán dentro de los primeros siete días hábiles de cada mes.

10.2. Sustitución de Personas Beneficiarias

En caso de cancelación o baja por los supuestos establecidos en los apartados 8.1.8 y 8.1.9.2, la Instancia Responsable enviará al Comité, para su aprobación, la propuesta de bajas a efecto de que autorice las sustituciones de las Personas Beneficiarias a partir de la Lista de Espera.

La Instancia Responsable informará al Comité de las sustituciones realizadas y convocará a las nuevas Personas Beneficiarias para otorgarles el Apoyo Económico a través del Medio de Entrega. La transferencia será a partir de su incorporación al Programa, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada.

11. Transversalidad

La Instancia Responsable podrá celebrar convenios de colaboración y coordinación con instituciones públicas o privadas, con la finalidad de coadyuvar en la operación y cumplir con los objetivos del Programa, debiendo informar al Comité de la celebración de dichos convenios.

Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o dupliquen con otros programas de desarrollo social o acciones de gobierno.

12. Mecanismos de participación social

En la operación y seguimiento del Programa se considerará la participación en el Comité de personas u organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los derechos de las Personas Víctimas y Ofendidos, a invitación de la persona titular de la Presidencia del Comité.

13. Difusión

13.1. Medios de difusión

La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley de Víctimas del Estado de México, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como en los medios que determine el Comité.

Las presentes Reglas de Operación que emiten la Consejería Jurídica y la SeMujeres, serán publicadas en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Toda la documentación que se utilice para la promoción y publicidad del presente Programa deberá contener la siguiente leyenda:

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LAS REGLAS DE OPERACIÓN. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE DISPONGA LA LEY DE LA MATERIA".

Las presentes Reglas de Operación serán traducidas a las lenguas originarias de los pueblos indígenas más representativos del Estado de México, mismas que deberán ser publicadas en la página oficial de la Comisión Ejecutiva.

13.2. Convocatoria

La convocatoria al Programa será emitida por la Instancia Responsable, en los medios que determine la Instancia Normativa.

14. Transparencia

La Instancia Responsable resguardará los datos de las Personas Beneficiarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, la Ley de Víctimas del Estado de México y su Reglamento.

15. Seguimiento

La Instancia Responsable dará seguimiento al Programa y rendirá un informe bimestral a la Instancia Normativa.

16. Auditoría, Control y Vigilancia

La auditoría, control y vigilancia de este Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México o el Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica, debiéndose establecer los mecanismos necesarios para la verificación de la entrega del Apoyo Económico a las Personas Beneficiarias.

17. Quejas y Denuncias

Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega del Apoyo Económico del Programa podrán ser presentadas por las Personas Beneficiarias, a través de las siguientes vías:

- I. De manera escrita: en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, con domicilio en Paseo de los Cisnes número 49, Colonia La Asunción, C.P. 52172, Metepec, Estado de México o en la Secretaría de la Mujer, con domicilio en Avenida Miguel Hidalgo Oriente Número 1031, Barrio San Bernardino, Toluca, Estado de México C.P. 50090;
- II. Vía telefónica: al número de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (722) 2 75 86 64, o en la Secretaría de las Mujeres (722) 213 89 15;
- III. Vía Internet: a los correos electrónicos comisionada.ceav@edomex.gob.mx o subavg.semujeres@edomex.gob.mx;
- IV. Personalmente: al Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica ubicado en Instituto Literario Poniente 510, Código Postal 50000 Toluca de Lerdo, Estado de México;
- V. Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: A través de la aplicación "Denuncia Edomex", a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, y
- VI. Vía plataforma digital del Sistema de Atención Mexiquense "SAM": en la siguiente liga https://www.secogem.gob.mx/SAM/sit_atn_mex.asp.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" y estará vigente hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa.

TERCERO. Se abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía jurídica que sean contrarias al presente Acuerdo.

CUARTO. Los instrumentos jurídicos celebrados, así como las relaciones jurídicas derivadas de la operación del Programa, continuaran su vigencia, hasta la terminación de los mismos y en concordancia con las presentes Reglas de Operación.

QUINTO. Las dudas y lo no previsto que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas por la Instancia Normativa del Programa.

SEXTO. La entrega del Apoyo Económico del Programa se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal autorizada.

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

EL CONSEJERO JURÍDICO, LIC. JESÚS GEORGE ZAMORA.- RÚBRICA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN.- RÚBRICA.

Al margen Escudo del Estado de México, un logotipo, que dice: Estado de México ¡El poder de servir!, una leyenda, que dice: CONSEJERÍA JURÍDICA, otra leyenda, que dice: MUJERES, Secretaría de las Mujeres.

ACUERDO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL “FONDO ESTATAL DE DESAPARICIÓN” A QUE SE REFIERE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.

LIC. JESÚS GEORGE ZAMORA, CONSEJERO JURÍDICO, Y MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN, SECRETARIA DE LAS MUJERES, EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 53 y 57 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PUBLICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 226 EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO; ARTÍCULOS 41, 42, 43, 44 Y DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, Y

CONSIDERANDO

Que la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado Libre y Soberano de México, prevé que la Comisión de Búsqueda de Personas es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ahora Consejería Jurídica, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, en el territorio del Estado de México, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuyo objeto es impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

Que la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México, establece que el Ejecutivo del Estado deberá constituir el Fondo Estatal de Desaparición, para que la Comisión de Búsqueda de Personas pueda contar con recursos, de manera inmediata, para la adquisición o arrendamiento de equipo que resulte necesario para llevar a cabo acciones de búsqueda de personas, de igual manera, se establece que en la aplicación de los recursos del Fondo Estatal de Desaparición se observarán los principios de publicidad, legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, así como, también que el ejercicio de dichos recursos se realizará conforme a los criterios de transparencia, oportunidad, eficacia y racionalidad.

Que la Secretaría de las Mujeres es la dependencia encargada de promover, coordinar, impulsar, formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas, programas y acciones relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la transversalización de la perspectiva de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres por razón de género y condición social, la implementación de acciones afirmativas que acorten las brechas sociales, la protección integral de mujeres, y la eliminación de cualquier tipo de discriminación que obstaculice el acceso igualitario a las oportunidades, el empoderamiento, y el ejercicio de sus derechos.

Que a la Secretaría de las Mujeres, entre otras, le corresponde formular, proponer, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a la instrumentación de políticas públicas, programas estatales y acciones que promuevan la igualdad de género, la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de las medidas institucionales que aseguren el ejercicio de sus derechos, oportunidades y acceso igualitario a la participación equitativa en el desarrollo económico, político, social y cultural, a fin de eliminar los estereotipos y prácticas sociales que refuerzan la discriminación hacia las mujeres. Además, coordinar, dirigir y supervisar al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Que ante la necesidad de continuar las acciones para la búsqueda y localización inmediata de personas reportadas como desaparecidas en el Estado de México, de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2024, se dispuso que la Consejería Jurídica en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, serán las encargadas de implementar los mecanismos necesarios para la operación de los recursos del mismo, por lo que es necesario emitir los Lineamientos de Operación del Fondo Estatal de Desaparición para el ejercicio del recurso dispuesto en el Presupuesto vigente y de los subsecuentes, en atención a lo establecido en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México.

Que en fecha 29 de febrero de 2024, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió el dictamen respectivo a las presentes Reglas de Operación.

En virtud de lo antes señalado, se expide el siguiente:

ACUERDO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL “FONDO ESTATAL DE DESAPARICIÓN” A QUE SE REFIERE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones y los procedimientos generales que deberá observar la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, para ejercer de manera eficiente, eficaz y transparente, los recursos que destina el Estado para la constitución del Fondo Estatal de Desaparición.

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

I. Comisión: A la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México;

II. Comité Técnico: Al órgano de consulta, verificación, supervisión, comprobación y remisión del cumplimiento de los presentes Lineamientos de Operación;

III. Consejería: A la Consejería Jurídica.

IV. Diagnóstico de Necesidades: Documento metodológico, realizado por la Subdirección de Diagnóstico Operativo, con apoyo de la Unidad de Apoyo Administrativo, ambas de la Comisión, que sustenta el Expediente Técnico y en el cual se determina la necesidad y la viabilidad de adquirir o arrendar equipo necesario para realizar acciones de búsqueda;

V. Expediente Técnico: A los documentos comprobatorios para la asignación de recursos, objeto de los presentes Lineamientos de Operación, los cuales deberán contener la información suficiente y detallada que sustenten la asignación de recursos y su correspondiente valoración;

VI. Fondo: Al Fondo Estatal de Desaparición;

VII. Ley de Desaparición: A la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México, y

Artículo 3. El recurso que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal correspondiente será ejercido a través de la Comisión.

Artículo 4. Los presentes Lineamientos de Operación del Fondo deberán aplicarse, interpretando armónicamente lo establecido en la Ley de Desaparición, la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y su Reglamento, así como, las demás disposiciones jurídicas, administrativas y contables aplicables.

Artículo 5. El Comité Técnico estará integrado por:

- I. La persona titular de la Consejería, quien lo presidirá;
- II. La persona titular de la Comisión, quien fungirá como Secretaría Técnica;
- III. La persona titular de la Dirección Especializada de Búsqueda de la Comisión;
- IV. La persona titular de la Dirección de Análisis y Contexto de la Comisión;
- V. Una persona servidora pública designada por la titular de la Secretaría de las Mujeres;
- VI. Una persona servidora pública designada por la persona titular de la Secretaría de Finanzas;
- VII. Una persona representante de la sociedad civil o institución académica;
- VIII. La persona titular de la Coordinación Administrativa de la Consejería;
- IX. La persona titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión, y
- X. La persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería.

La persona representante de la sociedad civil o institución académica será elegida y aprobada por las demás personas integrantes del Comité, en la primera sesión del año, de entre una terna que proponga la persona representante de la Secretaría de las Mujeres. Cada año, deberá elegirse a una persona representante distinta de la sociedad civil o institución académica; no podrá existir reelección consecutiva.

Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente. El cargo otorgado dentro del Comité será honorífico.

Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona a cargo de la Secretaría del Comité y la persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica, quienes solo tendrán derecho a voz.

Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad o, en su ausencia, la persona representante de la Secretaría de las Mujeres emitirá el voto de calidad.

La persona a cargo de la Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la Presidencia, con tres días hábiles de anticipación como mínimo para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación.

La persona que presida el Comité podrá invitar a sus sesiones a personas representantes del sector público, academia o sociedad civil, cuya intervención se considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra índole que se sometan a su consideración y que sean en beneficio de víctimas o personas ofendidas del delito.

Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad más una de las personas integrantes, siempre y cuando se encuentre presente la Presidencia, la Secretaría, la persona titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica, o sus suplencias debidamente acreditadas.

La persona a cargo de la Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando de manera sucinta el sentido de las intervenciones y cada uno de los acuerdos tomados. Previa aprobación, deberá ser firmada por las personas integrantes del Comité.

Podrá ser considerado el medio electrónico para la notificación y celebración de las sesiones a los Integrantes del Comité.

Artículo 6. El Comité Técnico tendrá la facultad de autorizar la asignación de los recursos del Fondo. Para la supervisión de las acciones, el Comité Técnico podrá solicitar a la Comisión los informes o documentos necesarios para validar su cumplimiento.

Artículo 7. El Comité Técnico sesionará en forma ordinaria cada tres meses y en forma extraordinaria cuando sea necesario. En cada sesión ordinaria la Instancia Responsable deberá informar de manera detallada al Comité sobre el ejercicio de los recursos del Fondo.

Artículo 8. La Presidencia del Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Presidir y representar al Comité Técnico;
- II. Autorizar la convocatoria y el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;
- III. Vigilar el cumplimiento y periodicidad de las sesiones ordinarias;
- IV. Presidir las sesiones vigilando que se cumpla con el orden del día y que se lleven a cabo en orden y con absoluto respeto;
- V. Someter a votación los asuntos tratados en las sesiones;
- VI. Emitir voto de calidad en caso de empate;
- VII. Aprobar y firmar las actas de las sesiones, y
- VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 9. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes facultades:

- I. Preparar el orden del día y organizar las sesiones;
- II. Elaborar el calendario anual de sesiones ordinarias para su aprobación en la primera sesión del Comité Estatal, del ejercicio fiscal vigente;
- III. Elaborar y enviar las convocatorias para la celebración de las sesiones ordinarias, de acuerdo con el calendario correspondiente; y extraordinarias, cuando así lo determine la Presidencia;
- IV. Verificar que se cumpla con el quórum para la validez de las sesiones, llevar la lista de asistencia, así como, elaborar, suscribir y recabar las firmas de las actas correspondientes, mismas que incorporarán los acuerdos que en su caso se adopten;
- V. Expedir certificaciones de la documentación relacionada con las actividades del Comité Técnico;
- VI. Revisar con la Presidencia los asuntos del orden del día;
- VII. Integrar y remitir a las personas integrantes del Comité Técnico la documentación correspondiente incluyendo el orden del día;
- VIII. Efectuar las declaratorias de resultados de votación;
- IX. Informar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico;
- X. Conservar las actas de las sesiones y documentación soporte para su control, resguardo y archivo;
- XI. Elaborar, a petición de la Presidencia, el informe de los acuerdos resueltos y los pendientes por atender, y

XII. Las demás que le encomiende el Comité Técnico, su Presidencia y aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 10. Los recursos del Fondo serán destinados para la adquisición o arrendamiento, de manera inmediata, de equipo necesario para realizar acciones de búsqueda de personas.

Artículo 11. La Comisión deberá justificar el monto de los recursos destinados para realizar las actividades de búsqueda a través del Expediente Técnico, mismo que deberá ser enviado para aprobación del Comité Técnico y deberá considerar lo establecido en el Diagnóstico de Necesidades.

La Comisión deberá recabar y custodiar la documentación comprobatoria y evidencias que justifiquen el gasto, así como, el informe con los resultados de las acciones de búsqueda realizadas.

Artículo 12. Una vez que el Comité Técnico apruebe el Expediente Técnico, la Comisión recopilará toda la información necesaria para que, por conducto de la Unidad de Apoyo Administrativo, se remitan a la Coordinación Administrativa de la Consejería las documentales correspondientes con la descripción de los bienes y servicios que se pretenden adquirir.

La Coordinación Administrativa de la Consejería será la encargada de continuar con los trámites conducentes ante la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, para el registro y alta en el catálogo correspondiente.

Por cumplirse los supuestos de urgencia y de interés público, a que se refiere el artículo 48 fracción IV de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, dado que los recursos del Fondo están destinados para que la Comisión cuente con recursos de manera inmediata, para la adquisición o arrendamiento del equipo que resulte necesario para llevar a cabo las acciones de búsqueda de personas, la Coordinación Administrativa deberá optar por gestionar el procedimiento de contratación de adjudicación directa, con excepción de los casos en que no se requiera de manera inmediata el equipo.

Artículo 13. El incumplimiento a lo establecido en los presentes Lineamientos de Operación se registrará de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Artículo 14. La auditoría, control y vigilancia de este Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México o el Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica,

Artículo 15. Lo no previsto en los presentes Lineamientos será analizado y resuelto por el Comité Técnico.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" y estará vigente hasta en tanto no se emitan modificaciones al mismo o concluya el Programa.

TERCERO. Se abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía jurídica que sean contrarias a las contenidas en el presente Acuerdo.

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

EL CONSEJERO JURÍDICO, LIC. JESÚS GEORGE ZAMORA.- RÚBRICA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN.- RÚBRICA.

AVISOS NOTARIALES

AVISO NOTARIAL POR EL QUE SE DA A CONOCER A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.

NOTARIA PUBLICA No. 8 DEL ESTADO DE MÉXICO

**TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
A 26 DE FEBRERO DE 2024**

AVISO NOTARIAL

Fernando Antonio Velasco Turati, Notario Público número 8 del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla, y con domicilio en la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 11, comunicó a Usted que la Notaria a mi cargo, cambiará su domicilio a partir del día 26 de este mes, al ubicado en "Plaza Sor Juana", Avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 101 de esta misma ciudad, conservando los mismos números telefónicos, correo electrónico y página web; lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos Cincuenta y Seis y Cincuenta y Siete de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2 fracción II, Ciento Cuarenta y Cuatro y Ciento Cincuenta y Siete de la Ley del Notariado del Estado de México y 14 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica.

En términos del Artículo dieciocho fracción V de la Ley del Notariado del Estado de México, solicito se hagan las publicaciones de ley correspondientes en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" y en dos diarios de mayor circulación en el Estado de México.

ATENTAMENTE

LIC. FERNANDO VELASCO TURATI.- RÚBRICA.

NOTARIO PÚBLICO No. 8 DEL ESTADO DE MÉXICO.

Nota: Deberá publicarse una vez.

AVISO NOTARIAL POR EL QUE SE DA A CONOCER A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EL REINICIO DE FUNCIONES DEL LICENCIADO JOSÉ GOÑI DÍAZ, COMO NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 151 CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

**LICENCIADO JOSÉ GOÑI DÍAZ
NOTARIA PÚBLICA N° 151
DEL ESTADO DE MÉXICO**

Av. de las Fuentes #94, Colonia Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950,
Naucalpan de Juárez, Estado de México
notaria151@hotmail.com Tel. 55-55-89-00-06 y 55-55-89-14-88

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 28 de febrero de 2024.

A LA COMUNIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO

A LA COMUNIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Hago de su conocimiento:

- Que con esta fecha reinicio funciones como Notario Titular de la Notaría 151 del Estado de México;
- Que el domicilio de dicha Notaría es el que consta en el membrete; y
- Que el horario de labores será de lunes a viernes de las ocho a las dieciséis horas.

Lo anterior en términos y cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18, fracción IV, y artículo 20, fracción VIII, de la Ley del Notariado para el Estado de México.

ATENTAMENTE

**LICENCIADO JOSÉ GOÑI DÍAZ.- RÚBRICA.
NOTARIO PÚBLICO N° 151.**